



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

**ORGANIZACIÓN RURAL Y DESESTRUCTURACIÓN
CAMPESINA EN MÉXICO: EL CASO DEL MOVIMIENTO AGRARIO
INDÍGENA ZAPATISTA DE VERACRUZ, 2000-2012.**

**TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS**

**PRESENTA:
JOSÉ RAMÓN CARMONA MOTOLINIA**

**TUTORA PRINCIPAL:
DRA. BLANCA RUBIO VEGA (IIS)**

**MIEMBROS DEL COMITÉ TUTOR:
DRA. ESTHER IGLESIAS LESAGA (IIEc)
DRA. ROSA MARÍA LARROA TORRES (CELA)
DR. GERARDO TORRES SALCIDO (CEIICH)
DR. FELIPE TORRES TORRES (IIEc)**

MÉXICO, D.F., FEBRERO DE 2015



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice.

Introducción.....6

Capítulo 1. El patrón de acumulación neoliberal y su impacto en el campo mexicano 1982-2012

1.1 Ascenso del patrón de acumulación neoliberal en América Latina y México: elementos de análisis.....15

1.2 La crisis de la deuda y la imposición de las políticas neoliberales al Estado mexicano.....20

1.3 Reestructuración productiva en el sector agrícola en México.....23

1.4 Desmantelamiento y privatización del sector público en la agricultura.....28

1.5 La fase agroexportadora neoliberal.....30

1.6 La subordinación desestructurante y su impacto sobre el sector campesino.....34

1.6.1 Expulsión de la fuerza de trabajo campesina y su transformación en emigrantes, desempleados, trabajadores informales y precarios rurales.....36

Capítulo 2. Movimientos campesinos-indígenas y procesos de organización sociopolítica en México 1970-2000

2.1 Estructura y procesos detonantes del movimiento campesino-indígena 1970-1985.....40

2.2 Movimientos campesinos e indígenas 1970-1990.....46

2.3 Caracterización del movimiento campesino e indígena de los años noventa y sus demandas por la autonomía, los derechos económicos, sociales y culturales.....56

2.4 Movimientos campesinos-indígenas emergentes en la década de los noventa.....60

2.4.1 Planteamientos sobre la creación de mecanismos de gestión colectiva de los recursos naturales.....65

Capítulo 3. Desestructuración económica en municipios del estado de Veracruz 2000-2012

3.1 Caracterización del proceso de desestructuración económica en diferentes municipios del espacio rural veracruzano.....	66
3.2 Estructura productiva agraria en los municipios de Catemaco, Coyutla, Pajapan, Sotepan, Mecatlán y Filomeno Mata.....	73
3.3 Avance del proceso de certificación de tierras en ejidos y comunidades de los municipios estudiados.....	80
3.4 Composición sociocultural de los grupos indígena-campesinos en localidades, ejidos y comunidades estudiadas.....	83
3.5 Efectos de la desestructuración del campo veracruzano.....	86
3.5.1 Agotamiento de las unidades campesinas y aumento del autoconsumo.....	88
3.5.2 Desarraigo y dispersión territorial: expulsión de la fuerza de trabajo agrícola e incremento de los procesos de emigración internacional.....	89
3.5.3 Disolución de referentes colectivos y disminución de la cohesión comunitaria en espacios rurales de los municipios estudiados.....	94
3.6 Exclusión productiva del campesino.....	95
3.6.1 Fragmentación laboral, desempleo, precarización laboral e informalidad económica en los municipios estudiados	97

Capítulo 4. Antecedentes históricos de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

4.1 Procesos de resistencia y configuración de esquemas de organización campesina-indígena: la UCD y su proceso de conformación.....	103
4.2 Breve caracterización del movimiento campesino-indígena Movimiento Agrario Indígena Zapatista durante el período 1997-2009.....	109
4.3 Alianzas de MAIZ con otras organizaciones de 2002 a 2012.....	115
4.4 Elementos sobre el conflicto entre el movimiento campesino-indígena y el Estado-nación a principios del siglo XXI: MAIZ en el estado de Veracruz.....	117

Capítulo 5. Organización rural y desestructuración campesina: el caso del Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Veracruz.

5.1 Impacto de la desestructuración campesina sobre la capacidad organizativa de MAIZ.....	121
5.1.1 Debilitamiento de las formas de organización socioeconómica rural.....	139
5.2 Formas de organización rural y su relación con el Estado neoliberal.....	143
5.2.1 “Competencia” entre MAIZ y las organizaciones clientelares.....	149
5.2.2 Alcances y límites de las demandas sectoriales de la agrupación campesina-indígena.....	153
5.2.3 Procesos de organización sociopolítica en el campo veracruzano a partir de los cambios sectoriales.....	156
5.3 Transformación interna de la organización rural: re-territorialización y producción social de espacios de resistencia.....	163
5.3.1 Acumulación de experiencia histórica campesina e indígena de grupos organizados en municipios de Veracruz.....	165
5.3.2 Actores rurales: pequeños productores, campesinos, indígenas, jornaleros sin tierra, mujeres, jóvenes y migrantes.....	167
5.3.3 El papel de la práctica de relaciones sociales.....	169
5.3.4 Emergencia de procesos de construcción organizativa sociopolítica a partir de la cohesión interna.....	170
5.4 La forma comunidad: estructura organizativa y forma social.....	172
5.4.1 Creación de dispositivos de gestión colectiva de los recursos naturales.....	174
5.5 Experiencias de organización contra la desestructuración campesina.....	175
5.5.1 Creación de nuevos referentes identitarios: discursos, redes y organización popular.....	176
5.5.2 Proyectos productivos y desarrollo local.....	178
5.5.3 Defensa de derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.....	183
5.5.4 Construcción de ciudadanía en el ámbito rural.....	184

Conclusiones.....	186
Fuentes consultadas.....	192
Anexo.....	206

Introducción.

Los movimientos rurales en México son considerados un tema de interés propio de la historia reciente del país. Algunos análisis acerca de este tipo de movimientos se enfocan en la capacidad que ha tenido el sector del campesinado para preservar ciertas formas de organización y acción colectiva. Sin embargo, desde finales de la década de los ochenta y los primeros años del dos mil este fenómeno se ha expresado de un modo diferente en función de las modificaciones ocurridas a partir de la transición al patrón de acumulación neoliberal.

La situación de los grupos campesinos¹, antes de la etapa neoliberal, se había caracterizado por la subordinación que el Estado mexicano había establecido a través del corporativismo y la integración económica que consiguió por medio de la expansión del mercado interno, que atenuaba, hasta cierto punto, la intensidad de los enfrentamientos que algunos de estos sectores tenían con el Estado de modo recurrente. Aunque pocas veces tenían una respuesta favorable a sus peticiones (entre las que se encontraba principalmente la afectación de neolatifundios), los campesinos, entre ellos principalmente los sectores bajos y de trabajadores sin tierra, seguían demandando soluciones a los diversos problemas que eran inherentes a sus formas de organización productiva, dado que la recesión económica que sobrevino a partir del agotamiento del patrón de industrialización por sustitución de importaciones, afectaba directamente las condiciones de vida de estos sectores sociales.

¹ En este trabajo concebimos al campesinado como el sector constituido por productores agrícolas que emplean fundamentalmente la fuerza de trabajo de los miembros de sus unidades domésticas y ejercen el control real de algunos medios de producción, entre los que puede encontrarse la tierra. Asimismo, consideramos al campesino como una clase explotada por el capital debido a la subordinación a la cual es sometido como agente económico en el proceso de reproducción del capital a través de la producción de mercancías (bienes agrícolas) y su inserción a la esfera del mercado, así como por su vinculación con el Estado y otros agentes económicos en la sociedad capitalista moderna (Bartra A., 2006).

Desde finales la década de los setenta, este sector trató de impulsar modificaciones profundas en la sociedad mexicana, a partir de movilizaciones y protestas que se exacerbaban a medida que sus condiciones económicas iban agravándose. En ese contexto, los campesinos, encuadrados en formas de propiedad social como el ejido y las comunidades agrarias, o aquellos como los pequeños propietarios minifundistas que se habían reproducido en una estructura económico-social agraria definida por la concentración de recursos económicos y materiales, no resultaron beneficiados por los cambios económicos derivados, entre otros factores, de las políticas neoliberales que aplicó el gobierno mexicano desde 1982. Así, los diferentes gobiernos federales desde Miguel de la Madrid disminuyeron de manera significativa los recursos económicos destinados al sector agropecuario. Más adelante, con Salinas de Gortari comenzaron a operar los procesos de desmantelamiento y privatización de las empresas públicas que se dedicaban a la producción de insumos para la agricultura o al procesamiento de los bienes agrícolas producidos.

A principios de los años ochenta, después de la coyuntura económica que derivó en la crisis de 1982, diversos sectores rurales crearon nuevos instrumentos de organización económica autónoma, lo que permitió a los grupos organizados recuperar ciertos esquemas económicos para mantener su capacidad productiva y organizativa, en términos sociopolíticos.

Sin embargo, a los cambios económicos se agregaron las modificaciones registradas en el ámbito constitucional, dado que a partir de las reformas al artículo 27, aprobadas en 1991, que reglamentaba las formas de propiedad social en el espacio agrario, se permitió la venta y renta de las propiedades ejidales y comunales (que antes de la reforma eran inalienables), y que con el proceso de certificación de derechos ejidales (Procede), en la actualidad han pasado a formar parte del mercado de tierras.

Éste y otros elementos, como la cancelación del reparto agrario también instaurado a partir de aquella reforma jurídica, fueron detonantes de movilizaciones y protestas por parte del sector de productores campesinos. En este contexto, estas unidades económicas quedaron aún más expuestas a la competencia con sectores productivos capitalizados y agentes económicos vinculados a las empresas agroindustriales nacionales y transnacionales.

Así, el proceso de reestructuración económica que se produjo en el ámbito rural-agrario de México a partir de la implementación de las políticas neoliberales, ha sido uno de los principales elementos para la agudización de las condiciones de vida de las clases trabajadoras rurales. Por un lado, desde la década de los ochenta se han efectuado cambios en la política pública orientada al sector agropecuario que favorecieron una disminución progresiva de los recursos públicos que el Gobierno Federal mexicano ha destinado para apoyar a ciertos grupos pertenecientes a este sector de la actividad económica. Este proceso ha incidido fundamentalmente en las formas de organización productiva de los diferentes sectores agrícolas, ampliando la capacidad productiva de los agricultores que tienen un papel importante en la producción de cultivos para ciertos segmentos del mercado interno o aquellos que pudieron insertarse en el mercado internacional a partir de la producción de cultivos de exportación, o la articulación con las grandes empresas agroalimentarias. Por otro lado, los procesos de liberalización comercial y apertura económica implementados por el Estado mexicano durante los años ochenta y noventa, primero con el ingreso de México en el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en 1986, y posteriormente con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 1994, se consideran el parteaguas para el aseguramiento de ciertos mecanismos que han permitido procesos de concentración económica en determinados sectores de la producción.

En otro orden de problemas, durante los años noventa y principios del siglo XXI surgieron en este país diversos actores y sujetos rurales que han tratado de enfrentar las consecuencias que han tenido estos procesos sobre los sectores campesinos e indígenas. Uno de estos actores sociales conformado a finales de la década de los noventa es el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Esta organización rural ha continuado con su proceso de construcción organizativa en el espacio rural de varios estados del país, entre ellos Veracruz. Durante más de 15 años, esta organización se ha mantenido después de escindirse de la Unión Campesina Democrática (UCD). Sus ejes de organización se basan en la conformación de grupos organizados en el espacio rural, intentando hacer frente a los factores detonantes de la exclusión económica, social y política que experimentan los grupos indígenas y ciertos sectores del campesinado, cuya persistencia da pie a la vigencia de este tipo de organizaciones rurales.

Considerando los elementos anteriores, el objetivo general del trabajo es: analizar los efectos de la desestructuración socioeconómica de las formas productivas² de los campesinos/asalariados rurales que pertenecen a la organización MAIZ. Se plantean objetivos específicos como: el análisis de las modificaciones en las formas organizativas sociopolíticas de MAIZ-Veracruz a partir de la desestructuración económica y la configuración de estrategias de lucha por parte de la organización rural estudiada; así como analizar las dinámicas de cambio interno y externo en las formas organizativas de MAIZ y la capacidad organizativa de las diferentes categorías de trabajadores rurales, en referencia a sus esferas de producción.

² En este sentido, se considera necesario recordar que el análisis pone "...el acento sobre el carácter móvil y cambiante de la estructura, sobre las desestructuraciones que ocurren en ella, en lugar de poner el acento sobre los invariantes y la inmovilidad estructural." (Lefebvre, 1973: 80, 122).

En cuanto a las preguntas de investigación se plantean principalmente dos: 1) ¿las reformas jurídicas y la política pública implementadas por el gobierno federal en los ejidos y el sector agropecuario desde la década de los noventa, fueron una vía de desestructuración de la organización campesina? (Moguel, 1998); y de forma más específica, 2) ¿cuáles son los efectos de la desestructuración de las formas productivas-laborales campesinas en la capacidad organizativa del Movimiento Agrario Indígena Zapatista?

Para responder a estas interrogantes se propone la hipótesis de que *el proceso de desestructuración socioeconómica acentúa el agotamiento de la economía doméstica campesina y la precarización del asalariado agrícola, lo que ha promovido la emigración de algunos miembros de estas unidades hacia los centros urbanos, y favorece la dispersión de las comunidades campesinas y de asalariados rurales, lo cual disminuye la cohesión comunitaria entre estos grupos y provoca un proceso de debilitamiento de las formas de organización socioeconómica sobre las que se habían montado procesos de organización rural como en el caso de MAIZ, debido a que la capacidad de organización y construcción de su proyecto económico-sectorial está limitada en cuanto a los recursos materiales y económicos de sus integrantes y su vinculación se genera a partir de esquemas de organización sociopolítica que se adecuan a la fase reciente en los procesos de construcción de organizaciones rurales.*

Sin embargo, a partir de estos procesos los grupos campesinos en el espacio rural veracruzano han sido obligados a crear formas locales de organización que se basan en la cohesión interna de sus grupos, lo cual ha permitido mantener su acción organizativa a nivel local y proyectarse en determinadas coyunturas políticas –a partir de las alianzas que establece con otras agrupaciones- a los planos estatal y nacional.

El trabajo pretende analizar las variables que considera la hipótesis intentando demostrar, en función de datos estadísticos, la existencia de los supuestos planteados. En el capítulo referente a los efectos de la desestructuración socioeconómica en la organización MAIZ, se emplean testimonios de miembros de la agrupación entrevistados para analizar las variables planteadas en la hipótesis a partir del estudio de caso.

En cuanto a los aspectos metodológicos de esta investigación, se debe señalar que en una primera etapa se realizaron entrevistas de sondeo con delegados que asistieron a la Asamblea estatal de MAIZ-Veracruz (12 de octubre de 2011).

A partir de este acercamiento inicial, se conoció el número aproximado de participantes en la organización MAIZ en cada zona de ese territorio. Así, se determinó tomar como muestra el 10% de la población que pertenecía en calidad de miembro activo de la organización MAIZ en cada zona seleccionada, para entrevistarla de acuerdo al criterio de mayor presencia en cada zona. En ese sentido, las entrevistas se basaron en la proporción de individuos que –sin distinción del tipo de actividad económica realizada- participaran en la organización y fueran habitantes de las zonas en las que MAIZ tiene mayor presencia. Se consideró que el 10% daba una visión cercana a la realidad, porque era un universo de estudio pequeño. Por otra parte, se empleó la técnica de entrevistas cualitativas, lo que implica el elemento de la subjetividad³ en los testimonios –aunque éste no invalida su objetividad-, ya que se proponía conocer la experiencia vivida por los sujetos que participan en la organización y no únicamente su percepción u opinión sobre los procesos analizados.

³ En torno a la cuestión del análisis que se desarrolla a partir de este tipo de entrevistas, consideramos que el elemento de la subjetividad que se puede referir a través de los testimonios no se entiende aquí solamente como una cualidad específica del individuo que ofrece su propia visión sobre los acontecimientos de la realidad, sino que se amplía al espacio social como el marco referencial del carácter colectivo de los procesos sociales estudiados, dado que: “La subjetividad está constituida tanto en el sujeto individual como en los diferentes espacios sociales en que este vive. El carácter relacional e institucional de la vida humana implica la configuración subjetiva no sólo del sujeto y de sus diferentes momentos interactivos, sino también de los espacios sociales en que esas relaciones se producen.” (González, 2007:17).

Las entrevistas que se desarrollaron durante la segunda etapa, en el período del 01 al 30 de enero de 2012, tuvieron como propósito cubrir de manera sincrónica los diferentes municipios en los que MAIZ contaba con agrupaciones para así poder recopilar la información sin que se diera oportunidad a que los miembros de los grupos comentaran previamente sobre la realización de las entrevistas. Con base en estos aspectos, las entrevistas por zona se llevaron a cabo de la siguiente forma:

Zona	Municipios	Integrantes*	Entrevistas
Los Tuxtlas	Catemaco	100	10
Sur	Soteapan, Pajapan	200	20
Totonaca	Coyutla, Filomeno Mata, Mecatlán	400	40

*El número de integrantes de las agrupaciones por cada zona seleccionada fue proporcionado previamente por los respectivos coordinadores.

De ese modo, se llevaron a cabo 70 entrevistas de las cuales 54 fueron hechas con mujeres y hombres rurales, mientras que 16 más se realizaron con informantes clave de los grupos pertenecientes a MAIZ en las localidades y comunidades rurales de las zonas seleccionadas. En cuanto al instrumento para recopilar la información de campo, se elaboraron entrevistas semi-estructuradas. Éstas se aplicaron tanto a los hombres y mujeres rurales que pertenecen a la agrupación como a los informantes clave.

Por otra parte, dado que el universo de análisis no fue elegido al azar, en función de que los sujetos entrevistados pertenecen a los grupos que forman parte de la organización MAIZ, es necesario señalar que la información recopilada cuenta con un sesgo, ya que ésta proviene de hombres y mujeres que tienen un nivel de conciencia social desplegada a partir del trabajo colectivo realizado con esa organización, en algunos casos muy reciente y en otros que data de varios años atrás. No obstante, esta característica de los sujetos entrevistados

permite considerar que los testimonios poseen la veracidad propia de su experiencia en el trabajo organizativo que han llevado a cabo.

En cuanto a la codificación de la información obtenida mediante las entrevistas, se empleó el programa Atlas.ti en el procesamiento de la misma, así como también para recuperar los testimonios de las mujeres y hombres que participan en MAIZ.

El trabajo consta de cinco capítulos, en estos se abordan los temas planteados a partir de información recopilada de fuentes bibliográficas, hemerográficas, estadísticas y, como se mencionó anteriormente, de testimonios recopilados a través de entrevistas. En el primer capítulo se analizan las características que adquirió el patrón de acumulación neoliberal para el caso de México y los procesos económicos, sociales y jurídicos que permitieron su configuración. Se estudia el impacto de estos procesos económicos y sociales en el sector agropecuario, así como en el campesinado mexicano y la población rural.

En el capítulo dos se propone una descripción de los procesos de construcción de algunos movimientos y organizaciones rurales a partir de las movilizaciones campesinas surgidas durante el período 1970-2000. Se plantea que la acumulación de experiencia le permitió a determinados movimientos y organizaciones rurales desembocar a finales del siglo XX en procesos de organización sociopolítica con características distintas a las que tuvieron éstos a lo largo de la etapa precedente.

En el tercer capítulo se analizan los efectos del proceso de desestructuración económica en la estructura productiva agropecuaria de los municipios seleccionados. Se estudia el impacto de la desvalorización de los cultivos básicos. Se considera el avance de la certificación de las parcelas ejidales y los efectos de estos procesos sobre el campesinado indígena, a partir de algunas variables de análisis como la venta de parcelas, los ingresos, el desempleo y la migración en los municipios estudiados, que permiten observar el

comportamiento del fenómeno de desestructuración y la profundidad que alcanza en los territorios estudiados.

El capítulo cuarto describe los antecedentes históricos de la organización rural Unión Campesina Democrática (UCD) en el estado de Veracruz, de la cual surgió el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Se identifican algunos de los elementos que posibilitaron la constitución de MAIZ. Se señalan también las alianzas posteriores con otras agrupaciones a nivel estatal y algunos de los factores que han permitido a la organización consolidarse y mantenerse activa.

En el capítulo quinto se abordan los aspectos relacionados con el impacto del proceso de desestructuración campesina sobre la organización rural Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Se propone una descripción de cómo durante la última década, las comunidades y grupos pertenecientes a MAIZ han impulsado procesos de transformación estructural a partir de distintas propuestas que favorecen una transformación interna, para atenuar la degradación de las condiciones de vida de los grupos sociales que pertenecen a la organización.

En el último capítulo se ofrecen algunas conclusiones finales.

Capítulo 1. El patrón de acumulación neoliberal y su impacto en el sector agropecuario mexicano 1982-2012.

En este capítulo se describen algunos de los elementos que favorecieron la transición del patrón de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones al patrón de acumulación neoliberal en algunos países de América Latina. Se estudia el proceso de reestructuración económica registrado a partir de la configuración de ese patrón de acumulación y las implicaciones que tuvo en el sector agropecuario del país, así como el establecimiento de la fase agroexportadora neoliberal. Finalmente se considera el impacto de estos procesos económicos y sociales en el sector campesino mexicano, en tanto que ha favorecido la exclusión y precarización social y económica de amplios sectores del campesinado y la población rural.

1.1 Ascenso del patrón de acumulación neoliberal en América Latina y México: elementos de análisis.

A principios de la década de los setenta en América Latina se hizo evidente el agotamiento del patrón de acumulación⁴ basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que dominó en las economías de mayor nivel de desarrollo⁵ en la región, lo que combinado con la crisis capitalista mundial permitió el ascenso de un nuevo patrón de

⁴ Entendemos por patrón o régimen de acumulación a “[...] una modalidad, históricamente determinada, de funcionamiento del capitalismo. Es decir, a ciertas formas que asume el proceso de valorización y de acumulación capitalistas, por medio de las cuales el sistema procesa sus contradicciones e impulsa el proceso de crecimiento y desarrollo” (Valenzuela, 1990:31, en Rubio, 2001: 31-32).

⁵ Según Valenzuela (1986), la CEPAL conceptualiza al ‘modelo’ de desarrollo ISI como una de las dos grandes etapas por las que han transitado los países de América Latina. En los países de mayor nivel de desarrollo en la región el patrón ‘tradicional’ o de industrialización se extiende desde el período de fines de los años 30 hasta el inicio de la década de los setenta del siglo pasado. Asimismo, existen dos factores esenciales que caracterizan a este patrón: 1) por un lado, existe un desarrollo insuficiente del sector I de producción de medios de producción y en particular en los sectores estratégicos, esto incluye a “[...] cierto tipo de bienes intermedios y buena parte de los bienes de capital que demanda el proceso de acumulación. Es decir, el proceso de sustitución resulta débil o inexistente para tales franjas [...]”; 2) y por otro lado, conserva el carácter exportador que distingue al patrón de acumulación ‘primario-exportador’ (Valenzuela, 1986: 28).

acumulación en función de la aplicación de determinadas políticas fundadas en el pensamiento neoliberal o neoliberalismo.

La crisis de 1974-76 y la transición de la etapa del régimen de acumulación fordista a una etapa ‘posfordista’ a fines de los años setenta en los países centrales (Hirsch, 2002), conforman el contexto en el cual se desplegaron cambios profundos a nivel social, económico y político en América Latina.

La gran crisis de los setenta y la subsiguiente depresión inflacionaria se relacionan con el agotamiento de la base tecnológica del fordismo, así como con factores sociales como el gran activismo de los trabajadores dentro de un contexto de creciente radicalización social, con la incapacidad del régimen institucional keynesiano para contener la inflación y con un entorno internacional de estrechamiento del espacio de valorización del capital tanto por la extensión del Campo Socialista en Asia, América Latina y África y la expansión de la economía pública en Occidente y el Tercer Mundo. En conjunto, estos tres factores erosionaron la rentabilidad capitalista en los principales países, primero en los Estados Unidos desde la segunda mitad de los años sesenta y poco después en Europa. (Dabat, 2010: 31).

En los países latinoamericanos, en la década de los setenta: “entra en crisis el patrón sustitutivo de importaciones, especialmente en los países del cono sur.” (Valenzuela, 1986: 23). Como señalan algunos autores el remplazo del patrón de acumulación ISI por un nuevo patrón de acumulación en países del cono sur, como Chile, se manifestó tras el golpe militar de 1973, así como en Argentina tras la toma del poder por los militares en 1974 (Valenzuela, 1986; Osorio, 2009). No obstante, la transición al patrón de acumulación neoliberal ocurrió con desfases temporales en los diferentes países de América Latina a partir del establecimiento de políticas económicas fundadas en esa corriente de pensamiento económico-social⁶. De ese modo, la aplicación de las políticas neoliberales

⁶ Para Harvey (2008): “El neoliberalismo es una teoría de prácticas políticoeconómicas que proponen que el bienestar humano puede ser mejor logrado mediante la maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas y libre comercio. El papel del Estado es crear y preservar un marco institucional apropiado para tales prácticas [...] El intervencionismo estatal en los mercados, una vez creados, debe limitarse a lo básico ya que

permitió la conformación del patrón de acumulación neoliberal sustentado en rasgos diferentes al patrón ISI.

Uno de los elementos que explica la crisis estructural en las economías latinoamericanas es que los excedentes de capital y fuerza de trabajo no se pudieron combinar de una forma rentable. Dicho en otras palabras, porque los costos de la fuerza de trabajo se volvieron mayores debido a que el salario real crecía más rápido que la productividad del trabajo. Con ello disminuyó la tasa de beneficio a medida que se incrementaba el volumen de producción pero no la plusvalía apropiada por el capital.

En el caso de México, de 1970 a 1976 la participación de las remuneraciones medias de los asalariados en el Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 35.67% a 40.26% (Huerta, 1987: 44, en Rubio, 2001: 58), en tanto que la productividad del trabajo mostró un declive en la industria de transformación o manufacturera, en donde pasó de una tasa media anual de 4.3 % en el período de 1965-1970 a un 3.9% entre 1970-1975, con un descenso posterior a 3.2% de 1975 a 1980 (Valenzuela, 1986: 105).

Durante el período de 1970-1978, la tasa media anual de crecimiento de la inversión en la industria manufacturera en este mismo país fue de 1.1%, mientras que la composición de la inversión bruta fija en ese sector era la siguiente: para el año 1970 el subsector de bienes intermedios constituía el 43.4% y aumentó al 48.5% en 1978; por otra parte el subsector de bienes de consumo no duradero alcanzó el 40.1% en 1970 registrando posteriormente un descenso al 33.7% en 1978, y por último el subsector de bienes de consumo duradero y de capital representaba el 16.5% en 1970 y se incrementó a 17.8% en 1978 (Valenzuela, 1986: 39). Los datos muestran una tendencia al aumento de la inversión, principalmente en las

el Estado no puede poseer suficiente información como para anticiparse a señales del mercado (precios) y porque tan poderosos intereses inevitablemente deformarán e influirán las intervenciones estatales, particularmente en las democracias, para su propio beneficio.” (Harvey, 2008: 19).

ramas productoras de bienes intermedios, y la disminución de esta variable en otros subsectores como el de bienes de consumo no duradero –que constituían una parte significativa de la industria que abastecía de productos al grueso de la población y sostenía a un mercado interno ampliado-, a excepción del sector petrolero que durante el período señalado mantuvo su crecimiento.

Dadas las características particulares de las economías capitalistas en Latinoamérica estos procesos en combinación con un bajo crecimiento de la inversión productiva abrieron el camino a la quiebra de empresas pequeñas y medianas, lo que en consecuencia provocó el aumento de los niveles de desempleo en la población. Así, para 1985: “el desempleo abierto en América Latina alcanzó un crecimiento medio anual del 10.1%, mientras que en países como Chile, Panamá y Venezuela alcanzó tasas del 17.0%, 15.7% y 14.3% respectivamente.” (Rubio, 2001: 58-59).

Por otra parte, para el caso de México se estimaba que hacia fines de 1982 la tasa de desocupación era superior a 8%, y siguió en aumento dado que alcanzó 11.4% en 1983 y 14.6% en 1984⁷, (Valenzuela, 1986: 160).

Además, la transición de un patrón de acumulación a otro sobrevino en el contexto de la inserción internacional de las economías latinoamericanas en el nuevo sistema financiero mundial, lo cual marcó de manera significativa la participación de éstas en la economía capitalista mundial con un papel subordinado al dominio de los países hegemónicos (Aguirre, 2006). Así, la conversión de los sistemas financieros nacionales y el paso a una nueva fase de integración del sistema financiero mundial, fue uno de los procesos que antecedieron al incremento de la deuda externa en los países latinoamericanos.

⁷ El aumento de la desocupación fue constante no sólo en esos años sino en el período consecuente. Las cifras refieren que ésta se incrementó de 1 millón a 6.5 millones de personas sólo entre 1982 y 1988 (Calva, 1988: 98).

En cuanto a las características del patrón de acumulación neoliberal⁸ de acuerdo con Valenzuela (1986), se conformó por ciertos elementos esenciales como: a) la industria de transformación o manufacturera conserva su liderazgo y debido a la importancia que asumen los sectores de producción de bienes intermedios y de capital, el patrón de acumulación se define como secundario; b) dado que esas secciones son las que se desarrollan de modo preferente y ellas operan con una alta composición orgánica (lo cual evita la posible reducción de la tasa de ganancia elevando la tasa de plusvalía y el grado de monopolio), este patrón tiene la tendencia a imponer pautas regresivas en la distribución del ingreso por lo que se califica como ‘concentrador y excluyente’; c) como componente significativo se propone que en condiciones ‘normales’ el funcionamiento de este patrón provocó el quiebre de los regímenes políticos de tipo ‘demoburgués’, los cuales pasaron a formas dictatoriales como ocurrió en los casos de Chile, Argentina y otros países del cono sur; d) se abrió camino a la apertura externa de las economías latinoamericanas caracterizadas en su etapa anterior por la sustitución de importaciones, por medio de un ‘reordenamiento de la estructura industrial’ y este proceso avanzó solamente en los sectores pesados, con ello se generó el auge de las exportaciones manufactureras y le otorgó al patrón un carácter ‘aperturista y exportador’; e) debido a esta vocación ‘secundario-exportadora’ y a la facilidad que tiene el capital transnacional en el mercado internacional, el patrón tiene un componente desnacionalizador (y transnacionalizador como se expresa

⁸ Empleamos el concepto de patrón de acumulación neoliberal en razón de que fue a partir de la imposición de las políticas neoliberales en los países de América Latina como un mecanismo para ‘sanear’ el funcionamiento del proceso de valorización y reproducción del capital en las economías de la región después de la crisis del patrón de industrialización, lo que permitió la reorientación del patrón de acumulación de capital. En ese sentido, consideramos que se debe distinguir entre la política económica como el conjunto de políticas aplicadas por los gobiernos para dar cauce a las variables macroeconómicas y el patrón de acumulación de capital como una modalidad histórica que determina el funcionamiento del proceso de valorización y acumulación de capital. Así pues, este concepto también implica a los valores de uso que se producirán de manera preferente para la reproducción del capital en función de diversos factores.

actualmente); f) aunado a ello y dadas las exigencias de centralización de capitales el patrón supone la participación activa del Estado en diferentes tareas (Valenzuela, 1986: 30).

El ascenso del patrón de acumulación neoliberal explica buena parte de los cambios y las amplias transformaciones en los diferentes campos de actividad económica, no sólo en la región de Latinoamérica sino en otros entornos geográficos del mundo. No obstante, en el caso de México su implementación comienza a principios de los años ochenta en el contexto de la crisis económica que había manifestado sus primeros signos desde principios de la década de los setenta. Pero los cambios respecto al reordenamiento de las actividades económicas en su conjunto se hicieron posibles en el período posterior a la crisis de la deuda externa de 1982, después que el Estado mexicano asumió compromisos para implementar los planes y programas dictados por organismos financieros internacionales que favorecieron la nueva inserción de las economías latinoamericanas –y la mexicana específicamente- en el proceso de globalización neoliberal.

1.2 La crisis de la deuda y la imposición de las políticas neoliberales al Estado Mexicano.

Posterior a la crisis capitalista mundial de los años setenta uno de los procesos que permitieron el ajuste de la economía mundial realizado por los países centrales fue la transferencia de beneficios a través del mecanismo de la deuda externa, es decir, mediante la extracción de excedentes de las economías periféricas a las economías metropolitanas.

Como en la mayor parte de los países de América Latina a principios de los años ochenta, el gasto público del Gobierno Federal mexicano se había elevado desde menos de 20% hasta más de 30% del PIB entre 1970 y 1982 (Dabat, 2010: 37), debido a los descubrimientos de grandes yacimientos petroleros y al aumento del gasto público que se

destinó principalmente a la inversión pública productiva (Ayala, et al, 1986). Así, de 1976 a 1982 el porcentaje de la deuda externa de México creció a un ritmo de 25% anual (Lichtensztein, 1984).

La moratoria del pago de la deuda declarada por el gobierno mexicano encabezado por Miguel de la Madrid originó la negociación con los acreedores de ésta, es decir, con los dos principales organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Estos condicionaron el préstamo en función de la aplicación por parte del gobierno mexicano de dos políticas diseñadas para hacer frente a las ‘condiciones económicamente adversas’ del país en ese momento (Pozas, 1999).

Se trata de las políticas definidas como:

- a) La política de estabilización y ajuste, y;
- b) La política de cambio estructural o reforma económica.

Cada una presentaba puntos diferentes en torno a la modificación de los patrones de estructuración de la producción económica y de la constitución del Estado mexicano. La primera, propuesta dentro de los planes diseñados por el FMI, planteaba la necesidad de controlar los efectos de la inestabilidad económica –relacionada con el aumento de la inflación y la recesión en la que había entrado la economía mexicana-, con algunas medidas de política económica formuladas en relación a la política fiscal y la política monetaria. Cada una estaba enfocada al propósito de controlar la ‘deficiencia’ en la administración gubernamental.

La segunda impulsada por el BM e integrada como un conjunto de diferentes reformas, se dirigía a la reforma del marco de relaciones del Estado, promoviendo lineamientos que se concentraban en disminuir su participación dentro de las actividades del mercado,

otorgándole un mayor peso a la participación del sector privado en la administración de servicios antes controlados por el Estado (Cortés, 2000).

Como consecuencia de la reorientación de las políticas del Estado mexicano a partir de 1982, se sustituyó la idea de que éste debía intervenir en la regulación y distribución de los beneficios producidos por la sociedad y ser el rector de la economía, para dar paso a la idea de que este papel estaba reservado solamente al mercado.

Las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno mexicano tuvieron sus primeros efectos desde 1982 –en el marco de la crisis-, sobre todo en la distribución del producto nacional. De ese modo, mientras que la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB había representado un promedio de 37.1% entre 1970 y 1981, para 1982 el porcentaje se redujo a 35.2 y continuó su caída a 29.4% en 1983, hasta llegar a 28.4% en 1986 (Calva, 1988: 73).

Por otra parte, Calva (1988) indica que los salarios que sufrieron en mayor proporción el deterioro fueron los de las categorías de obreros con ingresos superiores al mínimo oficial, como en el caso de los salarios en la industria manufacturera que presentaban para 1987 una reducción de hasta el 53.5% del poder adquisitivo que tenían en 1982 (Calva, 1988: 74). Y en cuanto al pago de la deuda externa, que de 1983 a 1986 fue de 27 mil 200 millones de dólares, como afirma el autor mencionado, éste se cubrió con la disminución de la proporción de las retribuciones de los asalariados en el PIB, la cual en el mismo período alcanzó la cifra de 53 163.2 millones de dólares (al tipo de cambio de aquellos años) y que además de pagar los servicios de la deuda externa también sirvieron para enriquecer al gran capital mexicano (Calva, 1988: 79).

No obstante, este mecanismo de transferencia se aplicó de manera generalizada a las economías de la región, pues desde 1982 hasta 1996 América Latina había pagado 739 mil

900 millones de dólares por concepto de deuda externa que significaba más del doble de lo que debía en 1982, esto es 300 mil millones dólares (Delgado, 2009: 29).

Para el caso de México, se puede afirmar que la crisis económica de 1982 agudizó las contradicciones que operaban en el sistema y se convirtió en el punto de ruptura que abrió paso para que las clases dominantes dispusieran la cancelación del proyecto político-económico centrado en la industrialización nacional que había entrado en su etapa avanzada⁹.

Por otro lado, con las políticas de estabilización y ajuste y la política de cambio estructural, impuestas por el FMI y el BM respectivamente, se establecieron las bases para la aplicación de determinadas políticas fundadas en las pautas del pensamiento neoliberal. Partiendo de estos lineamientos el Gobierno Federal mexicano, a través de la política económica, restringió el gasto público destinado a la inversión productiva en el sector público y a su vez promovió las reformas económicas, jurídicas y constitucionales para el desmantelamiento y privatización de las empresas que operaban en ese sector.

Estos lineamientos en conjunto con otros de similar importancia posibilitaron el reordenamiento de la economía con una orientación clara hacia la expansión y dominio del sector privado, y en particular en beneficio del capital transnacional. Las implicaciones que tuvo este proceso se observaron en los distintos sectores de la economía, sin excepción alguna. Así pues, el sector agrícola ha sido y es uno de los que han ocupado una posición central respecto a los cambios estructurales que han ocurrido en la economía del país, basados en el reordenamiento económico iniciado a partir de 1982.

⁹ Según Valenzuela (2006), el proceso de declive del patrón de industrialización tardó más tiempo en ocurrir en México, a diferencia de otras economías de la región. “En México, el modelo de industrialización sustitutiva duró más que en otros países latinoamericanos. La crisis terminal llegó al finalizar el sexenio de López Portillo, 1982. Pero el país no avanzó a una fase superior de carácter secundario exportador: industrialización pesada (bienes de capital) e industrialización de las exportaciones. Lo que tuvo lugar, con De la Madrid, fue la emergencia del modelo neoliberal.” (Valenzuela, 2006: 101).

1.3 Reestructuración productiva en el sector agrícola en México.

A lo largo del período de auge del patrón ISI, el sector agrícola representaba una fuente importante de divisas y a su vez producía los bienes y materias primas demandados en el mercado interno tanto por las industrias, como para el consumo de la población del país (Rubio, 2001; Durán, 1988). Sin embargo, a principios de los años setenta la agricultura fue uno de los sectores económicos en México que reflejaron con claridad el fenómeno de agotamiento del patrón de acumulación que se conformó a partir de la década de los cuarenta. La manifestación de éste en el sector sobrevino desde la segunda parte de la década de los sesenta, a través de una larga recesión que se prolongó hasta los años setenta (entre 1966 y 1976 el crecimiento agrícola fue de 0.8% anual, inferior al crecimiento demográfico que para el mismo período alcanzó 3.3%) (Calva, 1988: 12), y se constituyó en el prelude de la crisis de un patrón de acumulación de capital autolimitado por las características propias de las formas económicas del capitalismo dependiente (Ayala, et al., 1986).

A partir de la década de los setenta, México había adoptado una política de fijación de precios para los productores agrícolas, que en combinación con el aumento del costo de los insumos y materias primas para la agricultura comenzó a impactar negativamente al sector en su conjunto. En ese marco, el sector campesino tanto en los núcleos ejidales como el de las zonas constituidas por propietarios minifundistas quienes no poseían cuantiosos recursos económicos, estaba menos preparado –considerando las consecuencias que la crisis económica tenía sobre sus ingresos-, para enfrentar el escenario de recesión económica que impactaba al conjunto de la población trabajadora, cuyos salarios iban perdiendo gradualmente su poder adquisitivo (Ayala et al., 1986; Calva, 1988).

A esto se agregaba el hecho de que tanto México como otros países de la región se habían convertido en importadores de granos básicos. En el caso de México, para la década de los ochenta se había convertido en el segundo importador de cereales en América Latina alcanzando un 22.03% en las importaciones de estos productos (Rubio, 2001). Esto reflejaba el agotamiento de un modelo productivo en la agricultura que estaba vinculado al desarrollo del sector industrial que comenzaba a declinar, así como la incapacidad de diferentes sectores de la rama agrícola para producir lo requerido por el mercado interno.

No se puede afirmar que estos factores ocasionaron la emergencia del proceso de reestructuración productiva¹⁰ que comenzó a experimentar el sector agrícola en México a partir de la década de los ochenta. No obstante, este trabajo parte del supuesto de que la reestructuración económico-productiva se produjo como parte del mecanismo de refuncionalización del sistema económico para posibilitar la acumulación capital, a través de los cambios económicos derivados del agotamiento y sustitución del patrón industrializador que comenzó a resquebrajarse en la segunda mitad de los años setenta. En el sector de la agricultura, dicho proceso se manifestó a través del declive de distintos subsectores como la agroindustria procesadora de alimentos y productora de materias primas, la cual sobrevino con la contracción del mercado interno derivada de la crisis económica (Rubio, 1999: 269).

En ese marco, se propone que la reestructuración productiva de la agricultura mexicana tuvo como factores detonantes, además de los elementos estructurales anteriormente señalados, por un lado a la política agrícola impulsada desde el gobierno de Miguel De la

¹⁰ Para Rubio, la reestructuración se entiende como: “una etapa transitoria en la cual, de manera esencial, se recomponen los elementos para la obtención de la ganancia y con ello la acumulación, centrados sobre nuevas formas de dominio y explotación del trabajo. En este sentido, la reestructuración no constituye todavía el nuevo orden, pero lo prefigura, genera sus condiciones, lo perfila, de tal modo que en él se encuentran ya delineados los rasgos más sobresalientes de lo que será la nueva fase productiva.” (Rubio, 1999: 262).

Madrid¹¹; y por otra parte, los procesos de privatización del aparato productivo estatal dirigido al sector agrícola. Estos dos elementos fueron instrumentados en la configuración de una nueva etapa de penetración del capital transnacional en la economía y sociedad agraria mexicanas, durante las dos últimas décadas del siglo pasado. Dicha etapa inscrita en el marco de la reestructuración productiva de la agricultura mexicana, transitó mediante una reforma del Estado mexicano que instrumentó las políticas económicas neoliberales partiendo de las políticas de estabilización y ajuste y la política de cambio estructural, dictadas por el FMI y el BM. De acuerdo con Calva (1988),

las políticas económicas instrumentadas por el Estado a partir de 1982 [...] han determinado: a) la brusca caída de la inversión pública en irrigación, fomento agrícola y crédito rural; b) la contracción de la demanda interna de alimentos y materias primas agropecuarias (al deprimir los salarios y el nivel de la actividad industrial); y c) la evolución de las relaciones de precios desfavorables a la agricultura, de una manera directa mediante la fijación de los precios de garantía de los granos y de los precios de venta de ciertos insumos producidos por el Estado (como los fertilizantes y los combustibles) y de manera indirecta por la política cambiaria que ha encarecido la maquinaria agrícola y ha puesto al consumidor nacional de alimentos en desventaja respecto al consumidor extranjero que paga en dólares sobrevaluados (Calva, 1988: 20).

Esencialmente, los cambios en la política agrícola se desplegaron después de 1982 con las políticas neoliberales aplicadas después de la crisis de la deuda. A continuación, como factor decisivo para la inserción económica del país en la nueva división internacional del trabajo ocurrió posteriormente el ingreso de México en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986 (conocido como GATT por sus siglas en inglés). Y por otro lado, el reforzamiento de las pautas neoliberales en el sector agrícola continuó con la firma del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay (AARU) en 1994 (Rello y

¹¹ Las políticas de estabilización y ajuste, y de cambio estructural impuestas por el FMI y el BM, después de la crisis de la deuda en el período de Miguel De la Madrid, no fueron solamente resultado de la adopción de una nueva política económica diseñada para enfrentar la crisis económica de principios de la década de los ochenta, sino que por el contrario, la política económica neoliberal sirvió como instrumento para abrir paso al surgimiento del nuevo patrón de acumulación del capital en la economía mexicana.

Trápaga, 2001). De otra parte, el gobierno mexicano operó en favor de la profundización de estos cambios admitiendo la propuesta de reformar la política agropecuaria, hecha por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a sus miembros, en este caso desde 1994 (Schwentenius y Gómez, 1999; OCDE, 2006).

Estos cambios del marco institucional para el funcionamiento del sector agrícola se registraron en tres líneas o ejes:

- La eliminación o reducción de la política de precios garantizados o precios administrados.
- La eliminación de la política de subsidios a la producción y reducción de los subsidios a la exportación.
- La eliminación de las barreras arancelarias a las importaciones.

Cada una de estas medidas se diseñó para diferentes objetivos, entre ellos:

- a) La liberalización comercial de los productos agrícolas.
- b) La promoción de la iniciativa privada en el campo y;
- c) Para conceder recursos a la actividad agrícola, a partir de criterios esencialmente mercantiles.

El resultado de las modificaciones en la política agrícola fue que, durante los años ochenta se registraron bajas tasas de crecimiento anual en el PIB agrícola y agropecuario, pues el primero de estos alcanzó una tasa de 0.7% entre 1982 y 1987 y el segundo creció solamente 1.1%, en tanto que la tasa de crecimiento demográfico llegó a 2.8% durante el mismo período (Calva, 1988). Más adelante, la profundización de estos procesos se presentó con las modificaciones a la política agraria que tuvieron su momento más funesto con las reformas al artículo 27 constitucional realizadas en 1992, a partir de las cuales se estableció la cancelación del reparto agrario, así como la posibilidad de venta y renta de las parcelas

ejidales después del proceso de certificación de propiedad y derechos. Además de abrir la posibilidad de inversión de sociedades mercantiles en terrenos ejidales.

Asimismo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado por México, Canadá y Estados Unidos de América (EE.UU.) en 1993 y puesto en vigencia a partir del primero de enero de 1994, se le dio mayor impulso al proceso de reestructuración productiva que ha generado fuertes transformaciones económicas en la sociedad agraria nacional (McMichael, 1998).

1.4 Desmantelamiento y privatización del sector público en la agricultura.

Como se señaló más arriba, la primera fase del proceso de reestructuración económico productiva implementada por el gobierno mexicano desde la década de los ochenta estuvo marcada por el declive de los dos sectores económicos más importantes: el sector industrial y el sector agrícola. Según Garavito (2001), el principal mecanismo empleado por los gobiernos en México para recuperar la tasa de ganancia fue propiciando las condiciones necesarias para que el capital financiero se beneficiara estimulando la valorización y concentración en este sector del capital (Garavito, 2001: 143-144).

Entre algunas de las consecuencias más importantes de este mecanismo de transferencia de beneficios para el capital financiero estuvo el desmantelamiento de aquellas empresas que atendían la demanda de insumos productivos y servicios financieros en el sector agrícola (Paz Sánchez, 2003). Da cuenta de ello que entre 1989 y 1992 desaparecieron empresas como Fertilizantes de México (FERTIMEX) y Tabacos de México (TABAMEX).

La reestructuración de los organismos de apoyo al campo, especialmente los de alcance regional, fue el tópico de las reformas y la liquidación de organismos y programas como la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), Alimentos Balanceados de México

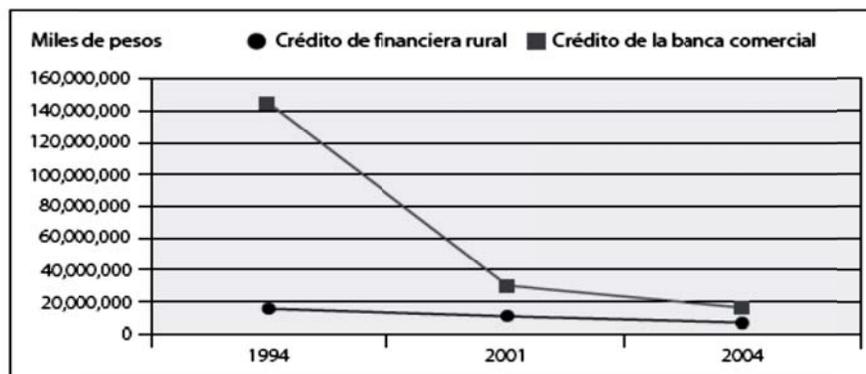
(ALBAMEX), y la Comisión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT), lo cual marcó cambios significativos en la estructura de apoyos al campo (Paz Sánchez, 2003: 66).

La desaparición o sustitución de las instituciones señaladas, entre otras, así como los mecanismos de acción gubernamental, se puso a cargo de programas como el de Apoyos a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), puesto que este programa: “sólo se aplica en el caso de cultivos que tienen interés para el gobierno federal y consiste esquemáticamente en la determinación de un precio objetivo para una cosecha en una región del país o en varias” (Paz Sánchez, 2003: 112).

Por otra parte, una gran variedad de instituciones de crédito designadas por el Estado para satisfacer diversas necesidades financieras, comerciales y productivas en la agricultura, han sido desarticuladas. Entre sus funciones principales estaba dar acceso al crédito y fomentar el seguro en la agricultura. Se cuentan así instituciones como el Banco de Crédito Ejidal, el Banco de Crédito Agropecuario y la Aseguradora Nacional Agrícola.

De 1994 a 2004 el crédito de la banca comercial dirigido a la agricultura se contrajo como parte de una dinámica de supresión de la inversión en este sector de la actividad económica. Por otra parte, el servicio de crédito público que ofrecía Banrural a los ejidatarios y pequeños productores privados, el cual fue sustituido en 2003 por la Financiera Rural (Rubio, 2006: 43), se mantiene en un nivel muy bajo debido a que el propósito del Estado mexicano era favorecer la modernización del sistema financiero rural (ver **Gráfica 1**).

Gráfica 1. Crédito público y privado en México 1994-2004 (a precios de 2002).



Fuente: Rubio, B. Balance rural del sexenio de Vicente Fox Quesada. La ruta de la continuidad, en *Rumbo Rural*, año 2, núm. 5, septiembre-diciembre, CDRSSA, México, 2006, p. 44.

1.5 La fase agroexportadora neoliberal.

Para Rubio (2001), la crisis vinculada al bajo crecimiento económico que había registrado el sector agropecuario desde las décadas de los ochenta y noventa, no se debía solamente a la política de subsidios aplicada por EE.UU. y los efectos producidos por la crisis estructural del capitalismo mundial (que opera de forma diferenciada a nivel de las formaciones socioeconómicas). Para esta autora, las características que adquirió el sector agrícola en los países latinoamericanos desde los años noventa indicaban la estructuración de una nueva fase¹² productiva del capitalismo, en la cual se inauguraron determinadas formas de extracción de valor con características diferentes a las de la etapa precedente.

El patrón de industrialización por sustitución de importaciones se desplegó en función de la acumulación basada en la producción industrial y correlativamente en la ampliación del

¹² Según Dabat y Rivera: “Llamaremos etapas del capitalismo, a la sucesión de formas históricas estructurales de desarrollo del capitalismo en la era industrial, que expresan sucesivos niveles acumulativos de extensión, complejización y articulación global de sus componentes básicos (fuerzas productivas, relaciones de producción, esferas diferenciadas de la vida social y superestructura institucional) y dan lugar a las modalidades específicas de reproducción y contradicción social” (Dabat, 1993, en Rubio, 2001: 62).

mercado interno. Para lograr lo anterior, este patrón de acumulación se orientaba hacia la producción de bienes de consumo duraderos y manufacturas demandadas por el amplio sector de trabajadores –lo que requería la articulación de distintos sectores económicos-, y permitía a su vez la reproducción de las masas trabajadoras rurales¹³. En cambio, el patrón de acumulación neoliberal prescinde de la reproducción de los obreros y campesinos, debido a que se basa en la producción de bienes demandados por determinados segmentos del mercado interno e internacional que, en muchos casos, se encuentra bajo el dominio de empresas transnacionales de los países desarrollados.

Así pues, las transformaciones registradas durante la década de los noventa en la estructura económico-social agraria mexicana no fueron solamente efecto de la aplicación de las políticas neoliberales, señaladas más arriba, dado que favorecieron el desmantelamiento de las empresas estatales y la infraestructura construida por el Estado en diversos sectores de la actividad económica. Se debe señalar que, estos elementos se desplegaron en un contexto de desruralización creciente (Kay, 2009), en función del fenómeno de globalización económica que se constituyó en uno de los factores detonantes de la reorganización económica mundial. Aquí, la globalización económica se entiende como: “una estrategia de las grandes multinacionales para enfrentar el fin de la larga onda expansiva de la posguerra” (Hirsch, en Rubio, 2004: 19).

Por otra parte, este proceso reforzó el papel del sector agroexportador en las economías latinoamericanas, principalmente después de la imposición del patrón de acumulación neoliberal. En ese sentido, a partir de lo que se ha denominado como la *fase agroexportadora neoliberal* (Rubio, 2001), se desplegó una forma de subordinación

¹³ Cfr. Rubio, Blanca. Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal, Ed. Plaza y Valdés, México, 2001.

desestructurante (de la agroindustria transnacional sobre la agricultura), que ha generado la ruptura de los mecanismos de reproducción económica de los productores rurales que se habían vinculado al proceso de reproducción del capital a lo largo de la etapa de vigencia del patrón de industrialización por sustitución de importaciones, a través de la producción de valores de uso demandados en el mercado interno y/o internacional (Rubio, 2009b).

Esta fase agroexportadora se distingue porque la producción agrícola para exportación se concentra en un conjunto de bienes articulados al marco de una nueva estructura del mercado mundial de productos, que se caracteriza por la segmentación productiva. A su vez, la segmentación se deriva de la conformación de una nueva división internacional agrícola del trabajo y la configuración de cadenas agroalimentarias globales. En ese marco, las empresas agroexportadoras forman parte de redes económicas vinculadas con el capital agroindustrial y financiero. Así, las grandes empresas agro-exportadoras que adquieren mayor relevancia como ejes de la acumulación durante esta fase, reflejan los intereses económicos de pequeños grupos que se concentran en la producción comercial de cultivos no tradicionales (frutas, hortalizas y flores), en tanto que solamente consideran la demanda del mercado externo e internacional.

En ese marco, las características del sector agro-exportador que emergió con el patrón de acumulación neoliberal, son cualitativamente distintas a las del subsector destinado a la producción de cultivos tradicionales de mayor valor comercial en el mercado internacional durante la vigencia del patrón de industrialización por sustitución de importaciones (algodón, café, ganado, jitomate y azúcar).

A medida que se establece la fase agroexportadora en el sector agrícola, el crecimiento de este sector reposa sobre empresas orientadas a la agroexportación no tradicional (AENT). Esto se debe a que, los precios de los granos básicos (como el maíz, frijol, trigo y arroz) y

de algunas materias primas e insumos empleados para la producción de alimentos y bienes de consumo no duradero para el mercado interno e internacional (como café, leche, tabaco o algodón), han descendido a causa de las importaciones de cultivos abaratados provenientes de Estados Unidos (EE.UU.) y otros países. En muchos casos, los bienes de consumo no duradero elaborados por empresas agroindustriales transnacionales (caso Nestlé), se producen con materias primas importadas. Este proceso ha obligado a que los productores campesinos no sólo compitan con los sectores más productivos a nivel local o regional, sino que a su vez enfrenten, en condiciones asimétricas, a los productores de otros países y sus importaciones baratas.

En el caso de México, se ha observado que una de las consecuencias de este proceso en el sector agrícola ha sido la polarización entre las diferentes categorías de agricultores. Basándose en información del Censo Agrícola de 1991, Lara y Grammont (1999), afirman que el 45.9% de las unidades productivas reportó que sólo producía para el autoconsumo familiar. En tanto que, el 43.4% de estas unidades indicó que además de producir para el autoconsumo vendía una parte de su producción en el mercado local o nacional. Finalmente, sólo el 0.3% de estas unidades reportaba la venta de su producción en el mercado nacional o la exportaba (Lara y Grammont, 1999: 24).

Por otro lado, según este mismo estudio las empresas agro-exportadoras se localizan principalmente en zonas de riego de los estados de Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas (Lara y Grammont, 1999: 25). En contraparte, la demanda de alimentos para el consumo interno (granos básicos como el maíz, trigo, frijol), y las materias primas destinadas a la industria nacional sigue concentrándose en los productores de las zonas de temporal del país.

En ese plano, algunos factores que han incidido en estos procesos fueron: la orientación predominante del crédito estatal hacia el subsector agro-exportador; el desmantelamiento de empresas estatales y políticas de apoyo orientadas a la producción de alimentos básicos, lo cual disminuyó su rentabilidad; así como la apertura comercial al mercado internacional que favoreció el abaratamiento de las importaciones de bienes agrícolas y promovió la importación masiva de alimentos básicos (Marañón, 1998: 301; Rubio, 1999).

En consonancia con estos procesos, con la entrada en vigor del TLCAN en 1994 se fomentó la participación de este subsector a través de la firma de acuerdos de ingreso de hortalizas y frutas a EE.UU. y Canadá sin aranceles, después de determinados plazos y según los productos. A cambio, el gobierno mexicano aceptó concesiones en las barreras arancelarias para la importación de alimentos básicos, lo cual ha agudizado el fenómeno de dependencia alimentaria que padece el país desde la década de los setenta (Rubio, 2004; Durán, 1988).

1.6 La subordinación desestructurante y su impacto sobre el sector campesino.

El proceso de subordinación desestructurante específico de la etapa que comenzó a mediados de los años noventa transformó los elementos económico-sociales, tecnológicos y organizacionales que permiten la valorización de determinados bienes agrícolas, en función de la rearticulación de los factores productivos. De ese modo, ha provocado un proceso de desvalorización de los bienes agrícolas cuya producción está dominada por las agroindustrias transnacionales. Este proceso de desvalorización se ha dado a partir de la venta de bienes agrícolas a precios bajos en el mercado internacional, debido al control que poseen algunas empresas agroindustriales transnacionales de la cadena de producción, intercambio y distribución. Como consecuencia de esta forma de subordinación, se

promueve un proceso de desestructuración de las formas de reproducción y existencia social de la población trabajadora rural.

Como señala Rubio: “La desvalorización de la producción ha sido la condición fundamental para impulsar una forma de explotación y subordinación por despojo sobre los productores nacionales, que consiste en que, al fijar el precio por debajo del costo, no se reeditúa el valor del producto, pero tampoco lo necesario para iniciar un nuevo ciclo productivo.” (Rubio, 2009b: 196). La desvalorización de los bienes agrícolas explica la extracción del fondo de consumo de los pequeños y medianos agricultores campesinos a partir de la pérdida de valor de los granos básicos, a lo cual corresponde una reactivación de la extracción sustentada en los costos de producción, que impide la reproducción del trabajador y desestructura su unidad familiar.

En ese marco, el conjunto de estructuras y procesos socioeconómicos y productivos en el sector agrícola está determinado por un tipo de dominio que se ha denominado como dominio excluyente. Por dominio excluyente se entiende:

...una forma de explotación y subordinación que no es capaz de reproducir a las clases subalternas en su condición de explotados, sino que tiende a excluirlos debido a su carácter depredatorio [...] En el caso de los campesinos, la imposición de precios no rentables y la sustitución de producción nacional por importada desgasta la unidad productiva, con lo cual resultan excluidos de la producción y no logran reproducirse como explotados. Aunque los explota y subordina como colectivo y se beneficia de la extracción de plusvalía y de excedente que obtiene de ellos, individualmente los excluye una vez que los ha explotado” (Rubio, 2001: 102,103).

Como se señaló al principio de este apartado, se puede decir que con la fase agroexportadora neoliberal se han desarrollado nuevas formas de organización laboral flexible, las cuales se sustentan en el uso de tecnología que modifica las condiciones del sistema productivo. Entre las nuevas tecnologías están por ejemplo: “la biotecnología,

informática, tecnología del láser, riego computarizado, refrigeración individualizada del producto y sistemas de empaque en el huerto...” (Rubio, 1999: 279). Estas formas flexibles de organización del trabajo impulsan la intensificación del trabajo a partir del involucramiento del trabajador en la elaboración del producto, y la condición específica de esta forma de organización que consiste en el conocimiento global del proceso productivo por parte de éste, que se traduce entre otras cosas, en la especialización y responsabilidad por la calidad del producto.

Debido a estos rasgos, durante la fase agroexportadora se acentuó el predominio de las formas de organización laboral flexibles que imperan en empresas productoras de cultivos no tradicionales (hortalizas, frutas y flores). En tanto, se fomenta la desvalorización de los bienes agrícolas y la concentración en formas productivas como la agricultura por contrato practicada por grandes agricultores capitalizados, lo que favorece el debilitamiento de la forma productiva de los agricultores campesinos en razón de los bajos precios de alimentos y materias primas a los que pueden vender sus productos en el mercado interno.

Por otra parte, estos procesos impulsan un nuevo tipo de dinámica societal en el ámbito rural relacionada con la diferenciación, inclusión e integración de los grupos sociales, marcada por el carácter excluyente del patrón de acumulación.

1.6.1 Expulsión de la fuerza de trabajo campesina y su transformación en emigrantes, desempleados, trabajadores informales y precarios rurales.

Con el ascenso de la fase agroexportadora neoliberal han ocurrido transformaciones tanto a nivel del Estado y su aparato productivo como en la dinámica de organización económica de la sociedad.

La subordinación desestructurante se puede concebir como un proceso de desestructuración socioeconómica que impulsa el mecanismo de desvalorización de los bienes agrícolas –tal y como ha ocurrido en el estado de Veracruz, como lo veremos más adelante-. En ese sentido, la reproducción económica del amplio sector de la fuerza de trabajo campesina y rural ha dejado de fundarse a la producción de ciertos cultivos que ya no son rentables, a partir del establecimiento de precios que no permiten recuperar al productor los costos de producción. Bajo ese marco, el proceso de desestructuración económica y social ha favorecido el agotamiento de las unidades domésticas campesinas, así como la precarización laboral de los asalariados rurales debido a que sus formas de reproducción económica se debilitan en razón del bajo nivel de capitalización que pueden alcanzar sus unidades productivas.

Una de las consecuencias de esta situación ha sido la degradación de las condiciones de vida que la mayor parte del sector social agrario en México –conformado por amplias capas del campesinado medio y bajo, que está constituido por minifundistas privados, ejidatarios, comuneros y campesinos sin tierra- ha padecido al dejar de participar significativamente en la producción de bienes agrícolas. De ese modo, el proceso de reproducción material del campesinado se ha modificado con respecto a sus formas existentes durante el patrón de industrialización por sustitución de importaciones, ocasionando la exclusión social y económica de numerosos sectores que habitan en el espacio rural, donde actualmente el 60.8% sobrevive en situación de pobreza (CONEVAL, 2010).

En el caso de México, el impacto de estos procesos ha impulsado modificaciones importantes en el mercado de trabajo rural y agrícola.

La nueva economía ha modernizado la producción de bienes agro-industriales y reclama abundante mano de obra, tanto de manera permanente como estacionaria (para las cosechas), alentando la constitución de masas obreras

femeninas e infantiles, y el incremento del desempleo y el subempleo, con el consiguiente aumento de la pobreza, la miseria y la emigración [...] Las migraciones locales e internacionales ya no sólo se nutren del éxodo de hombres sino también de mujeres. (Osorio, 2009: 208-209).

En consecuencia, grandes contingentes de población rural han recurrido a la migración hacia algunas ciudades intermedias, zonas metropolitanas y lugares donde se concentra la demanda de fuerza de trabajo durante las épocas de cosecha (principalmente en algunas zonas agrícolas del norte del país), así como allende las fronteras –principalmente a EE.UU.- en busca de la posibilidad de sobrevivir y ayudar al sostenimiento de sus familias. Asimismo, esta migración ya no está constituida solamente por los jefes de familia hombres, sino que cada vez en mayor medida también participan en este proceso además de hombres y mujeres jóvenes algunas jefas de familia que consideran a la migración como una opción para mejorar las condiciones de vida de sus unidades domésticas.

En ese contexto, durante las últimas dos décadas el fenómeno de migración ha registrado variaciones importantes entre el sector de trabajadores agrícolas estacionales o jornaleros agrícolas, debido a que la crisis económica ha afectado al sector industrial-urbano nacional, ocasionando también un incremento del desempleo rural. A lo anterior se debe agregar el descenso de los salarios y el establecimiento de condiciones precarias de vida para los trabajadores temporales, lo que constituye un elemento relevante para la proliferación de ocupaciones informales entre la población rural que permanece en sus lugares de origen. Sin embargo, el proceso de precarización laboral en el espacio rural ha ocasionado, entre otros fenómenos, la disminución de la cohesión social entre la población de las diferentes localidades y la dispersión de los habitantes, a raíz del despoblamiento gradual de algunos territorios.

De otra parte, estos cambios económicos han provocado la cancelación del proceso de inclusión social que –aunque con muchas limitaciones- tuvo lugar en la sociedad mexicana, durante la etapa de la posguerra y hasta los años setenta.

Como se mencionó más arriba, en la fase agroexportadora neoliberal se han configurado nuevas formas de organización productiva, las cuales han ido acompañadas de la imposición de métodos de explotación salvajes que se basan en la extensión e intensificación de la jornada laboral, la explotación del trabajo de la población femenina e infantil¹⁴.

¹⁴ Entre muchos otros casos, está el de la explotación de fuerza de trabajo por parte de empresas extranjeras que operan en base a la agricultura por contrato. Algunas de estas empresas congeladoras o empacadoras, se encargan de la contratación de la fuerza de trabajo entre la que predomina la población femenina e infantil. En un estudio sobre el trabajo infantil en los campos de cultivo de fresa en Zamora, Michoacán, García Martínez (2010), revela que entre la población infantil (menor a 14 años) encuestada (161 entrevistas), el 59% declaró trabajar en el corte de fresa; el 3.1% dijo trabajar como empacador o integrado a las actividades económicas de los padres; el 9.3 dijo no trabajar, y el 28.6% no respondió (García Martínez, 2010: 116). Estos datos confirman que los métodos de explotación se tornan más salvajes en función de la configuración de un patrón de acumulación donde las empresas exportadoras especializadas, se constituyen como el elemento que impulsa la acumulación de capital, a través de la modificación de las formas productivas en la agricultura.

Capítulo 2. Movimientos campesinos e indígenas y procesos de organización sociopolítica en México 1970-2000.

En este capítulo se describen los procesos de construcción de algunos movimientos y organizaciones rurales a partir de las movilizaciones campesinas surgidas durante el período de 1970 al 2000. Se intenta resaltar la cuestión de cómo algunas organizaciones adquirieron ciertos rasgos específicos resultantes de la acumulación de experiencia por parte de ciertas agrupaciones. Se plantea que este mecanismo le permitió a determinados movimientos y organizaciones rurales desembocar a finales del siglo XX en procesos de organización sociopolítica con características distintas a las que tuvieron éstos a lo largo de la etapa precedente.

2.1 Estructura y procesos detonantes del movimiento campesino-indígena 1970-1985.

Hacia la década de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado se desplegaron diferentes movimientos rurales compuestos por grupos campesinos e indígenas, los cuales se caracterizaron por su amplitud y difusión en diferentes estados del país, así como por haber tenido una gran combatividad. Los movimientos registrados durante este período se pueden concebir como una *continuación* de los movimientos rurales surgidos en las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XX¹⁵, y hasta mediados de los años sesenta.

¹⁵Este fenómeno se presentó de manera recurrente en diferentes regiones del país y los casos de mayor importancia ocurrieron en Morelos con los sucesivos levantamientos de Rubén Jaramillo, el primero de 1943 a 1945, el segundo levantamiento después del fraude en las elecciones estatales de 1946 a 1950 y el último levantamiento de 1952 a 1957 en apoyo al movimiento henriquista, que concluyó con su desarticulación y después de algunos años de actividad en distintos procesos de organización campesina fue asesinado en 1962. Otro de estos levantamientos armados caracterizado como de 'viejo tipo' estuvo encabezado por Celestino Gasca en 1961, quien fue capturado antes de llevar a cabo una acción armada mientras algunos campesinos de diferentes estados combatieron al ejército hasta ser vencidos. Un episodio semejante se presentó en 1963 con el conflicto agrario que involucró a la Unión de Productores de Copra en Guerrero, el cual culminó con la imposición de algunos representantes no campesinos en la dirección de su organización y el reforzamiento de la explotación y la violencia que ejercían los caciques locales sostenidos con el apoyo del gobernador del

Un conjunto de factores económico-políticos favorecieron la expresión de diversas protestas rurales a principios de los años sesenta. En su mayoría, estas manifestaciones fueron impulsadas por grupos campesinos que demandaban la acción del Estado para repartir grandes propiedades agrícolas o neolatifundios¹⁶, así como el apoyo financiero para ampliar el uso de ciertos insumos y tecnologías en la producción agrícola entre los sectores campesinos.

A partir de 1963 estas protestas y movilizaciones cayeron en un proceso de reflujo a causa de la mediatización y las maniobras políticas de algunos dirigentes de las organizaciones que las promovían (Bartra, 2012), como fue el caso de la Central Campesina Independiente¹⁷ (CCI). Así también ocurrió con la Unión General de Organizaciones Campesinas de México (UGOCM), la cual después de impulsar tomas de tierra en algunas

Estado Caballero Aburto. Éste reprimió de manera sangrienta y en varias ocasiones algunas protestas realizadas entre 1963 y 1967 por diferentes sectores de la sociedad civil que integraban la Alianza Cívica Guerrerense (ACG), la cual había sido formada por profesores, estudiantes universitarios, miembros de organizaciones campesinas y algunos militantes tanto de partidos de izquierda como priístas que se oponían al gobernador del estado. Después del encarcelamiento de su líder, Genaro Vázquez, y la radicalización de aquella organización (debido a la matanza de campesinos en la sede de la Unión Regional de Productores de Copra en 1967), la ACG se convierte en 1968 en grupo guerrillero denominado Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), que se mantuvo hasta la muerte de Genaro Vázquez en 1972 y cuyo esquema de lucha se basaba en el enfrentamiento armado y la promoción del cambio político mediante la estrategia guerrillera. Dicha estrategia seguida en el mismo estado de Guerrero por Lucio Cabañas perduró hasta 1974 con la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y el Partido de los Pobres. Este proceso se cerró, aunque no de manera definitiva, después del asesinato del líder a manos del ejército mexicano después de llevar a cabo el secuestro del senador Rubén Figueroa (Bellingeri, 2003; Bartra, 2012; Bartra, 2000; Gómez-Jara, 1988).

¹⁶ En 1946 se había aprobado la modificación del artículo 27 constitucional en lo referente a los límites de la pequeña propiedad y el derecho de amparo para los terratenientes, lo cual favoreció a la gran propiedad en beneficio de la producción de cultivos comerciales. Estas reformas constitucionales marcaron la orientación que tuvo la política agraria en esta etapa, que según el juicio de un destacado analista de la cuestión agraria de la década de los sesenta: “De hecho representó la medida más notable de la contrarreforma agraria que ha estado ganando terreno a partir de 1940.” (Stavenhagen, 1968: 16).

¹⁷ La actividad de organizaciones como la Central Campesina Independiente (CCI), cuyo congreso de constitución formal se llevó a cabo en 1963 con grupos campesinos ligados al Partido Comunista en la región de La Laguna que habían sido expulsados de la UGOCM, así como otros grupos de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Morelos, y algunas agrupaciones campesinas ligadas al MLN cardenista en los estados de Michoacán, Guanajuato y Estado de México, fue poco contundente debido a que trataba de mantenerse más como una alianza de organizaciones que como un instrumento real de la lucha campesina. Algunos autores veían en este tipo de organizaciones más un instrumento político, aun cuando sus luchas estaban enfocadas en la solución de problemas como el reparto de tierras y la tecnificación agrícola. Cfr. Gómez-Jara, F. El movimiento campesino en México, Ed. CEHAM-SRA, México, 1988, p. 230-233.

zonas agrícolas acaparadas por neolatifundistas en el norte del país y desatar la represión de los caciques locales y el ejército, desconoció a ciertos miembros encarcelados del movimiento lo que motivó la radicalización posterior de estos y la constitución del grupo guerrillero que atacó en 1965 el cuartel militar de Madera, Chihuahua¹⁸ (Bellingeri, 2003).

La dinámica de movilización campesina surgida a finales de los años sesenta se agotó sin que se registraran cambios significativos en las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores rurales. Sin embargo, otros factores detonaron nuevas protestas y movilizaciones a partir del descenso de los precios internacionales de algunos bienes agrícolas.

Durante la última etapa del régimen de Díaz Ordaz, su gobierno favoreció la importación de alimentos en detrimento de la autosuficiencia alimentaria, debido a la caída de los precios de los granos básicos que originaron una sobreoferta nacional y mundial de éstos. Estos procesos derivaron de las transformaciones ocurridas durante ese período en el mercado nacional e internacional en cuanto a la elaboración de alimentos balanceados (Paz Sánchez, 1968). Así, se promovió la producción de aquellos cultivos como el sorgo, la soya, el cártamo y el ajonjolí, cuya producción se concentró en el sector más capitalizado de productores agrícolas que se localizaba en la zona pacífico-norte (conformada por los

¹⁸ Las tomas de tierra realizadas por campesinos pertenecientes a organizaciones como la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM, la cual a su vez se dividió en 3 agrupaciones con direcciones distintas) en varios estados del norte del país como Chihuahua y otras protestas encabezadas por grupos locales, permitieron la generación de otros procesos de organización de carácter más radical. A partir de 1958 las tomas de tierra en Sinaloa, Baja California, Sonora y Nayarit, organizadas por la UGOCM derivaron en las invasiones de tierra que se llevaron a cabo en Chihuahua a partir de 1963 hasta 1965 en los municipios de Madera y Gómez Farías, las cuales encabezaron grupos campesinos pertenecientes a esa organización en la que participaban el profesor Arturo Gámiz y el Dr. Pablo Gómez. Después del fracaso de la lucha por la vía legal y del encarcelamiento de ambos líderes, estos junto con comandos guerrilleros formados por campesinos ejecutaron a partir de 1964 diversas acciones de ajusticiamiento contra caciques de la región y emboscaron batallones del ejército. El 23 de septiembre de 1965 esta organización clandestina guerrillera ejecutó la toma del cuartel militar de Madera en Chihuahua, cuyo resultado fue la muerte de los jefes de la agrupación a manos de soldados del ejército mexicano. No obstante, las consecuencias de este episodio se extendieron a la creación de otros grupos guerrilleros en el mismo estado (Bellingeri, 2003: 69-101).

estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California Norte, Guanajuato y Jalisco), y que eran demandados por la agroindustria transnacional que penetró en el país a partir de la caída de la tasa de ganancia en los países desarrollados (Rubio, 1987: 47-49).

Estos procesos se interrelacionaron con:

La penetración de cultivos altamente intensivos, ahorradores de fuerza de trabajo; la *ganaderización* y el despojo de las comunidades indias; el desplazamiento y crisis de cultivos tradicionales, algunos de ellos basados en el uso extensivo de la mano de obra; el creciente proceso de proletarización y el peso de situaciones tales como la terminación del convenio bilateral de braceros México-Estados Unidos; la caída de los precios de los productos agrícolas *campesinos* –aunado a un incremento sostenido de sus costos- fueron, entre otros factores, los que abrieron el cauce de la crisis estructural de la agricultura mexicana. (Moguel y Robles, 1990: 381).

En cuanto a la producción de granos básicos para la alimentación, el maíz y el frijol habían crecido a un 4.8% anual promedio entre 1950 y 1960, en tanto que de 1970 a 1976 tuvieron un crecimiento negativo de 0.4% anual (Bartra, 2012: 127). Asimismo, comenzaron a hacerse evidentes las consecuencias del proyecto de modernización agrícola que había avanzado de manera sesgada desde su fundación a mediados de la década de los cuarenta¹⁹. En ese sentido, Stavenhagen (1968) ya había señalado, entre otras cuestiones, que las consecuencias sociales de la modernización agrícola habían sido: 1) por un lado que, la tendencia a la modernización de las grandes empresas mecanizadas favoreció el desempleo en el sector agrícola, mientras la población rural seguía en aumento²⁰, y; 2) en el contexto

¹⁹ Las condiciones bajo las cuales se implementó la modernización de la agricultura en conjunción con los factores mencionados más arriba favorecieron la emergencia del fenómeno de escasez de alimentos que había sido erradicado en el país, temporalmente, desde los años cincuenta, ya que como afirmaba Feder: “El proceso de modernización no ha resuelto, pues, el problema de mantener una provisión continua y suficiente de alimentos para el consumo nacional y la exportación. De hecho, parece que la modernización de la agricultura, en las condiciones en que se está realizando, introduce un elemento de gran inestabilidad que hace la situación alimentaria en los países latinoamericanos más insegura que antes de iniciarse la modernización” (Feder, 1978: 264).

²⁰ Durante el período de 1940 a 1950 la fuerza de trabajo en la agricultura se redujo de manera relativa al pasar de 65.1 a 61%, aunque en números absolutos se incrementó de 3, 831, 000 a 4, 824, 000. De 1950 a 1960 ocurrió un fenómeno semejante debido a que el porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada en el sector

del subdesarrollo del país, esta situación se aunaba a la baja capacidad de absorción de la mano de obra expulsada del campo por parte de los sectores económicos secundario y terciario, lo que convirtió tanto al minifundio como al ejido en un ‘seguro’ de la población rural contra estas tendencias económicas (Stavenhagen, 1968: 18).

En ese marco, los conflictos por la tierra seguían activos puesto que no habían tenido una solución satisfactoria para el sector campesino –principalmente el que estaba compuesto por comunidades indígenas-, el cual había sido despojado de sus tierras por grupos neolatifundistas. Esta situación se debió principalmente a la actuación del Estado (a través del Departamento de Asuntos Agrícolas y Colonización-DAAC, que en 1974 se convertiría en la Secretaría de la Reforma Agraria), que omitió dar una atención de manera puntual a las demandas hechas por comunidades y agrupaciones campesinas, para que se les restituyeran de manera íntegra las tierras de las que habían sido despojados (Stavenhagen, 1968). En función de ello, se había concretado un proceso de concentración de tierras impulsado por empresarios agrícolas y caciques locales y regionales, quienes actuaban al amparo de las autoridades locales y estatales, principalmente en la región centro-sur del país²¹.

La crisis económica que sufrió la sociedad mexicana desde los años setenta (prolongándose con ciclos recesivos hasta 1982) no solamente se manifestó en su dimensión económica,

disminuyó de 61 a 54.7%, en tanto que en cifras absolutas aumentó a 6, 144, 000 trabajadores. (González Casanova, 1967: 298). Stavenhagen afirmaba que: “Si analizamos todo el período bajo consideración (1930 a 1960), advertimos que frente a un crecimiento total de la población agrícola de 70%, el número de ejidatarios creció 180%, el número de propietarios 113% y el número de agricultores sin tierras apenas 33% [...] Más si solamente tomamos el período 1940 a 1960, las proporciones se invierten. Durante estas dos décadas la población agrícola creció 60% en su conjunto. Y mientras que el número de ejidatarios solamente aumenta 22.6%, el aumento de propietarios es de 81.6%, y el de trabajadores agrícolas sin tierras 74%.” (Stavenhagen, 1968: 28-30).

²¹ El ejemplo más claro de este fenómeno estaba representado por el cacique de San Luis Potosí Gonzalo N. Santos, quien no solamente concentraba grandes propiedades de tierra en este estado del país, sino que también detentaba el poder político en ese territorio desde su gubernatura entre 1943 y 1949.

sino que también generó consecuencias sociopolíticas en el espacio rural. Los sectores campesinos que abarcaban desde el campesinado medio hasta los campesinos pobres y los trabajadores agrícolas sin tierra tuvieron que enfrentar el incremento de los costos de los insumos, la congelación de los precios de garantía y la fluctuación de los precios internacionales de los alimentos, así como la explotación económica del sector industrial²². Tales procesos incubaron de nueva cuenta el descontento de los trabajadores rurales que ya habían registrado la degradación de sus condiciones de reproducción económica desde comienzos de los años setenta. Como consecuencia de esta situación, diversas manifestaciones fueron impulsando un movimiento rural que se extendió a varias regiones del país.

El movimiento campesino reflejaba de manera clara la lucha encabezada por los grupos indígenas y el campesinado en el espacio rural mexicano²³. Los movimientos rurales que surgieron durante los años setenta tuvieron la suficiente fuerza para posibilitar la inclusión de algunos de sus planteamientos dentro de los temas relevantes para la sociedad como la demanda de tierra (que era sostenida por sectores campesinos que habitaban en diversas regiones del país). Esta situación se acentuó debido a que en distintos estados del norte y centro-sur de México existían grandes latifundios, lo cual contrastaba con una existencia generalizada de pequeñas propiedades y parcelas ejidales entre los grupos mayoritarios del

²² Así pues, la crisis agrícola que comenzó a principios de los años setenta se originó en la explotación económica del sector rural y en particular del campesinado por el sector manufacturero, como describen Ayala et al.: “Sin haber necesitado del sector rural como mercado para su crecimiento en el corto plazo, la industrialización oligopólica de los años sesenta redujo al grueso de la agricultura, y a todo el sector rural mexicano, a funcionar como un campo de explotación absoluta y como una fuente interminable de mano de obra infrasubsistente.” (Ayala, et al., 1986: 66).

²³ Rubio propone que: “las pautas generales de la acumulación de capital y del movimiento campesino son dos fenómenos íntimamente relacionados; mientras la lucha campesina se explica por el avance del capital, como una respuesta defensiva por mantener su forma productiva, a la vez, el movimiento en su conjunto expresa necesariamente formas de explotación, de concentración de la tierra o de desarrollo de las fuerzas productivas del capital. En tanto luchas contestarias, son el resultado del embate del capital sobre los explotados del campo, y por ello el movimiento refleja, desde otra perspectiva, las características de la acumulación en el campo.” (Rubio, 1987: 18).

campo, además de un amplio sector social que todavía no había recibido la dotación de una parcela ni tampoco eran considerados para la concesión de un terreno, mientras que no se podían transformar totalmente en proletarios urbanos o rurales. Asimismo, se sumaban a estas demandas las de otros sectores del campesinado medio que registraban un deterioro en su nivel de vida e ingresos, además del desgaste de su capacidad productiva, por lo que demandaban el otorgamiento de créditos para la producción, así como una mayor disposición de insumos y el establecimiento de mecanismos para la distribución y comercialización de sus productos.

A partir de la sustitución del patrón ISI por el patrón neoliberal se presentó una coyuntura política diferente en la cual el movimiento campesino que emergió después de la crisis económica de 1982 se tuvo que conformar sobre bases distintas a las de los movimientos surgidos en la década anterior.

2.2 Movimientos campesinos e indígenas: 1970 – 1990.

Las movilizaciones y protestas campesinas e indígenas²⁴ que emergieron desde los años setenta hasta la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo pasado en México no sólo fueron una respuesta concreta de resistencia de los grupos rurales frente al deterioro de sus niveles de vida, sino que a su vez plantearon una visión propia del campesinado como clase. Este fenómeno se puede concebir en el marco del surgimiento de distintos movimientos sociales en el espacio rural, frente a la agudización del proceso de explotación económica al cual fueron sometidos los grupos campesinos e indígenas del país.

²⁴ Consideramos que durante este período algunas movilizaciones que fueron impulsadas por sectores del campesinado contaban con el carácter indígena de la población que las componía. Asimismo, desde los años sesenta distintas comunidades indígenas se mantenían en lucha contra la creación de neolatifundios, los cuales los habían despojado de sus tierras (Stavenhagen, 1968).

Según la periodización propuesta por Rubio (1987), el movimiento campesino que surgió en la década de los setenta se desplegó en dos etapas: la primera de 1970 a 1976, que se caracterizó como la etapa de auge del movimiento campesino²⁵; la segunda etapa duró de 1977 a 1983 y se definió como un período de lucha defensiva de los movimientos.

La primera etapa se manifestó inicialmente en la región norte del país, desencadenándose a partir de algunas protestas encabezadas por campesinos que demandaban tierras. En 1971 ocurrió la invasión del latifundio 'Rancho California', en Sinaloa, por parte de un grupo numeroso de campesinos, la cual acabó con el desalojo violento del predio de 1,281 has. Esto detonó una movilización posterior por parte de los grupos participantes en la toma, para exigir un castigo a quienes habían ordenado el desalojo y la solución del problema de concentración de tierras. Otro acontecimiento con las mismas características se registró un mes después y tuvo un desenlace semejante en el mismo estado (Moguel y Robles, 1990: 381-382).

De esta manera, en un comienzo el fenómeno se presentó en los municipios con mayor nivel socioeconómico de Sinaloa como Ahome, Guasave o Culiacán, los cuales concentraban las tierras de riego más prósperas e importantes de México.

Así, Chihuahua se convirtió en otro de los estados que registraron intensas movilizaciones debido a las características del sistema de propiedad agraria imperante, cuya estructura no había cambiado a casi una década de haber ocurrido el levantamiento armado contra el cuartel militar del municipio de Madera (Bellingeri, 2003). Por otra parte, en el estado de Sonora las características de la estructura de tenencia de la tierra eran similares pues a inicios de la década de los setenta el 86% de los usuarios de las tierras de riego explotaba el

²⁵ "De 1970 a 1976 se crearon numerosas organizaciones locales como la UCI, el FCI, la UECJ, la Alianza 10 de abril, el Campamento Tierra y Libertad, el Frente Popular de Zacatecas, el Comité de Defensa Popular, la COCEI y la COCEO, etcétera." (Rubio, 1996: 119).

44% de la superficie total, en tanto que solamente el 5% aprovechaba en usufructo el 37% (Moguel y Robles, 1990: 382).

Las luchas campesinas impulsadas durante los años de 1970 y 1971 estuvieron conformadas por jornaleros agrícolas, campesinos pobres, proletarios rurales y productores asalariados al servicio del Estado (Rubio, 1987). De una parte, estos grupos se enfrentaron a la burguesía agraria que basaba su poder económico en el sistema de propiedad de la tierra existente (neolatifundista) y, que a su vez, ejercía una forma de control económico por medio de la esfera de comercialización de la producción agrícola, lo cual le permitía la extracción del excedente productivo del campesinado²⁶. Para un analista de ese período: “La ruina de la agricultura campesina, que está en la base de la crisis de producción y es el disparador de la crisis social y política generada por la movilización de los subocupados, se origina en la desmesurada explotación a la que los ha sometido el sistema” (Bartra, 2012: 132).

Los procesos de movilización permitieron la constitución de diversas agrupaciones. A partir de 1972 las rebeliones se extendieron a todo el territorio del país. A lo largo de ese año se llevaron a cabo tomas de tierras en los estados de Sinaloa, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y Querétaro. El 10 de abril se llevó a cabo una movilización que partió de Tlaxcala hacia el

²⁶ Este planteamiento es sostenido por Bartra A. (2006), para quien el campesino es una clase explotada por el capital, debido a la subordinación a la cual es sometido como agente económico en el proceso de reproducción del capital a través de la producción de mercancías (bienes agrícolas) y su inserción a la esfera del mercado, así como por su vinculación con el Estado y otros agentes económicos en la sociedad capitalista moderna. Además, otros autores sostienen la tesis de que el desarrollo agrícola sostenía el proceso de industrialización, así como la urbanización pues estos sólo se pudieron concretar sobre la base de una abundante producción de materias primas agrícolas (empleadas para su transformación en la producción de manufacturas y bienes de consumo no duradero, dentro de distintas ramas de la industria). A su vez, este proceso permitió la reducción de los costos de la fuerza de trabajo en el sector industrial, a partir del abaratamiento de los alimentos (los cuales también eran demandados por los sectores populares). Como lo demostraron diversos análisis, el desarrollo agrícola fue un factor significativo en el proceso de desarrollo económico del período de los años cuarenta a los años sesenta, aunque al final de éste comenzó a observarse un declive de la producción en ciertos cultivos tradicionales producidos principalmente por sectores campesinos (Paz Sánchez, 1968).

Distrito Federal, organizada por la Unión de Campesinos y Estudiantes Tlaxcaltecas y la Federación Campesina Independiente del estado de Puebla (Gómez-Jara, 1982). En tanto, los procesos de movilización se iban acumulando y brotaron otras acciones como la cancelación de la entrega de caña en 100 ejidos de Veracruz, o las protestas campesinas contra la papelería de Tuxtepec en Oaxaca. Además, se registraron algunas movilizaciones por los precios que llegaron también a los estados de Coahuila y San Luis Potosí, las cuales fueron encabezadas por productores ixtleros y candelilleros, así como en Yucatán (con los productores de henequén), además de las invasiones de tierras promovidas por la Central Campesina Independiente (desde su ala no oficialista) en Guerrero (Moguel y Robles, 1990: 383-384).

De ese modo, en un lapso de 3 años se conformaron el 80% de las organizaciones que surgieron en esta fase de la lucha, cuya demanda central era la tierra (Rubio, 1996: 119). En ese sentido, esta etapa representó uno de los momentos de mayor efervescencia en el movimiento campesino independiente.

En ese marco, una de las organizaciones que lograron constituirse en esta etapa fue la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la cual se formó en 1975 a partir de la Central Campesina Independiente (CCI) dirigida por Ramón Danzós Palomino. Esta organización tenía como propósito plantear un trabajo organizativo entre campesinos y trabajadores del campo. En el momento de su surgimiento una de sus demandas principales fue la distribución de tierras, pero como parte de los objetivos que conservó desde su constitución como CCI también proponía la creación de sindicatos rurales. El trabajo de esta organización se desarrolló en el estado de Sinaloa y más adelante en Baja California. Sin embargo, su trabajo se extendió de igual manera a los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca (Lara, 1996: 96-97). La CIOAC llegó a tener presencia

nacional mediante el impulso a la lucha por la sindicalización y la producción agrícola, a finales de los años setenta²⁷ (Rubio, 1996: 121).

Por otra parte, las movilizaciones campesinas e indígenas desplegadas entre 1977 y 1983 permitieron la constitución de movimientos en defensa de los derechos humanos y la apropiación del proceso de producción. De acuerdo con Rubio (1987), a lo largo de este período se registraron en todo el país 2,838 movimientos, los cuales se concentraron en la región centro-sur principalmente en los estados de Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Chiapas, y en el norte del país en Sinaloa y Sonora, como se observa en el **Cuadro 1**.

Cuadro 1. Número de movimientos por regiones, 1977-1983

Entidad	Número de movimientos	Participación porcentual
Nacional	2,838	100%
Región Norte	625	22%
Sonora	124	
Sinaloa	150	
San Luis Potosí	124	
Jalisco	98	
Tamaulipas	78	
Zacatecas	51	
Región Centro-Sur	1,169	41.1%
Chiapas	202	
Hidalgo	114	
México	233	
Oaxaca	250	
Puebla	132	
Veracruz	238	

Fuente: Extraído de la libro de Rubio, Blanca. Resistencia campesina y explotación rural en México, Ed. Era, México, 1987, p. 31.

²⁷ Una característica de gran importancia que señala Rubio (1987) acerca de esta agrupación, es respecto al carácter ideológico del movimiento en tanto que asumía una posición: "...anticapitalista pues cuestiona socialmente la propiedad individual de la tierra y enfrenta como enemigos principales a la burguesía y al Estado. Es, además, un movimiento que tiene una orientación socialista, pues la solución cabal de sus demandas sólo se puede alcanzar con el cambio social. Esta convicción se expresa en la trayectoria de la lucha, así como en los programas políticos de las organizaciones independientes que lo dirigen." (Rubio, 1987: 23).

En esta segunda etapa comenzó a expresarse un sesgo anticampesino entre algunos funcionarios de la administración de López Portillo, lo cual se reflejaba en sus políticas antiagrarias.

En ese contexto, surgió la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en 1979. Ésta llegó a incorporar a más de 20 organizaciones con presencia a nivel regional. Dicha agrupación planteaba como uno de sus objetivos principales una alianza de clases entre el campesinado y el proletariado, concibiendo así al proletariado industrial como la vanguardia de la lucha por una transformación social de carácter estructural. La demanda central de esta organización era el reparto de tierras y su proyecto se orientaba hacia una transformación de carácter socialista. En ese sentido, se consideraba la lucha por la tierra como una fase de crítica hacia la forma de propiedad agraria fundada en el neolatifundio y se intentaba mostrar algunos de los efectos de la dinámica de desarrollo económico capitalista que imperaba en el campo sobre los sectores campesinos (Rubio, 1996).

Algunos autores sostienen que el movimiento constituido por las organizaciones que posteriormente formarían parte de la CNPA se desplegó en un sentido ofensivo, debido a que se basaron en acciones directas como la toma de tierras (Rubio, 1987; Rubio, 1996; Bartra, 2012). Ésta se configuró como un frente en el cual se encontraban diferentes organizaciones que concordaban en un conjunto de principios básicos:

1. Búsqueda de la independencia del campesinado en el ámbito político, en relación tanto al Estado como a las clases burguesas.
2. El carácter central en la lucha de la ‘movilización de masas’ como el método principal.
3. La postura de rechazo frente las posiciones colaboracionistas con respecto al gobierno o a las negociaciones con funcionarios de cualquier nivel.

4. La vinculación de carácter horizontal con otros sectores sociales en lucha.

5. La aspiración por la revolución socialista (Rubio, 1996: 121).

En ese marco, la CNPA proponía la transformación de las relaciones de producción a través de la lucha por la tierra. Además, reivindicaba la organización económica campesina y la organización política. Sin embargo, a partir de la primera mitad de los años ochenta comenzó a entrar en un proceso de debilitamiento y en 1984 se escindió, lo cual repercutió en la capacidad de movilización de esta organización (Rubio, 1987). Así como ocurrió con otras organizaciones, a medida que se acentuó el proceso de desvalorización de la parcela en términos productivos y empezó a perder relevancia en las estrategias de sobrevivencia de la población rural, la capacidad de convocatoria de los dirigentes de esta organización fue decayendo en sus intentos por aglutinar a grupos solicitantes de tierra (Rubio, 1996: 123).

Asimismo, otra agrupación que se había convertido en un referente significativo para la lucha campesina, como en el caso de la CIOAC, comenzó a enfrentar un proceso de declive y sus movilizaciones tuvieron un menor impacto debido al cambio de las condiciones políticas y económicas de la sociedad. Esto se debió principalmente al cambio derivado de la coyuntura política que se abrió a finales de los años setenta, ya que a partir del gobierno de López Portillo se hicieron modificaciones a la política agraria que redujeron de manera gradual el apoyo estatal al sector campesino. En términos generales, estos cambios se mantuvieron y profundizaron durante el gobierno de Miguel De la Madrid (Calva, 1988).

De esa manera, como ya se había señalado, a partir de la crisis económica de 1982 el Estado mexicano entró en un proceso de ‘adelgazamiento’ que provocó paulatinamente su desgaste. Debido a ello, su capacidad de acción se redujo y esto a su vez fue trastocando su papel como mediador en los conflictos dentro del espacio agrario. Así, se hizo evidente el

abandono por parte del Estado de ciertos sectores productivos en la agricultura, que hasta ese momento se habían dedicado a satisfacer la demanda de algunos bienes agrícolas y materias primas para el mercado interno.

A partir de 1983 las movilizaciones campesinas se caracterizaron por el surgimiento de un movimiento impulsado por campesinos medios y productores agrícolas con mayores recursos, cuya principal demanda era la lucha por el establecimiento de precios de garantía para los bienes agrícolas producidos, así como la creación de organizaciones que disputaban el excedente económico (Rubio, 2001). En esa etapa se comenzó a formar la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la cual se convirtió posteriormente en el referente más significativo de este tipo de organización. Por otra parte, y al igual que la UNORCA, las organizaciones que surgieron durante este período intentaban avanzar en la ‘vía productiva’, como en el caso de la Unión General Obrero Campesina Popular (UGOCP), la Unión de Ejidos del Valle del Yaqui, la Unión de Uniones de Chiapas y otras de carácter regional (Moguel, 1992: 17).

De tal manera, las transformaciones económicas ocurridas en el país plantearon un nuevo contexto para los movimientos campesinos que se desarrollaron en los años ochenta del siglo pasado. En el caso de la UNORCA, como se mencionó antes, empezó a articularse en 1983 pero terminó de constituirse hasta 1985. Y al haberse configurado como un movimiento amplio las organizaciones que la integraban se plantearon como objetivo principal impulsar una nueva forma de inserción de los productores rurales al proceso de acumulación, a partir de la apropiación del proceso productivo. Según Hernández: “Sus principales protagonistas han sido las organizaciones de productores, y su terreno de operación ha sido la región y la rama productiva o de servicios.” (Hernández, 1992: 251).

En ese sentido, las características de este movimiento fueron, entre otras, su conformación como una red de organizaciones rurales de carácter regional y local, cuyas posturas tanto políticas como ideológicas eran diversas y mantenían vínculos con distintos sectores productivos. De igual manera, se destacaba su estructuración y formas organizativas derivadas de la forma de organización de las comunidades rurales y ejidos, lo cual las orientaba a la resolución de los problemas de las propias comunidades de las que surgieron (Hernández, 1992).

Uno de los rasgos particulares que distinguen a la etapa de emergencia de este tipo de agrupaciones fue la relación específica que establecieron con el Estado mexicano. En ese sentido, debido al desgaste de la legitimidad registrado por ciertas organizaciones desde los años setenta (como las centrales campesinas tipo CNC, o la CCI oficialista, las cuales aglutinaban a nivel regional y nacional a distintas agrupaciones rurales), algunas organizaciones como UNORCA no plantearon una ruptura con el Estado, sino que su relación con éste se definió por la autonomía que mantendrían las organizaciones respecto a sus posturas ideológicas.

Con la creación del Congreso Agrario permanente (CAP) en 1990 –en el cual participaban la UNORCA, la CNC, la CCI, CIOAC y otras-, la cual fue promovida por el gobierno de Salinas de Gortari, se reconstituyó la relación de algunas organizaciones rurales con el Estado mexicano a partir de nuevos criterios. Esto le permitió a dichas organizaciones negociar bajo un marco concreto las solicitudes y apoyos que el Estado ofrecía a través de distintos instrumentos y programas que formaban parte de la política de concertación del Gobierno Federal.

Hacia finales de los años ochenta sobrevinieron otro tipo de movilizaciones y protestas convocadas por diversas agrupaciones campesinas²⁸, las cuales a pesar de haber conjuntado a distintos sectores, no tuvieron la fuerza suficiente para constituir un movimiento campesino de mayor amplitud.

En ese marco, a comienzos de la década de los noventa se aprobaron las modificaciones al artículo 27 de la Constitución política de México, las cuales tuvieron un gran impacto en el sector campesino. Como señalamos anteriormente, esta reforma estableció la cancelación total del reparto agrario y materializó la posibilidad de privatización y venta de las parcelas ejidales. Sin embargo, en rechazo al proyecto de reforma que presentó al Congreso de la Unión el entonces presidente Salinas de Gortari, se constituyó el frente denominado Movimiento Nacional de Resistencia Campesina (MONARCA), el cual estuvo conformado por diversas organizaciones como la CIOAC, el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), la Unión Campesina Democrática (UCD), entre otras. "Monarca impulsó un conjunto de movilizaciones, entre las que sobresalen la interposición de amparos contra la ley por parte de los núcleos campesinos, que para el 28 de marzo de 1992 abarcaban 14 estados. El 10 de abril del mismo año organizaron una marcha nacional y la constitución del Consejo de Organizaciones Agrarias (COA), formado por 18 organizaciones" (Rubio, 1996: 137).

A pesar de las protestas y movilizaciones Monarca no consiguió revertir las reformas a la Constitución, aunque tuvo la capacidad de reagrupar a las organizaciones campesinas que intentaban aglutinar a los grupos que demandaban tierras, pero sin poder revertir la

²⁸ A partir de la coyuntura política abierta por las elecciones federales de 1988 ciertas organizaciones replantearon cuál debía ser la relación de éstas con el Estado o con los partidos políticos. En cierta forma, esto sucedió con la conformación de la Unión Campesina Democrática a raíz del llamado del ex-candidato a la presidencia del Frente Nacional Democrático Cuauhtémoc Cárdenas, para formar una nueva central que aglutinara a las organizaciones y movimientos campesinos a nivel nacional.

tendencia existente en cuanto a la legalización de la venta y el parcelamiento individual en los predios ejidales, y el desistimiento en la demanda de tierras por parte de ciertas organizaciones rurales (Ídem).

A partir de la década de los noventa las transformaciones económicas ocurridas en el espacio rural del país favorecieron el establecimiento de nuevos mecanismos de subordinación de los productores rurales. En ese sentido, puede decirse que la configuración de una nueva etapa del capitalismo dominada por las empresas transnacionales terminó por aglutinar al sector capitalista dominante, mientras que se ponían en marcha ciertos mecanismos que han generado la desorganización de los sectores campesinos.

El nuevo contexto que surgió en el espacio rural a partir de estos cambios, se distingue no sólo por las características que adquirieron los movimientos rurales emergentes, sino también por las posturas que plantearon los actores respecto a la relación con el Estado mexicano, la reivindicación de sus rasgos identitarios y los cambios que han propuesto en torno al papel del campesinado dentro de la sociedad, no solamente en términos económico-productivos sino también en su dimensión sociocultural.

2.3 Caracterización del movimiento campesino e indígena de los años noventa y sus demandas por la autonomía, los derechos económicos, sociales y culturales.

Los cambios socioeconómicos generados por el fenómeno de globalización económica favorecieron la emergencia de diversas protestas, cuyas principales características fueron los componentes de carácter local-territorial, racial y de género, vinculados a la pertenencia de clase de los grupos que las han sostenido. Estos grupos se caracterizaron por acentuar la cuestión identitaria, sobre todo en el caso de las movilizaciones y levantamientos

protagonizados por grupos indígenas. Según Algranati y Taddei estos procesos se distinguen por haber sido:

...protagonizado por ciertas fracciones y grupos subalternos –particularmente aquellos de los más afectados por la lógica de desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo– y que, en condiciones extremadamente severas y en el marco de una gran asimetría de fuerzas, construyeron marcos identitarios, organizaciones y dinámicas de acción colectiva que, cuando emergieron a la luz pública, recibieron el nombre de *movimientos sociales* (Algranati y Taddei, 2011: 4)

Así, algunos de los movimientos que se estructuraron a partir de los años noventa no se basaban en elementos del todo distintos a los que se consideraban característicos de los movimientos rurales existentes durante los años setenta y ochenta del siglo XX. Sin embargo, las organizaciones rurales que surgieron en este período impulsaron diferentes estrategias para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural. En ese marco, la construcción de procesos organizativos por parte de los grupos indígenas o campesinos se basó en un proceso de reclasificación, en función de fenómenos como la exclusión social y el deterioro económico de amplios sectores de la población rural. En particular, las consecuencias de la desestructuración del sector agrícola –en el caso de México- han favorecido el incremento del desempleo y el subempleo en ese sector económico, los cuales han originado la reconfiguración identitaria de las organizaciones de trabajadores agrícolas y los sujetos sociales. Según Quijano:

...la rápida, más bien brusca, desintegración de la estructura que estaba en curso de desarrollo en estos países, produjo no solamente el desempleo, el aumento del subempleo y la rápida polarización social, sino también un proceso que puede ser reconocido como un proceso de reclasificación social que afecta a todos los sectores sociales y, obviamente, sobre todo a los trabajadores. Y ese proceso está asociado a una crisis de identidad social en todos los sectores, pero en primer término en aquellos cuya identidad era aún, o ya, ambigua y vacilante, empujándolos a la búsqueda urgente de otras nuevas identidades. (Quijano, 2006: 69).

Por otra parte, estas agrupaciones han planteado desde distintos enfoques algunas demandas en torno a la promoción de formas de organización autónoma y autogestionaria, así como la construcción de ciudadanía²⁹ entre los habitantes rurales. La demanda de autonomía implica, según Bastida (2001), la descolonización de los pueblos a partir del establecimiento de la libre determinación en sus territorios. En ese sentido, las agrupaciones que luchan por la autonomía plantean la lucha de los pueblos indígenas en el marco del Estado-nación. Esta lucha consiste en que: “varios pueblos indígenas dentro de un Estado nacional luchan para que sean reconocidos colectivamente como parte de la nación, y para lograr un estatus legal distinto en la Constitución política. Así, luchan para crear un estado multinacional, plurinacional, pluralístico y multiétnico”. (Bastida, 2001:115).

En tanto que, la libre determinación se refiere a cinco aspectos: a) autoafirmación, es el derecho a proclamar su propia existencia y ser reconocidos como tales; b) autodefinición, que consiste en determinar quién pertenece a que pueblo, tomándolo como un proceso inclusivo, no exclusivo; c) libre determinación jurisdiccional, respecto a la libertad de decidir sobre su territorio; d) la autoorganización, la cual se da como reconocimiento del poder del pueblo por el Estado, pues sustenta su autogobierno; e) autocontrol, que significa la administración de los propios pueblos con libertad, bajo su jurisdicción. (Bastida, 2001:117).

De otra parte, algunas organizaciones rurales han reivindicado la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, planteando su ejercicio en el contexto de la agudización de las condiciones de vida de una gran parte de la población rural. Tal como se señaló

²⁹ De acuerdo con De la Peña: “En la práctica, pueden distinguirse dos dimensiones de la ciudadanía: la formal y la sustantiva. La primera se refiere a la capacidad jurídica de acceder al ejercicio ciudadano; por ejemplo, el derecho de poseer un pasaporte, residir y trabajar en el país y transitar por su territorio, votar...etc. En cambio, la dimensión sustantiva requiere de la adhesión intelectual y emotiva a los valores y normas básicas de la colectividad estatal de la que se es miembro, así como la participación en la realización de esos valores.” (De la Peña, 2007: 142).

anteriormente, la construcción de ciudadanía en el espacio rural se fundaría en el reconocimiento de un conjunto de derechos económicos como el derecho al trabajo, así como algunos derechos sociales como el derecho a la alimentación, o a la recepción de determinados servicios como vivienda, agua potable y servicios básicos (Torres, et al., 2012). A su vez, estos constituyen un piso básico para garantizar la existencia de cualquier sujeto en una sociedad dada, sin considerar las diferencias en términos étnicos, de género y socioeconómicos. En ese sentido, existe una situación determinante de los procesos de organización en el ámbito territorial dado que las formas sociales y colectivas son fundamentales para la creación de vínculos no articulados a partir de la relación de capital o las relaciones estatales.

El empleo de este marco de derechos por parte de algunas agrupaciones se basa en la intención de obligar al Estado a atender sus demandas en términos de necesidades sociales y económicas. Sin embargo, también se plantea el reconocimiento por parte del Estado de otro tipo de reivindicaciones relativas al carácter cultural de algunos grupos étnicos. Fundamentalmente, en el caso de las agrupaciones indígenas, se refiere a la demanda de respeto a las diferencias étnicas y raciales de estos grupos sociales –que habitan principalmente en zonas rurales- como integrantes del Estado-nación. Estas demandas implican el reconocimiento de la exclusión socioeconómica a la cual la sociedad y el Estado-nación han sometido a diferentes grupos étnicos, a partir de las diferencias culturales que existen entre estos y una mayoría de población ‘mestiza’.

2.4 Movimientos campesinos-indígenas emergentes en la década de los noventa.

Durante la década de los noventa del siglo XX surgieron movilizaciones y rebeliones rurales derivadas del proceso de modernización rural impulsado por el capital transnacional en México (Semo, 2010).

Los movimientos, protestas y rebeliones que se desplegaron en este período estuvieron conformados no solamente por grupos campesinos e indígenas, sino que también participaron diferentes sectores de productores rurales, ejidatarios, campesinos medios e incluso empresarios agrícolas medios que habían caído en moratoria de pagos con la banca privada. En relación a este último elemento, uno de los movimientos más relevantes fue el denominado como El Barzón (Grammont, 2001). Esta agrupación rural se constituyó en 1993 con base en una alianza pluriclasista de productores rurales, empresarios agrícolas y ejidatarios de distintos niveles socioeconómicos, los cuales plantearon demandas y proyectos que contenían algunos elementos que recuperaban de algún modo la acumulación específica de experiencia derivada de la organización campesina en sindicatos y agrupaciones de carácter clasista de las dos décadas anteriores. Así, este movimiento enarbolaba un proyecto de producción agrícola sustentado en el nacionalismo revolucionario que promovía la autosuficiencia alimentaria (Grammont, 2001).

Por otro lado, las transformaciones económicas que se desplegaron en la estructura agraria a partir de la nueva fase agroexportadora neoliberal, produjeron cambios significativos al interior de las clases subordinadas rurales. En ese contexto, algunas respuestas emergieron también por parte de diversos sectores campesinos e indígenas que habían sufrido directamente los efectos del despojo de sus tierras y la exclusión económico-social. No obstante, estos sectores conformaron otro tipo de sujetos debido a su capacidad de articular actores sociales que crearon su identidad en relación al elemento étnico (Quijano, 2006), y

cuyos procesos organizativos se fundan en sus estructuras comunitarias (López Bárcenas, 2005). Como afirma Burbano: “La fuerza del movimiento indígena se explica precisamente por la capacidad que ha tenido para construir un sujeto político a partir de esta resignificación de ‘lo indígena’.” (Burbano, 2005: 247).

En cuanto a los movimientos indígenas con estas características y que emergieron en México durante la década de los noventa, el caso más paradigmático fue el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Éste surgió públicamente el primero de enero de 1994 como un movimiento armado que llevó a cabo una rebelión en algunos municipios del estado de Chiapas. Ese movimiento conformado por indígenas y campesinos de distintos municipios de aquel territorio planteó como eje central de su lucha la integración de los indígenas y campesinos excluidos social y económicamente, a través de propuestas organizativas basadas en la autonomía territorial, productiva, política y de carácter democrático (López y Rivas, 2004).

Los grupos neozapatistas y otras organizaciones rurales que han formado parte de estas luchas desde 1994 y 1996, momento en que se estableció un proceso de diálogo con el Gobierno Federal mexicano en el cual comenzaron a reivindicar el respeto a los derechos colectivos de sus pueblos a través de su reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concibieron la autodeterminación como una estrategia para el ejercicio de estos derechos partiendo de la autonomía de las comunidades y pueblos que habitan en diferentes regiones y territorios del país (López y Rivas, 2004).

Las implicaciones políticas de dicho esquema de organización y lucha no son solamente la creación de formas políticas de autoridad y gobierno paralelas a las formas políticas estatales, sino más aún la oposición al Estado-nación monocultural (López Bárcenas, 2005; García Linera, 2008). Considerando lo anterior, Quijano menciona que: “...sectores

crecientes de la población popular de América Latina y dentro de ellos los ‘indios’, han aprendido o están rápidamente aprendiendo que tienen que encontrar maneras no sólo de vivir del Estado, sino de vivir sin o contra el Estado.” (Quijano, 2006: 71).

El EZLN continúa con una estrategia de larga duración que comenzó con la desaparición de los municipios autónomos (Aguascalientes) asentados en algunas zonas de Chiapas, que les permitieron iniciar el proceso de apropiación de los territorios y la permanencia de la lucha por éstos. Su reivindicación de la autonomía dio paso a otra etapa con la creación, en agosto de 2003, de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y los Caracoles. Ambos han conformado el marco sobre el que se han consolidado las prácticas autonómicas de los grupos indígenas que constituyen al EZLN. Algunos autores conciben a los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno más como instituciones paralelas (Martínez, 2006), que como formas organizativas que sirven para llevar a la práctica el proyecto autonómico de este movimiento indígena. No obstante, estas formas organizativas les han permitido contrarrestar, en cierta medida, la influencia que han intentado ejercer ciertas instituciones estatales y grupos de la sociedad civil, a través del ofrecimiento de recursos para proyectos productivos y apoyos a partir de los programas de gobierno.

Por otra parte, estas acciones se han alternado con la realización de encuentros dentro de los territorios autónomos entre diversas organizaciones y grupos de la sociedad civil. Entre ellos destaca la realización de “La Escuelita Zapatista”, en agosto de 2013, que ha funcionado como un espacio de encuentro para la difusión de las experiencias de estas agrupaciones en los territorios autónomos. En esta etapa, el EZLN se ha concentrado en los procesos organizativos que ya existen dentro de sus comunidades invitando a otras agrupaciones a compartir su aprendizaje en torno a la práctica de la autonomía.

Sin embargo, la coyuntura política que abrió su levantamiento –y aún sus acciones más recientes- no han dado paso a una articulación con otros sectores de la sociedad que hagan posible una ruptura social³⁰, para poner en marcha el proyecto político del cual son portadores. Aunque el EZLN forma parte de un conjunto diverso de sujetos sociales que a lo largo de los años noventa y principios del siglo XXI han asumido la representación político-social de las demandas de la población indígena, éste sintetiza en sus planteamientos las reivindicaciones de ese sector social.

Otra organización que emergió a partir de la coyuntura abierta por la irrupción del neozapatismo, como en el caso del Congreso Nacional Indígena (CNI), se pensó principalmente en el ámbito de la lucha política por parte de las comunidades indígenas y sus miembros. El CNI surgió como un espacio de discusión para las organizaciones indígenas durante el periodo de discusión y diálogo por los derechos de los pueblos indígenas entre el EZLN y el Gobierno Federal mexicano, a fines de 1995 y principios de 1996. El Foro Nacional Indígena (FNI), cuya conformación pretendía crear un espacio para la discusión de los temas tratados en la mesa uno del diálogo de San Andrés –realizado en febrero de 1996- tuvieron relevancia en la medida que acordaron un programa de trabajo, ciertas demandas y la base para los acuerdos que se lograron en la mesa del diálogo (Vera, 1998: 42).

Los miembros del CNI surgen nuevamente en el 2001, con la realización de su tercer congreso en Nurio, Michoacán, y junto con el EZLN realizan la “Marcha del color de la tierra”. El CNI tenía desde su surgimiento cierta concepción de la organización del

³⁰ Entendemos por ruptura social a: “uno o varios movimientos amplios y drásticos de presión. Puede tomar muchas formas diferentes: disturbios inconexos en muchas partes del país; resistencias civiles masivas antes y después de una victoria electoral de izquierda; movimientos de movilización ciudadana en favor de la política del nuevo gobierno.” (Semo, 2010: 16).

movimiento indígena en un plano horizontal, para evitar principalmente la cooptación que las instituciones estatales intentaban ejercer en su propósito de controlar al movimiento y desactivar a los grupos y organizaciones reunidas en éste.

En ese contexto, el CNI mostró cierta capacidad organizativa ante sus adversarios a través de la lucha contra la decisión del Poder Legislativo en 2001, es decir, del Congreso de la Unión (tanto la Cámara de senadores como la de diputados), y a nivel regional de los gobiernos estatales y congresos locales de aprobar la Ley de Derechos y Cultura Indígena. A través de la movilización, distintas agrupaciones rurales en diferentes estados del país lograron presionar a sus congresos locales para no aceptar el proyecto de Ley, el cual había sido reformado en la Cámara de senadores y aprobado por ambas cámaras (senadores y diputados), para después ser enviado a las legislaturas estatales. En algunas de ellas se logró presionar para el rechazo de la Ley, aunque no con la fuerza suficiente para derogarla³¹.

En la actualidad, el CNI continúa vigente porque los factores que lo hicieron surgir no han cambiado. Sin embargo, cada organización integrante del mismo ha construido su propio esquema de participación en ese espacio de discusión. En ese sentido, estas experiencias han influido en las percepciones de los actores rurales, permitiendo la generación de otros procesos organizativos y relaciones sociales, a partir de las cuales se vinculan y llevan a la práctica distintas visiones las agrupaciones rurales y sus comunidades. De esta manera, existen algunos elementos que distinguen a estas organizaciones que se han desplegado en

³¹ Según Díaz-Polanco: “Los indígenas fueron víctimas, en fin, de la lógica del mismo poder que querían cambiar. Quedaron atrapados en un círculo vicioso: reclamaron ser parte de la nación, y en particular de los órganos de decisión del Estado, pero la decisión legal sobre ese ingreso la tomaron unos órganos superiores del Estado (el Congreso de la Unión, y los congresos de los estados) de los que precisamente *no son parte* los pueblos indígenas, lo que, a su vez, en buena medida explica el porqué fueron rechazados [...] La voluntad que fue capaz de sobreponerse a la palabra empeñada e ignorar las aspiraciones de los pueblos en el Congreso, sólo podía ser contrarrestada por una fuerza política autonomista, popular e independiente, de magnitud y empuje suficientes como para hacer impagable el costo de la resolución de abril. Esta vez, el zapatismo y el movimiento indígena no consiguieron reunir esa fuerza.” (Díaz-Polanco, 2007: 141).

determinadas regiones rurales, a partir de ciertos elementos que han incidido en la conformación de nuevos esquemas de organización de estos grupos.

2.4.1 Planteamientos sobre la creación de mecanismos de gestión colectiva de los recursos naturales.

Las agrupaciones rurales configuradas en torno a ejes organizativos como la reivindicación de la autonomía, los derechos sociales, económicos y culturales, también han recuperado algunos mecanismos de gestión colectiva de sus recursos naturales. Aunque este trabajo no pretende tratar tan ampliamente este tema, es necesario destacar ciertos elementos característicos.

Partimos del supuesto de que en las agrupaciones integradas en función del elemento 'indígena' existe una concepción de la comunidad no como institución o forma de organización, sino como una forma que adoptan los vínculos entre los sujetos. La comunidad precede y persiste al movimiento, y no es esencialista. Pero un sistema comunal se expresa en formas económicas y políticas: tanto la propiedad colectiva de los recursos, como el manejo o uso privado de los mismos, la deliberación colectiva y la rotación de la representación, en donde el representante no es designado para mandar sino para organizar el curso de la decisión común (Zibechi, 2007).

Por otro lado, como se planteaba más arriba, en la concepción de la autonomía la dimensión territorial adquiere un sentido fundamental dado que constituye el ámbito donde se construyen las organizaciones locales, así como las instituciones colectivas que deciden el uso de bienes comunes como el agua, los bosques (Torres, et al, 2012: 17).

Capítulo 3. Desestructuración económica en municipios del estado de Veracruz 2000-2012.

En el presente capítulo se analizan las características del proceso de desestructuración económica en el territorio del estado de Veracruz. Se destacan algunos de los efectos de dicho proceso en la estructura productiva agropecuaria de los municipios estudiados (de acuerdo con la presencia que tiene la organización MAIZ en ese espacio). Se describe la composición sociocultural de las agrupaciones que habitan esos municipios. Se analiza el impacto de procesos como el avance de la certificación de las parcelas ejidales, así como otros derivados de la desestructuración económica y sus efectos sobre el campesinado a partir de algunas variables de análisis, que permiten observar el comportamiento del fenómeno y la profundidad que alcanza en los territorios estudiados.

3.1 Caracterización del proceso de desestructuración económica en el espacio rural veracruzano.

Desde finales de los años noventa del siglo pasado, el fenómeno de desestructuración económica ha impactado distintas regiones en México. La dimensión económica de éste es relevante en tanto que se ha expresado a partir de las modificaciones registradas en la estructura productiva agropecuaria del país. No obstante, este fenómeno se ha acentuado a lo largo de la fase actual del capitalismo globalizado debido a que las transformaciones económicas han tenido un impacto significativo no sólo en los distintos sectores de la actividad económica, sino que también ha fomentado la desestructuración de determinadas agrupaciones rurales tanto al nivel de comunidades como de individuos³².

³² Bilbao (1993) propone que esta desestructuración se puede concebir como un proceso que antecede al establecimiento de la acumulación flexible e incide a nivel de la identidad de clase de los sujetos, en el proceso de su transformación en ciudadanos que orientan su acción en tanto que individuos. Asimismo, otros autores proponen el empleo de este concepto para caracterizar la dinámica de estructuración y

Entendemos la desestructuración económica en el espacio rural como un proceso de desintegración de las relaciones y estructuras socioeconómicas, el cual se enmarca dentro de la dinámica de reconstitución de la estructura social en tanto que: “la creación de la estructura de la sociedad, tiene lugar cuando se crean en su seno determinadas instituciones, o sea, modos repetibles de comportamiento colectivo, cohesionados y controlados socialmente; dichas instituciones, que sobreviven a cada hombre, aseguran la continuidad de la sociedad y de su estructura.” (Bauman, 1975: 27).

Los cambios en la política dirigida al sector agropecuario que el Estado mexicano ha definido a lo largo de las dos últimas décadas han motivado de manera significativa este proceso. Estos cambios, como hemos planteado en capítulos anteriores, se registraron a partir de la constitución del patrón de acumulación neoliberal y permitieron la implantación de lo que se ha denominado como la fase agroexportadora neoliberal (Rubio, 2001).

“El contenido de este proceso es el de organizar a la fuerza de trabajo desde el punto de vista de las determinaciones del capital” (Bilbao, 1993: 49). Este proceso concebido por algunos autores como de reestructuración-desestructuración³³ (Bustos, 2002), se ha desplegado como un mecanismo que favorece el reordenamiento de los elementos y agentes socioeconómicos funcionales a un sistema económico-productivo conformado en un espacio determinado.

Una de las regiones del país en la que se han expresado de manera más clara estos procesos desde la década de los noventa es la denominada como sur-sureste. Esta región, en la que se

desestructuración sociales, así como también para distinguir el uso del concepto de estructura del que se plantea desde la postura estructuralista (Lefebvre, 1973: 141).

³³ Bustos (2002) plantea que la reestructuración es: “un proceso de cambio profundo que abarca la totalidad de lo social, tiene un sustento ideológico y económico que lo explica y que progresivamente se impone al territorio.” (p. 115).

encuentra inserto el territorio³⁴ de Veracruz, se ha caracterizado: “por su falta de acceso a los centros dinámicos del país y la carencia de conexiones directas de cierta envergadura a los mercados internacionales” (Torres Torres, 2006: 57), por lo que solamente se han dado ciertos procesos económicos autónomos a una escala menor.

En este marco, a lo largo de la última década el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se ha convertido en un escenario representativo para observar las transformaciones económicas impulsadas durante esta fase del capitalismo en el campo mexicano. En cuanto a su ubicación geográfica el territorio del estado de Veracruz se encuentra en las coordenadas geográficas: 22°28’-17°09’ latitud norte; 93°36’- 98°39’ de longitud oeste. Al norte colinda con el estado de Tamaulipas, al este con el Golfo de México; al sur con Tabasco, Chiapas y Oaxaca; y al oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. En cuanto al porcentaje de territorio que ocupa a nivel nacional el estado de Veracruz-Llave representa el 3.7% de la superficie del país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2000). Por otro lado, según su división política y territorial Veracruz está constituido por 212 municipios (INEGI, 2010).

Siendo un estado cuya economía había dependido tradicionalmente de la inversión estatal en la industria petrolera, así como de algunas agroindustrias en el caso del azúcar, el tabaco y el café, hacia finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado comenzó a percibir las consecuencias del adelgazamiento de la paraestatal petrolera Petróleos mexicanos (Pemex), y la privatización de empresas estatales dedicadas a la producción de insumos y la comercialización de los productos agroindustriales (Fertimex, Inmecafé, Tabamex, Azúcar S.A.). Estos procesos tuvieron consecuencias importantes en

³⁴ Larroa propone que el territorio es una construcción social que se debe analizar en función de su “desarrollo y contexto histórico, geográfico, económico, social, político, ambiental y cultural” (Larroa, 2010: 273).

tanto que incrementaron la desocupación entre los grupos de trabajadores eventuales, temporales y empleados indirectos (Mestries, 2009).

Asimismo, se puede considerar que el principal factor que originó el descenso de la actividad industrial durante las dos últimas décadas del siglo XX fue la crisis del sector, el cual había sido cobijado a partir del patrón de sustitución de importaciones. Ésta llevó por un lado al agotamiento de algunos sectores productivos dedicados a la extracción de recursos naturales y a la caída de la rentabilidad de los bienes primarios que trajo consigo una consecuente descapitalización de las empresas paraestatales. Durante el período señalado:

...el sector primario sufrió una reducción drástica de su participación en el producto estatal y del valor real de su producción, al caer de 14% a 9.2% del PIB entre 1985 y 1993, y, sin embargo, seguía empleando 32% de la PEA, lo que refleja un crecimiento del sub-empleo y de la pobreza rural [...] La situación no ha mejorado desde entonces, pues la crisis de 1994 golpeó duramente la economía del estado (café, ganado, construcción, comercio, etc.), provocando una tasa de desempleo de las más altas del país (6% en 1998), y el PIB estatal se fue rezagando desde 2000, al pasar de un crecimiento de 1.6% anual de 1994 a 2000, a un decrecimiento de 0.2% en 2001-2002, evidenciando un deterioro económico. (Sánchez Daza y Martínez, 2005 en Mestries, 2009: 214).

De otra parte, como se señaló anteriormente, la economía del estado de Veracruz ha registrado un descenso de la participación porcentual de las actividades económicas del sector primario en el producto interno bruto (PIB) estatal, el cual disminuyó de 7.54% en 2003 a 5.88% en 2011. A su vez, esta disminución refleja la tendencia registrada a nivel estatal de concentración en ciertas actividades económicas que se realizan en las áreas urbanas y determinados espacios rurales (ver **Cuadro 2**).

Así pues, el crecimiento de la actividad económica en el estado de Veracruz se ha basado en la expansión de las actividades asentadas en espacios urbanos³⁵. Esto ha favorecido un incremento de la población ocupada en las actividades económicas de los sectores secundario y terciario. Ambos sectores en conjunto concentraban en promedio para el año 2000 un total de 1,742,216 personas (del conjunto de la población económicamente activa [PEA]), elevándose a un promedio de 2,389,183 en el 2012, lo cual representa un aumento de 37% en un período de 12 años (ENOE, 2013).

Cuadro 2. Participación porcentual de las actividades económicas en el PIB del estado de Veracruz.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	(porcentajes)								
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, caza y -----	7.54	6.31	6.05	5.58	5.36	5.41	5.57	6.27	5.88
Minería	3.62	4.81	5.88	7.35	8.90	10.71	7.03	8.33	9.99
Construcción	6.49	6.73	7.37	10.05	9.55	8.43	11.98	10.35	9.86
Industrias manufactureras	16.38	18.23	16.87	15.92	15.63	15.80	15.14	14.58	14.53
Comercio	13.85	13.81	14.03	13.52	13.65	13.43	12.78	13.72	14.16

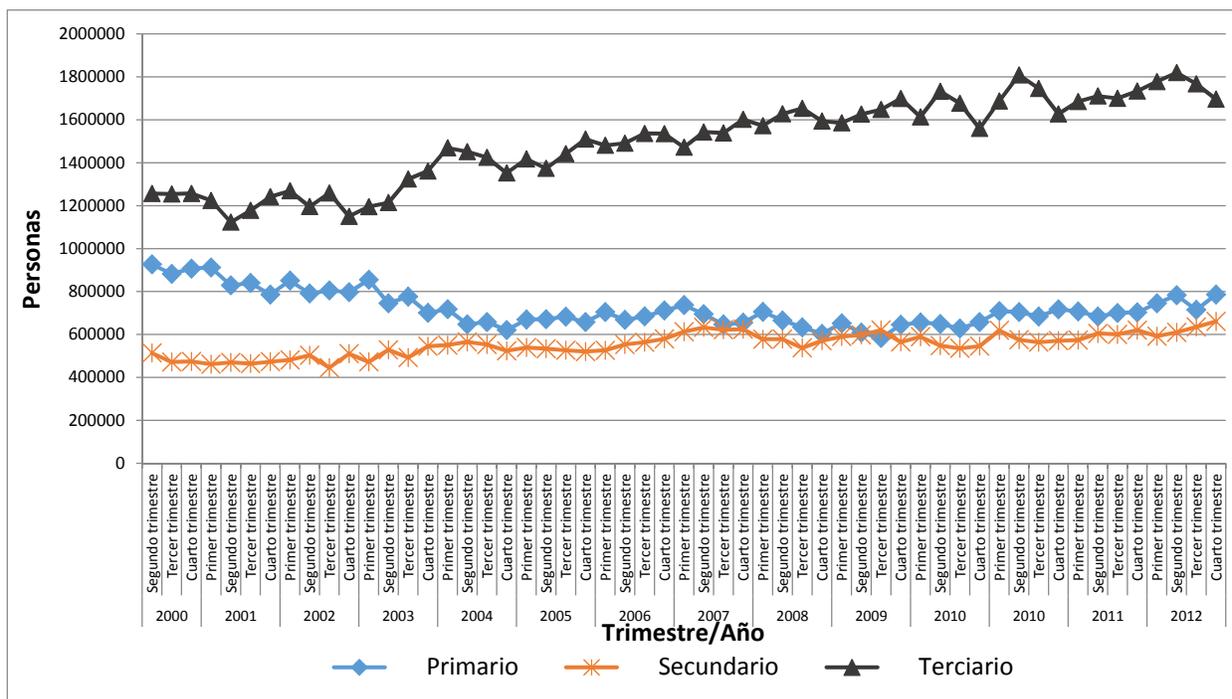
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cifras preliminares a partir de 2010.

En contraste, la población ocupada en el sector primario ha disminuido en términos absolutos pasando de un promedio de 905,382 personas (de la PEA) que participaban en ese sector durante el año 2000 a una media de 757,084 en el 2012, lo que representa una reducción de 16% en el mismo período (ver **Gráfica 2**) (ENOE, 2013).

³⁵ Así, aún con el aumento de la producción en el sector de la industria minera la concentración de las actividades económicas se ha mantenido en el sector de industrias manufactureras, a pesar de que su participación en el PIB ha disminuido de 16.38% a 14.53% en el mismo período. En tanto que el sector comercio ha elevado ligeramente su participación en el PIB al pasar de 13.85% a 14.16% entre 2003 y 2011 (INEGI, 2013).

Gráfica 2. PEA ocupada en los Sectores Primario, Secundario y Terciario en el estado de Veracruz, 2000- 2012



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Consulta interactiva de datos (Infolaboral). Consultada el 27 de octubre de 2012.

Estos datos muestran la caída en cuanto a la población dedicada a actividades agropecuarias en el estado, frente al ascenso de otras actividades económicas. Como señalan algunos autores, Veracruz “...de ser un estado eminentemente agropecuario pasó a ser otro de características distintas, empleando a la mayor parte de la población trabajadora en los servicios, sobre todo en el comercio.” (García, 2011: 533). Como se observa en la **Gráfica 2**, la población que participa en el sector terciario se ha incrementado desde el año 2000 cuando la media de personas que se ocupaban en éste era de 1, 255, 731, alcanzando en 2012 una media de 1, 764, 819 personas (un incremento del 40% durante el período). No obstante la tendencia descendente de la población ocupada en las actividades del sector

primario, para el año 2012 el número de personas que aún se encontraban activas en dicho sector superó a las que se ocupaban en el sector secundario (un promedio de 624, 364).

De ese modo, las modificaciones que se observan tanto en el número de personas ocupadas en el sector primario, como en la participación del sector en el PIB del estado de Veracruz representan algunas de las dimensiones del proceso de desestructuración en el sector. Esto refleja lo que ha ocurrido durante los primeros doce años de este siglo en ese territorio a partir del descenso de las actividades agropecuarias, no sólo en la economía sino también en la composición social de un sector mayoritario de la población el cual ha cambiado respecto al tipo de actividad que realiza.

“Al final del siglo XX [y principios del XXI] la población se ha vuelto predominantemente urbana.” (García, 2011: 533). Lo anterior no sólo ha acentuado la dispersión que en la actualidad define espacialmente a la población rural sino que también ha acelerado el incremento de la población que habita en condiciones precarias en esas áreas, lo cual ocasiona la migración que concentra a la población en determinadas urbes que se expanden. En ese marco, dentro del estado de Veracruz el alto nivel de marginación social sigue redundando en un porcentaje importante de la población en situación de pobreza³⁶.

No obstante las modificaciones que se observan a nivel estatal, en los municipios de Catemaco, Coyutla, Filomeno Mata, Mecatlán, Pajapan y Sotapan, el porcentaje de la Población económicamente activa (PEA) ocupada en el sector primario es predominante en 4 de ellos, mientras que solamente en dos ésta es menor al 50% (INEGI, 2010).

³⁶ De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el estado de Veracruz ocupaba en 2010 el 4to. lugar a nivel nacional con un grado de marginación alto. A su vez, en el 2012 la población en situación de pobreza era de 52.6% lo que representaba una cifra de más de 4 millones de habitantes (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2013).

3.2 Estructura productiva agraria en los municipios de Catemaco, Coyutla, Pajapan, Soteapan, Mecatlán y Filomeno Mata.

De los municipios seleccionados para este estudio los de Catemaco, Pajapan y Soteapan se ubican en la parte sur del estado de Veracruz y corresponden a municipios cuyo espacio se compone principalmente de zonas rurales y semiurbanas³⁷. El porcentaje de la PEA ocupada en el sector primario es de alrededor del 27% en Catemaco y casi del 48% en Pajapan, mientras que en el municipio de Soteapan rebasa el 75% (INEGI, 2010). Por otro lado, los municipios de Coyutla, Mecatlán y Filomeno Mata se localizan en el norte del estado de Veracruz. Los dos primeros se caracterizan por estar conformados principalmente por áreas rurales. No obstante, el municipio de Filomeno Mata se compone de una localidad semiurbana, primordialmente³⁸. A pesar de esto, en los municipios de Mecatlán y Filomeno Mata la PEA ocupada en el sector primario alcanza el 53.6% y el 57.5% respectivamente, mientras que en el municipio de Coyutla este porcentaje es casi del 52% (INEGI, 2010).

En el **Cuadro 3**, se observa el número de unidades de producción existentes en los municipios estudiados. El municipio con mayor número de unidades de producción es el de Soteapan con un total de 5,053 de las cuales 4,353 están dedicadas a actividades agropecuarias o forestales, en tanto que la superficie de estas es de 34,831 ha. (la de mayor extensión en este conjunto). Los municipios restantes poseen menos unidades de producción así como superficies dedicadas a actividades agropecuarias y forestales de

³⁷ En el municipio de Catemaco la población que habita en localidades menores a 2,499 habitantes es de 43.17%; en cuanto al municipio de Pajapan la población que vive en el área rural es de 47%, mientras que en el municipio de Soteapan ésta alcanza un 42%. Sin embargo, ninguna de las localidades semiurbanas en estos municipios rebasa los 50,000 habitantes (INEGI, 2010).

³⁸ El municipio de Coyutla cuenta con una población de 61.14% que habita en áreas rurales y en el municipio de Mecatlán dicha población alcanza el 56.12%; a diferencia de estas, en el municipio de Filomeno Mata esta población representa solamente el 19% (INEGI, 2010).

menor tamaño. De estos, el municipio de Filomeno Mata es el que posee el menor número de unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal (1,143).

Cuadro 3. Unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal y sin ella en los municipios de Catemaco, Coyutla, Filomeno Mata, Pajapan, Soteapan.

Municipios	Unidades de producción ^a	Superficie total (ha)	Con actividad agropecuaria o forestal ^b	Superficie total (ha)	Sin actividad agropecuaria o forestal ^c	Superficie total (ha)
Catemaco	3 345	48 455.36	2 032	25 633.02	1 313	22 822.34
Coyutla	3 545	20 769.37	2 997	13 370.85	548	7 398.52
Filomeno Mata	1 250	3 501.06	1 143	2 462.31	107	1 038.74
Pajapan	2 363	27 893.08	1 840	19 066.79	523	8 826.28
Soteapan	5 053	41 332.87	4 353	34 831.70	700	6 501.17

Fuente: INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.

a Incluye a las unidades de producción que reportaron exclusivamente vivero o invernadero.

b Incluye a las unidades que reportaron exclusivamente vivero o invernadero y venta de su producción.

c Incluye unidades de producción que reportaron otro tipo de actividades.

En estos municipios son tres los cultivos que se producen de manera predominante y dos de ellos conforman el sustento económico y alimenticio de su población: nos referimos al maíz y el frijol (el tercero es el café). Sin embargo, el cultivo de estos dos granos ha sido afectado por el proceso de desestructuración que se ha generado por distintos factores económicos y sociales. Entre ellos, como se ha señalado anteriormente, uno de gran importancia ha sido la desvalorización de los granos básicos como el maíz, frijol, trigo y arroz. Tal fenómeno se ha acentuado principalmente en esos bienes debido al “...declive de los precios y la sustitución de la producción nacional por la importada [...] Estos productos han sufrido una pérdida de valor a raíz de la firma del TLCAN, tanto en términos absolutos como en términos relativos [...]” (Rubio, 2009b: 195). Esta situación se debe principalmente a la eliminación de aranceles a las importaciones de alimentos registrada

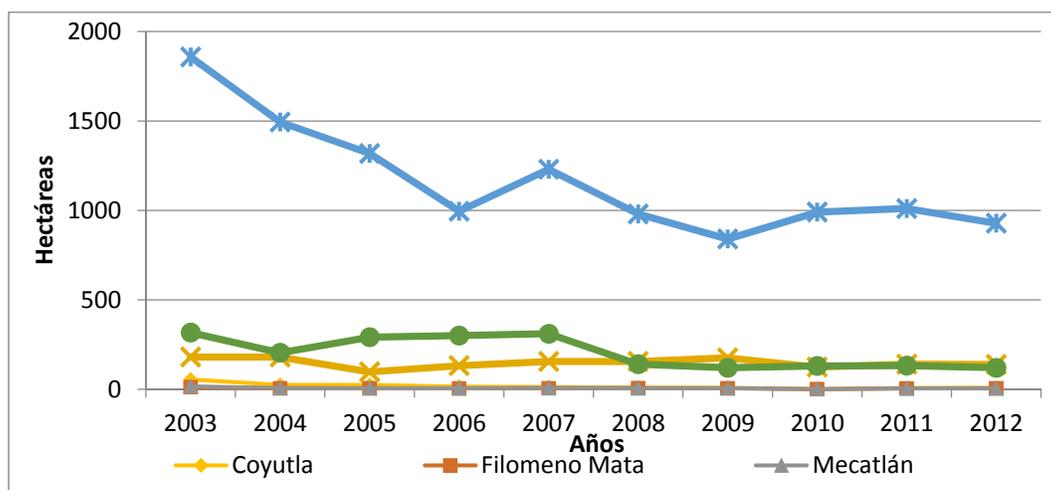
desde la entrada en vigencia del TLCAN en 1994, hasta la eliminación total de éstos en el 2008³⁹ y la desregulación del mercado interno del país, lo cual ha permitido un incremento sustantivo de las importaciones –ya que algunas empresas transnacionales ejercen el control en la comercialización de los bienes alimentarios- que ha provocado el descenso de los precios de esos bienes (Rubio, 2009b; Rubio, 2001).

El proceso de desvalorización de los granos básicos ha obligado a los pequeños productores y algunos sectores del campesinado medio a vender sus productos a precios que no les permiten recuperar los costos de producción, por lo cual pierden la capacidad de obtener un excedente para invertir en el siguiente ciclo productivo. De ese modo, la superficie cosechada con maíz se redujo de 613,645 ha. en 1995 a 470,753 ha. en 2003. En cuanto al frijol disminuyó de 43,209 ha. a 34,570 en el mismo período, mientras el cultivo de arroz ha pasado de 23,824 ha. en 1995 a 12,064 ha. en el año 2003 (Rodríguez, 2011: 595). Sin embargo, para el 2011 la superficie cosechada con maíz había aumentado a 534,550 ha. –cifra mayor a la de 2003, aunque no alcanzó la cantidad de superficie cosechada en 1995-; la de frijol descendió aun más al llegar a 32,069 ha., y de la misma manera se registró una reducción en el caso del arroz al disminuir la superficie cosechada a 6,087 ha. en el 2003 (INEGI, 2012).

Se puede afirmar que, en el estado de Veracruz el avance del proceso de desvalorización de granos básicos como el frijol y arroz, ha tenido como consecuencia la disminución de la superficie productiva. Así pues, si se exceptúa el cultivo de arroz –dado que no se produce en los municipios estudiados- las tendencias expresadas a nivel estatal respecto al cultivo de frijol se reproducen de manera similar en éstos (ver **Gráfica 3**).

³⁹ El 1° de enero del 2003 se desgravaron las importaciones agroalimentarias a excepción del frijol y el maíz, y el 1° de enero de 2008 se desgravaron también las importaciones de estos bienes.

Gráfica 3. Superficie cosechada de frijol en los municipios estudiados, 2003-2012



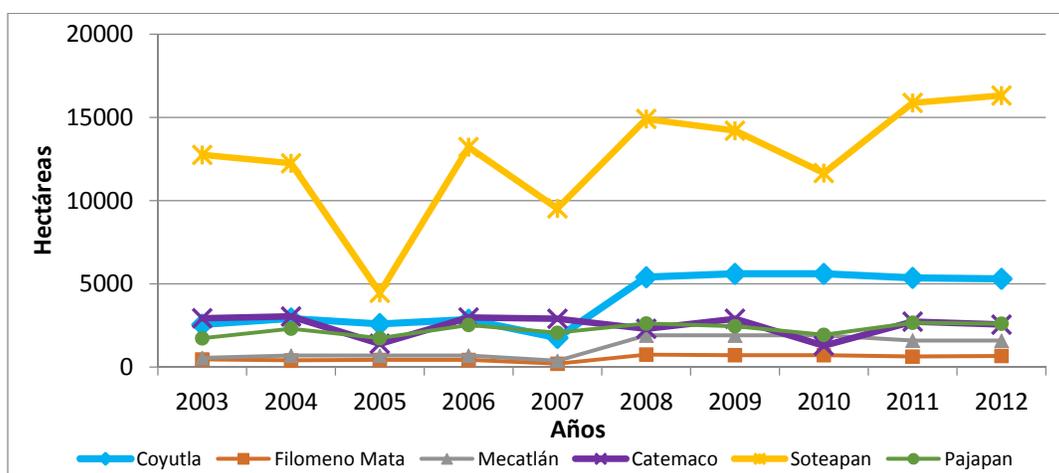
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
Año agrícola Otoño-Invierno, Primavera-Verano 2012. Modalidad riego y temporal.

En la **Gráfica 3** se observa el descenso en la superficie cosechada de frijol en los seis municipios analizados. No obstante, en el municipio de Soteapan se expresa con claridad la fuerte caída en la superficie cosechada de ese cultivo, la cual se puede atribuir al proceso de desvalorización que ha obligado a muchos pequeños productores a abandonarlo. En ese sentido, se puede afirmar que este proceso tiene una incidencia sobre la forma productiva de los campesinos que habitan en estos municipios provocando la desestructuración de sus unidades domésticas.

Algo distinto ocurre con el maíz, ya que en los municipios estudiados la superficie cosechada con ese cultivo registró un aumento en la cantidad de hectáreas cosechadas durante el período de 2003 a 2012, con excepción de una importante caída en el 2005 y otra ligeramente menor en el 2007 (ver **Gráfica 4**). En el caso de este cultivo, el municipio de Soteapan concentra la mayor superficie cosechada entre los municipios analizados, desde 2003, cuando ésta alcanzó una cifra superior a las 12,000 has. y llegó en 2012 a más de

16,000 has. A pesar de que en los otros municipios se observa que la superficie de cultivo de maíz es más baja, solamente en el municipio de Coyutla se observa un incremento significativo (donde aumentó de poco más de 2,000 ha. a casi 6,000 ha. en el período considerado). En los municipios restantes, el total de superficie cosechada de maíz se mantuvo por debajo de las 4,000 ha. e incluso menos de 500 ha. (en el caso de Filomeno Mata).

Gráfica 4. Superficie cosechada de maíz en los municipios seleccionados, 2003-2012



Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
 Año agrícola Otoño-Invierno, Primavera-Verano 2012. Modalidad riego y temporal.
 Se refiere a maíz en grano.

El aumento podría estar relacionado, por un lado, con el aumento del precio de ese grano en el mercado nacional, debido a las repercusiones que tuvo el incremento del precio de los granos básicos en el mercado internacional desde 2009-2010⁴⁰ (Rubio, 2011). Por otra parte, como refieren algunos autores, esta situación ha provocado que algunos sectores

⁴⁰ Para el 2011 la tonelada de maíz había aumentado su precio de \$3,100 a \$4,300 pesos, debido no solamente a la escalada de precios ocurrida desde 2009, sino también al impacto de las heladas en algunos de los principales estados productores en el país, cfr. *La Jornada*, Acusan a autoridades de minimizar desastre por las heladas en el norte, 17 de febrero de 2011.

depauperados del campesinado volvieran a cultivar maíz fundamentalmente para su alimentación y la de su familia (Rubio, et al., 2009).

Como se ha señalado, de los cinco municipios el de Soteapan es el que destina una parte importante de su territorio a actividades agrícolas como el cultivo de maíz. Esta actividad se ha conformado no sólo como una fuente de ingresos, sino también como una alternativa en la obtención de alimentos para el sector mayoritario de su población (PEA agropecuaria de 75%). En este municipio se ha mantenido en ascenso tanto la superficie cosechada como el volumen de producción de ese grano (en el 2012 la producción de maíz fue de 40,365 ton). Lo mismo sucede en el municipio de Pajapan donde ha habido un incremento de la superficie cosechada de maíz al pasar de 1,629 ha. en el 2003 a 2,604 ha. en el 2012, en tanto que el volumen de producción tuvo un incremento de poco más del 80%. Contrario a lo anterior, aunque en el municipio de Catemaco se muestra una disminución de la superficie cosechada de maíz a lo largo de los últimos 10 años al pasar de 2,932 a 2,550 ha., el volumen de producción aumentó casi en un 17%.

Además de estos dos cultivos, cuya extensión en cuanto a superficie cosechada es la más amplia en algunos de los municipios estudiados, existen otras actividades productivas agrícolas con un impacto importante en la economía de cada uno de ellos. Según el Censo Agropecuario de 2007, en estos municipios sobresalen otras actividades como la producción de cultivos perennes como el café que se realiza en los municipios de Catemaco (con una superficie en producción de 514 ha. y 789 ton. producidas), Coyutla (donde la superficie de producción fue de 602 ha. y se produjeron 953 ton.), Filomeno Mata (con 490 ha. y 812 ton. respectivamente), Mecatlán (con 676 ha. en producción y 1180 ton. producidas) y Soteapan (con 2368 ha. en producción y 3827 ton. producidas). Otro de los cultivos perennes con cierta importancia en cuanto a su extensión es la naranja que se

cultiva fundamentalmente en Catemaco (en este municipio la superficie en producción fue de 395 ha. y el volumen de producción fue de 4169 ton.), Coyutla (con 198 ha. en producción y 3153 ton. producidas), y en menor medida en Mecatlán, Pajapan y Soteapan (INEGI, 2009).

Finalmente, uno de los cultivos que tuvo una importancia significativa para el sector primario del territorio de Veracruz fue el tabaco, que en el municipio de Catemaco alcanzó en el año 2012 únicamente una extensión de superficie cosechada de 130 has., en tanto que se registró un volumen de producción de 130 ton. (SAGARPA, 2014). Como se observará más adelante, según los testimonios de campesinos, este cultivo fue importante en ese municipio, pero actualmente la cantidad de productores que lo siembran es baja.

Por último, el cultivo de pasto –cuya extensión es bastante amplia en ciertos municipios- y que se destina como alimento para ganado, fue el siguiente en 2007: en Catemaco la superficie en producción de pasto fue de 11,988 ha. y el volumen producido fue de 177,721 ton.; en Coyutla se destinó a ese cultivo una superficie de 1141 ha. y se produjeron 6,969 ton.; en Pajapan, uno de los municipios con mayor superficie de hectáreas de pasto en producción, ésta alcanzó 9,316 ha. y se produjeron 213,837 toneladas; mientras que, en Soteapan la superficie en producción fue de 5,944 ha. y la producción fue de 88,213 ton. (INEGI, 2009). Como se puede observar, estas cifras reflejan la importancia que tiene la producción de ganado en esta zona, ya que en muchos casos la siembra de pasto por parte de algunos productores tiene como objetivo la renta de sus terrenos para pastoreo de ganado ajeno.

Estos datos nos permiten hacer una aproximación a las características de la estructura productiva agraria de los municipios analizados, para conocer los diversos cultivos producidos dentro de su espacio rural. Y con base en ello, se puede afirmar que la

población que práctica actividades agrícolas se ha concentrado en aquellos cultivos que pueden proporcionarles un ingreso de acuerdo al precio que en el momento de la cosecha puedan obtener, así como en aquellos que son indispensables para la alimentación como el maíz. No obstante la información aquí referida, es necesario analizar algunas de las modificaciones inherentes a los cambios en la tenencia de la tierra en el espacio estudiado y consideramos importante recorrer de manera breve sus características.

3.3 Avance del proceso de certificación de tierras en ejidos y comunidades de los municipios estudiados.

Como se afirma más arriba, el estado de Veracruz se ha caracterizado por una fuerte presencia de actividades agrícolas y pecuarias bajo distintas modalidades de tenencia de la tierra. Las formas de tenencia de la tierra que se encuentran en ese territorio van desde las propiedades sociales que están representadas por los ejidos y las comunidades indígenas, las cuales coexisten tanto con la pequeña propiedad privada, así como con la denominada gran propiedad privada. Aunque en el caso de la pequeña propiedad, como han señalado diversos autores "...el término ocultaba la continuidad de grandes propiedades, sobre todo ganaderas, sin uso muy intensivo." (Skerritt, 2011: 469).

Según el Censo Ejidal de 2007, la superficie total de propiedades sociales en Veracruz aumentó en un 2.7% en el período de 2001 a 2007. En el 2001 el territorio veracruzano contaba con 3,624 ejidos y comunidades y ocupaba el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la cantidad de núcleos agrarios existentes, ubicados esencialmente en zonas rurales y algunos de ellos habitados por población predominantemente indígena. De éstos, 2,837 estaban inscritos en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y solamente 604 no estaban dentro del programa. En el 2007 el número de núcleos había

aumentado a 3,684 propiedades sociales en el estado. Y en el mismo año, el número de ejidos que habían optado por el dominio pleno⁴¹ representaba solamente el 3.2% respecto de la superficie total de las propiedades sociales en Veracruz.

De otra parte, los cambios económicos que hemos descrito anteriormente también han tenido cierta incidencia en cuanto a la tenencia de la tierra. Por un lado, en tanto que pequeños productores agrícolas un sector importante de los ejidatarios y comuneros no solamente enfrenta la agudización de las condiciones para producir determinados cultivos, sino que debido a la presión derivada del aumento de edad de sus descendientes y su consecuente necesidad de encontrar un espacio de inserción laboral, se ven obligados a dividir su parcela para dotar a alguno (s) de ellos o venderla. Este proceso ha favorecido la reducción de la extensión parcelaria en tanto que ha ocasionado el incremento del número de ejidatarios y comuneros en un 6%, así como el de poseesionarios⁴² en un 32% durante el período de 2001 al 2007. Por otro lado, a partir del PROCEDE, el cual fue instrumentado con base en la contrarreforma al artículo 27 constitucional, se hizo posible la venta de la superficie ejidal y comunal. En ese contexto, en el estado de Veracruz la superficie de ejidos y comunidades que se ha vendido en los últimos 10 años alcanzó un total de 181,371 has. (ver **Cuadro 4**).

De ese modo, en los núcleos agrarios que se encuentran en el territorio de este estado se observa un aumento en la compraventa de tierras, el cual se realiza principalmente entre los propios ejidatarios. Asimismo, los datos muestran que no sólo existen relaciones de compraventa con ejidatarios sino también con vecindados o poseesionarios (aunque no se

⁴¹ El dominio pleno es un procedimiento administrativo, el cual se deriva de la decisión manifiesta de la Asamblea a través del cual se formaliza el cambio de régimen de tenencia de las superficies ejidales o comunales a propiedad privada (INEGI, 2009).

⁴² El poseionario es un integrante del ejido que usufructúa tierras ejidales, parceladas o de uso común, aunque no haya sido reconocido como ejidatario por la Asamblea. Este puede alcanzar la titularidad de los derechos sobre una parcela individual a través del reconocimiento de la Asamblea (INEGI, 2009).

tiene un referente para comparar la diferencia que existe entre los dos años del período definido). Sin embargo, aun cuando es claro que durante el período de 2001 a 2007 la compra y venta de tierras ejidales y comunales entre las tres categorías de usufructuarios – incluyendo a las personas ajenas al ejido- se desacelera, el proceso no muestra signos de que pronto vaya a concluir.

Cuadro 4. Núcleos agrarios con compraventa de tierras en Veracruz

Concepto	2001 (Núm.)	2007 (Núm.)	2001-2007 (Núm.)
Ejidos y Comunidades	3,624	3,684	60
Con compraventa de tierras ejidales	2,659	2,802	143
Con ejidatarios		2,435	
Con avecindados o posesionarios		1,729	
Con personas ajenas al ejido		1,579	
Con compraventa de tierras ejidales con ejidatarios	2,459	1,797	-662
Con avecindados o posesionarios		300	
Con personas ajenas al ejido	1,556	705	-851
Superficie vendida en los últimos 10 años (Ha)		181,371	
No reportan compraventa	965	882	-83

Fuente: INEGI. Censo Ejidal 2001; Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal. Aguascalientes, Ags. 2009.

Contrario a ello, si partimos de las cifras referentes al total de núcleos agrarios que aparecen en el cuadro anterior observamos lo siguiente: las operaciones de compraventa de tierras que se registraron durante el 2007 no sólo rebasan el número de propiedades sociales (en 143 núcleos más que en 2001 se realizó alguna compraventa), sino que esta cifra fue superior al aumento observado en el número de ejidos y comunidades constituidos en Veracruz (en el 2007 existían 60 propiedades sociales más), para el período señalado.

A nivel municipal, este fenómeno también se ha presentado aunque no podemos ofrecer referentes muy precisos para conocer su dimensión territorial a nivel local. No obstante, los datos muestran lo siguiente para el año 2007: en el municipio de Catemaco la superficie

venta alcanzó un total de 1,243 has., y en Coyutla llegó a 295 has.; mientras que en Pajapan se registró la venta de una superficie de 1,069 has., y por último, en el municipio de Soteapan se han vendido solamente 1,085 has. De los cuatro municipios, el de Catemaco cuenta con la mayor cantidad de superficie vendida y en él se han realizado operaciones de compraventa en un total de 25 propiedades sociales de 30 existentes. Sin embargo, a pesar de que en los municipios de Coyutla y Pajapan existen cifras menores de superficie vendida del total de ejidos y comunidades (10 y 8 respectivamente), solamente en uno de ellos no se ha reportado compraventa (INEGI, 2009).

Los indicadores propuestos aquí nos llevan a suponer que el proceso de Certificación de las Parcelas Ejidales está avanzando en su objetivo principal: favorecer el desmantelamiento de los ejidos y comunidades agrarias despojando a la propiedad de la tierra de su carácter de bien social-productivo, lo cual ha sido posible a partir de la desestructuración productiva de estos espacios rurales. Aunque estos procesos están en marcha aún, una variable significativa a considerar en la modificación de las formas de vida de los habitantes de estos municipios se relaciona con los atributos étnicos que definen a algunos grupos de población que habitan en el estado de Veracruz. En particular, nos interesa conocer algunos de los rasgos de aquellos que viven en ciertas localidades del espacio estudiado y que a continuación intentaremos analizar.

3.4 Composición sociocultural de los grupos indígena-campesinos en localidades, ejidos y comunidades estudiadas.

Uno de los elementos relevantes respecto de la población que habita en los municipios y localidades aquí analizadas es su pertenencia étnica⁴³. Aunque no tratamos de hacer una

⁴³ En este trabajo entendemos lo étnico como un constructo cultural que permite la clasificación de un grupo social en función de criterios culturales, lingüísticos, rasgos raciales, orígenes comunes o adscripciones

caracterización muy precisa sobre este componente, dado que por sí mismo nos llevaría a considerar distintas dimensiones para el análisis, es necesario mencionar que la población que vive en el territorio del estado de Veracruz es diversa culturalmente ya que en ese espacio existen al menos ocho grupos étnicos entre los cuales se encuentran: Mixes, Popolucas, Totonacos, Tepehuas, Nahuas, Huastecos, Zapotecos y Otomíes. De estos grupos, cuatro de ellos se ubican en los municipios estudiados: en los municipios de la zona norte particularmente en Coyutla, Filomeno Mata y Mecatlán existen grupos Totonacos; mientras que en la zona sur se ubican los Popolucas en el municipio de Soteapan y los Nahuas en Pajapan y también en Soteapan.

Uno de los criterios empleados por INEGI para medir la pertenencia étnica de la población es a partir del habla de alguna lengua indígena. De acuerdo con esto, si consideramos a la población de más de 3 años que habla lengua indígena en los municipios estudiados podemos aproximarnos un poco a su representación real sin llegar a conocerla con precisión. Así pues, se tiene que para el municipio de Catemaco la población de 3 años y más que habla lengua indígena es en realidad mínima pues apenas alcanza un porcentaje de 0.65%, mientras que en el municipio de Coyutla dicha población llega al 59.5%, en tanto que en el caso de Filomeno Mata corresponde al 96.94% y en el municipio de Mecatlán representa el 93.93%, asimismo para el municipio de Pajapan esa población es del 61.07%, y finalmente en Soteapan ésta es del 84.16% (INEGI, 2010).

Los datos anteriores nos llevan a afirmar que en la mayoría de estos municipios la población que pertenece a un grupo étnico es significativa. Este hecho se expresa en los municipios estudiados ya que se registra una presencia importante de esa población, a

religiosas. En ese sentido, la etnicidad se puede definir como la identificación de un grupo social a partir de ciertos elementos que refieren una relación de pertenencia.

excepción del municipio de Catemaco en donde ésta apenas rebasa el 0.65%. Asimismo, en algunos de esos municipios como Filomeno Mata y Mecatlán el porcentaje de quienes hablan lengua indígena supera el 90%, lo que refiere una fuerte composición de población que pertenece a un grupo étnico, como señalamos arriba, el cual se trata en este caso del grupo Totonaco.

En resumen, estos datos arrojan una imagen de la población mayor de tres años que habla lengua indígena, lo cual solamente es un indicador de la presencia de esa población en estos municipios. De manera más específica, uno de los elementos que puede tomarse como referente acerca de la pertenencia étnica de los grupos que habitan en los ejidos y comunidades de los municipios estudiados es a partir del habla de lengua indígena por parte del comisariado ejidal. A partir de esta característica, en la mayoría de los casos se observa que en los municipios donde existe un porcentaje importante de población que habla lengua indígena hay un comisariado ejidal cuya pertenencia étnica es un factor indicativo. Así pues, en el municipio de Sotepan se registran 21 ejidos o comunidades en las cuales el comisariado ejidal habla lengua indígena de un total de 25, mientras que en el municipio de Pajapan la situación es muy distinta dado que de un total de 10 ejidos y comunidades solamente 4 tienen un comisariado que habla lengua indígena. Para el municipio de Coyutla se expresa una relación semejante pues de 8 ejidos y comunidades en 4 se tiene un comisariado que habla lengua indígena, y por último, en Catemaco este elemento se registra únicamente en un caso (INEGI, 2009).

De otra parte, como ocurre a nivel estatal los grupos étnicos que viven en las localidades, ejidos y comunidades ubicadas en estos municipios sobreviven en las condiciones más

difíciles ya que éstos registran los más altos niveles de marginación⁴⁴ (CONAPO, 2010), lo cual ha afectado sus formas de vida dado que esta situación no les permite tener posibilidades de desarrollo y conservar algunas de las tradiciones y costumbres que refuerzan su identidad. A pesar de ello, una proporción significativa de esos grupos no ha perdido su lengua y este elemento se ha complementado de alguna forma con la persistencia de prácticas de trabajo colectivo o tequio, ya que se refuerzan los lazos sociales a través de la organización comunal.

3.5 Efectos de la desestructuración del campo veracruzano.

A finales de la década de los noventa del siglo pasado algunos analistas del campo mexicano no imaginaban que los cambios en el ámbito rural desembocarían en una etapa del capitalismo, cuya conformación promovería transformaciones profundas en las relaciones sociales agrarias (Moguel, J., 2011). No obstante, uno de estos analistas proponía la hipótesis de que:

...la crisis del sector agropecuario tuvo el doble efecto de limitar o liquidar posibilidades organizativas de los productores del sector social ubicados en áreas de mayor desarrollo capitalista [...], y de extender o multiplicar procesos organizativos en las áreas campesinas de menores niveles de capitalización y desarrollo. La paradoja aparente es, en realidad, la misma sobre la que descansa toda la lógica de la economía campesina, a saber: a los campesinos menos favorecidos la crisis económica no los coloca en el 'dilema de la capitalización' o de la rentabilidad, sino en el de la sobrevivencia. (Moguel, 1997: 118).

Esta hipótesis fue planteada en el sentido de que el sector campesino menos integrado en la estructura productiva agrícola capitalista puede promover *hasta cierto punto* procesos organizativos. Esto debido a que, los efectos en términos de una desestructuración

⁴⁴ El municipio de Coyutla se clasifica como de Alta marginación, mientras que los municipios de Filomeno Mata y Mecatlán se considerados como de Muy alta marginación. Lo mismo ocurre con los municipios de Pajapan y Sotepan cuya clasificación es de Alta y Muy alta marginación respectivamente, mientras que Catemaco se considera solamente como de Marginación media (CONAPO, 2010).

productiva no son tan agudos porque este sector no se encuentra en una posición de articulación directa con el mercado interno y/o externo y la oferta de mercancías, cuya producción y circulación no está dentro de sus capacidades potenciales (desde la mercancía fuerza de trabajo, hasta las mercancías producidas en las parcelas y la consideración de los medios de producción como maquinaria y otros como mercancías). De esta premisa se deduce que:

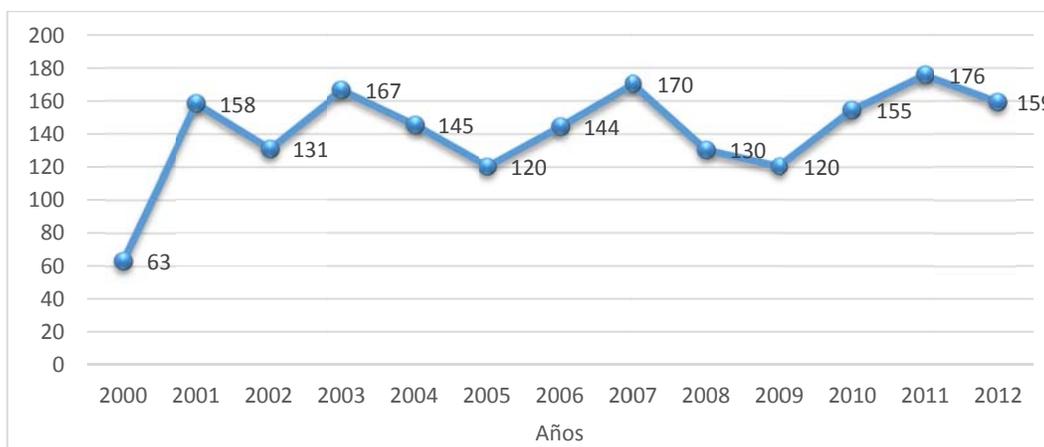
A diferencia del agrupamiento cooperativo propio de los farmers y rancheros del sector social del norte y occidente del país, donde la mayor parte de los recursos productivos (incluyendo la fuerza de trabajo) entran en el circuito de capitalización, en las tierras indio-campesinas del sur-sureste sólo se involucra una parte, reservando la otra a la actividad familiar-comunitaria de autoconsumo (con o sin participación en los flujos mercantiles de la región), con lo que se forja y reproduce un esquema de ‘defensa’ frente a la crisis del que carecen estructuralmente los primeros. (Moguel, 1997: 118).

No obstante, el fenómeno de globalización ha profundizado la estructura de la fase neoliberal del capitalismo. En ella se inauguraron formas de subordinación y extracción de valor con características diferentes a las que existieron durante la etapa de vigencia del patrón de industrialización (Rubio, 2001). En ese contexto, hasta el momento en que se consolidan los rasgos de la fase productiva dominante la participación del campesinado y la población con mayores carencias y menos integrados a los procesos de reproducción de valor, se veía favorecida –como afirma Moguel- en tanto que reproducían un esquema de defensa frente a la crisis sin poner en riesgo su sobrevivencia. No obstante, como se ha observado en la última década la sobrevivencia no puede alargarse como estrategia en un escenario no estático pues tanto los sujetos como la realidad están en constante cambio y transformación.

3.5.1 Agotamiento de las unidades campesinas y aumento del autoconsumo.

Tal como ha ocurrido a lo largo de la última década en todo el país, en el sector social del campo veracruzano se ha registrado un fenómeno de agotamiento de las unidades campesinas. A partir de la implantación de la fase agroexportadora se ha observado un deterioro gradual de la capacidad productiva de esas unidades productivas, lo cual ha llevado a que determinados sectores de ésta clase que se dedicaban a la producción de cultivos y bienes agrícolas para el mercado interno se transformen en agricultores de autosubsistencia.

Gráfica 5. PEA ocupada en el estado de Veracruz en la agricultura de autosubsistencia (miles de personas)



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Consulta interactiva de datos (Infolaboral). Consultada el 27 de octubre de 2012.

Como se puede ver en la **Gráfica 5**, durante el período de 2000 a 2012 en el estado de Veracruz la proporción de la PEA ocupada en la agricultura de autosubsistencia se ha elevado de manera acelerada. Las cifras muestran que existe una proporción significativa de población que sobrevive en el espacio rural –y que va en aumento- en el nivel de subempleo, dado que se trata de los productores rurales que a pesar de no contar con

recursos económicos que les permitan elevar su producción e ingresos, se emplean de manera frecuente u ocasional en otro tipo de actividades económicas que son complementarias al cultivo de su parcela (así como también a través de la renta de una parcela), para producir los alimentos que necesita en conjunto con su unidad doméstica.

Este sector, como se puede observar en la gráfica, ha aumentado año con año salvo en algunos momentos en los que se registran leves descensos. Sin embargo, la tendencia de este fenómeno va en aumento y las consecuencias también se registran en la capacidad productiva de las unidades campesinas.

Por otro lado, esta información muestra la profundidad a la que ha llegado el proceso de desestructuración en algunos sectores del espacio productivo rural, el cual alberga a los grupos campesinos y de pequeños productores minifundistas cuyo ínfimo nivel de capitalización les permite únicamente dedicar su parcela al cultivo de los bienes necesarios para la sobrevivencia de su unidad. Lo anterior es importante para conocer la magnitud del desgaste de estas unidades en términos de su forma productiva, para poder analizar las consecuencias que esto ha traído al amplio sector de la población que lo conforma.

3.5.2 Desarraigo y dispersión territorial: expulsión de la fuerza de trabajo agrícola e incremento de los procesos de emigración internacional.

La desestructuración productiva que ha afectado a las regiones y territorios en los que se cultivan granos básicos ha promovido un proceso de despoblamiento. Dicho proceso está relacionado con el incremento de la migración de población de las localidades rurales hacia determinados polos urbanos e industriales regionales, la cual ha sido una de las dinámicas características de la construcción del espacio social y económico en el capitalismo. Como ocurre en el estado de Veracruz, el decremento que se observa en la PEA dedicada a

actividades agropecuarias se agrega al proceso de reordenamiento territorial y demográfico, que tiene como elemento característico la agudización de la dispersión de la población que habita en los espacios rurales.

Hacia el año 2000 la población del estado de Veracruz era de 6,877,295 personas de las cuales 4,056,596 vivían en localidades con más de 2,500 habitantes⁴⁵. En tanto que 2,820,699 personas habitaban en localidades de 1 a 2,499 habitantes⁴⁶ (INEGI, 2000). Para el 2010 la población del estado era de 7,643,194 personas y de éstas un total de 2,968,968 personas habitaban en localidades rurales lo cual representaba un incremento de 5.26% respecto al año 2000. Mientras que 4,581,934 personas vivían en localidades semiurbanas o urbanas lo que significó un aumento de alrededor de 13% en relación al 2000 (INEGI, 2010). Asimismo, la población total del estado se elevó alrededor de 10%.

Bajo ese marco, se puede afirmar que a lo largo de la primera década del siglo XXI la población del estado de Veracruz tiende a concentrarse en los espacios urbanos a medida que la población crece.

Estos datos muestran que la población de ese territorio se concentra dentro de algunas áreas urbanas y de manera paralela avanza el proceso de despoblamiento registrado en las áreas rurales. En ese marco, el fenómeno de migración ha sido un factor fundamental a lo largo de la última década y se ha constituido como una de las posibles alternativas de la población para enfrentar la degradación de sus condiciones de vida. Aunado a ese fenómeno, la modificación de las pautas culturales que ocurre dentro de algunos sectores como los jóvenes –que tienen mayor facilidad para adecuarse a los cambios que sobrevienen a partir del contacto con las localidades urbanas o semiurbanas- han favorecido

⁴⁵ De acuerdo con INEGI este criterio se emplea para distinguir a las áreas urbanas.

⁴⁶ A las cuales se les considera como áreas rurales según INEGI.

la reconfiguración de sus pautas de comportamiento y sus valores se transforman a medida que sus propios familiares, amigos o personas conocidas migran hacia ciertos destinos urbanos.

Tal y como se ha planteado en este trabajo, el proceso de desestructuración campesina posee características que se asemejan en la mayor parte de los espacios rurales del país. Estos procesos han incidido en la capacidad de arraigo a la tierra –existente, aunque no de manera mecánica- que poseían algunos grupos de la población que habita estas localidades. Tanto a nivel nacional como estatal, la migración se ha registrado principalmente como un flujo de los espacios rurales hacia las ciudades, principalmente aquellas que fueron polos económicos de atracción debido a las actividades industriales, comerciales o de servicios que se desarrollan en ellas como Minatitlán, Poza Rica, Orizaba, Córdoba, Xalapa o el Puerto de Veracruz. De ese modo, la migración interna resulta aprovechada en aquellos espacios que atraen a los migrantes y se convierten en receptores de fuerza de trabajo. En la etapa reciente este fenómeno sigue ocurriendo, sin embargo durante la primera década de este siglo se ha presentado un mayor flujo migratorio hacia otros estados del país como el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla o Tamaulipas, e internacionalmente hacia algunas ciudades de los Estados Unidos de América (EE.UU.).

Como señala Hirsch (2002), en la etapa del capitalismo globalizado: “La estructura de la sociedad ‘posfordista’ a nivel nacional y global, se caracteriza, en general, por tendencias más agudas de división social, ligadas a crecientes movimientos de éxodos y migraciones internacionales [...] Son decisivas, sobre todo, las modificaciones de las relaciones laborales.” (Hirsch, 2002: 165-166).

No obstante, aunque la migración internacional se ha convertido en una de las principales alternativas para los diferentes sectores tanto urbanos como rurales de la población del

estado de Veracruz, este proceso se ha extendido aunque no lo ha hecho de la misma manera a todas las zonas. Según Mestries (2009) se encuentra:

...una alta relación entre las zonas expulsoras y las cuencas cafetaleras, las áreas cañeras, los polos industriales en declive (textil, astilleros, petroquímica), las zonas citrícolas, maiceras y de ganadería de cría, que se caracterizan por ser sectores en crisis o estancados, golpeados por el desempleo a raíz del proceso de liberalización de los mercados y de desindustrialización, causando descapitalización de los productores [...] Así pues, la pauperización de los centros de agricultura industrial y la marginación social de zonas mal comunicadas fueron detonantes de la emigración, fenómeno que se reprodujo luego por su propia dinámica. (Mestries, 2009: 227).

En ese contexto, la presencia del fenómeno de migración nacional e internacional ha sido significativo para este territorio, pero no ha adquirido la misma magnitud en todas las zonas del estado. Si bien existen casos de emigrantes que han salido de las localidades, ejidos o comunidades que se encuentran en los municipios estudiados, esta situación no se ha extendido del mismo modo en todos los municipios. Además, como señalan algunos autores, las condiciones bajo las cuales ocurría el proceso de migración han cambiado después de la crisis de 2008 y la desaceleración que ha registrado la economía de EE.UU. desde 2009, pues éstas se han hecho más difíciles.

De acuerdo con datos de INEGI (2010), la migración que se manifiesta en los municipios analizados ha sido hasta cierto punto baja. El municipio que registra una mayor proporción de población migrante fue Catemaco con una cifra de 962 personas que en 2005 tenían como residencia otra entidad del país, concentrándose dicha población principalmente en el Distrito Federal, el Estado de México y Puebla, en tanto que un total de 291 personas tenían como residencia EE.UU. En el municipio de Coyutla la población que residía en otra entidad para el año 2005 era de 907 personas, y en cuanto a las que residían en EE.UU. alcanzaba un total de 178 personas. El tercer municipio con mayor población que residía en otra entidad del país para el 2005 fue el de Soteapan donde se registró un total de 642

personas, mientras que 88 personas residían en EE.UU. En tanto que, en el municipio de Pajapan las personas que residían en otra entidad en el 2005 alcanzaron la cantidad de 479, así como los residentes en EE.UU. cuya registró fue 56 personas. De esa manera, en el caso del municipio de Mecatlán el número de personas que residían en otra entidad del país fue de 308 y las que residían en EE.UU. fueron únicamente 8. Por último, en el municipio de Filomeno Mata la cifra de personas que vivían en otra entidad fue de 262 y los que residían en EE.UU. solamente llegaron a un total de 5 personas.

Como se puede observar a partir de los datos anteriores, la situación de migración entre la población de las localidades y municipios analizados ha sido poco elevada en relación a la de otros municipios del estado de Veracruz como Xalapa (con 11,839 personas residentes en otra entidad y 2,521 residentes en EE.UU.), o el mismo municipio de Veracruz (que alcanzó la cifra de 18,604 residentes en otra entidad y un total de 2,685 personas originarias de ese municipio que residían en EE.UU.) (INEGI, 2010). En ese marco, se debe señalar que las zonas con flujos migratorios de mayor magnitud aún siguen siendo los espacios urbanos o semiurbanos.

Y por otra parte, un elemento que se debe señalar en el caso de los municipios estudiados es que las entidades nacionales de destino para la población que migra son principalmente aquellas en las que se desarrollan ciertas actividades del sector agropecuario como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Baja California e incluso Sonora. Esta situación permite observar la configuración de algunos destinos migratorios a nivel nacional que se despliegan en función de otro contexto económico y social.

Como se describirá más adelante, estos lugares se han ido conformando como parte de las zonas de mayor demanda de fuerza de trabajo, en función de las cuales varios sectores de la población de los municipios analizados han encontrado la posibilidad de emprender sus

propias estrategias de sobrevivencia apoyando a sus familias cuando tienen la posibilidad de encontrar un empleo migrando a otro estado, e incluso a otro país.

3.5.3 Disolución de referentes colectivos y disminución de la cohesión comunitaria en espacios rurales de los municipios estudiados.

Los diferentes procesos que hemos descrito más arriba han dado paso a determinados procesos de disolución de algunos de los referentes colectivos que permitían a los grupos o comunidades rurales tener una cohesión social más fuerte. En ese sentido, se ha observado un proceso de debilitamiento de los referentes colectivos, lo cual ha generado una situación de desinterés por parte de sectores que se distinguen por su carácter etario como los jóvenes y los adultos jóvenes.

Aunado a lo anterior, la segmentación y división de las parcelas ejidales derivada de la herencia a los hijos (as) se ha intensificado⁴⁷. De ese modo, el problema de la tenencia de la tierra es visto como parte de un problema relacionado con la cancelación del reparto agrario y la privatización de las tierras, lo que ha ocasionado la concentración de estas por determinados caciques o pequeños propietarios que aprovechan la situación de carencias de algunos ejidatarios⁴⁸. Esto se ha convertido en un factor que, en conjunto con los otros elementos señalados más arriba como el despoblamiento, la pérdida de algunas tradiciones y costumbres y la modificación de las pautas culturales en ciertos sectores de la población, así como la desestructuración de las unidades campesinas ha afectado la cohesión comunitaria en ciertas localidades o comunidades.

⁴⁷ En ese contexto, el estado de Veracruz se distingue por registrar el mayor avance del PROCEDE (Robles y Concheiro, 2004: 52-53)

⁴⁸ Entrevista con Nemesio González, 12 de octubre de 2011.

3.6 Exclusión productiva del campesino.

Una cuestión relevante respecto a algunos espacios rurales del estado de Veracruz es la profundización de ciertas formas de explotación que operan en función de las características del patrón neoliberal. Tal como se ha señalado anteriormente, estos procesos han generado una forma de explotación que subordina a los grupos campesinos y los excluye, agudizando la desestructuración económica de sus unidades. Así pues, a lo largo de la última década se ha profundizado el mecanismo de exclusión –en función de la desvalorización de los granos básicos- en las regiones y territorios en los que se cultivan esos bienes (Rubio, 2009b; Rubio, 2001).

La fase agroexportadora se caracteriza por la constitución de un esquema de dominio y explotación de los pequeños y medianos productores agrícolas con capacidad de producir valores de uso demandados en el mercado interno. De ese modo, se sometió al sector campesino con un bajo nivel de capitalización a un proceso de exclusión y al desgaste de su unidad doméstica en conjunto, debido a que no se trataba solamente de una crisis sino de un proceso estructural referente a la forma de operación del nuevo patrón de acumulación instrumentado a partir de las políticas neoliberales.

En razón de este mecanismo, las unidades productivas han tenido que encontrar fuentes complementarias de ingreso que en muchas ocasiones ni siquiera les permiten mantener a sus propias unidades domésticas, pues como en el caso de algunos apoyos gubernamentales ofrecidos a través de determinados programas sociales solamente pueden cubrirse los sectores que registran mayores carencias sociales⁴⁹ (ver **Cuadro 5**).

Por otra parte, en el caso de los municipios analizados se puede observar que los productores recurren a otras fuentes de ingreso sin abandonar las actividades agrícolas.

⁴⁹ El programa Oportunidades (actualmente nominado Prospera) y Procampo.

Cuadro 5. Unidades de producción según origen de los ingresos totales del productor en los municipios de Catemaco, Coyutla, Mecatlán, Filomeno Mata, Soteapan y Pajapan.

Municipio	Unidades de producción	Origen de los ingresos del productor*			
		Actividad agropecuaria o forestal	Envío de dinero desde otro país	Apoyo gubernamental	Otra actividad
Catemaco	2 011	1 851	41	240	243
Coyutla	2 902	2 154	3	2	815
Filomeno Mata	1 134	1 116	0	50	66
Mecatlán	1 426	1 306	0	21	418
Pajapan	1 825	1 645	5	30	293
Soteapan	4 249	4 153	3	266	418

Fuente: INEGI. Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Corresponde a un subuniverso de las unidades de producción que para el desarrollo de las actividades agropecuarias o forestales manejaron terrenos, predios o parcelas con excepción de las que reportaron exclusivamente vivero o invernadero.

*La suma de los parciales no es igual al total debido a que una misma unidad de producción puede reportar más de una fuente de origen de los ingresos.

Sin embargo, estos datos muestran que en la mayoría de las unidades de producción de los municipios estudiados el origen principal de los ingresos aún se encuentra en las actividades agropecuarias o forestales. Lo anterior puede considerarse como una característica del sector campesino que pertenece a ese territorio.

Asimismo, esta situación ocurre en la medida que algunos miembros de la unidad doméstica abandonan el núcleo familiar para insertarse en ciertas actividades económicas (principalmente fuera de sus localidades de origen), lo que permite a las unidades de producción complementar con otros ingresos, aunque no sean la parte principal de éstos, un determinado monto de ingresos en razón de sus actividades. Así, solamente en algunos casos el jefe/jefa de familia es obligado a abandonar la unidad productiva y buscar la obtención de ingresos en ciertas actividades complementarias como la producción y venta de otros bienes o artículos.

3.6.1 Fragmentación laboral, desempleo, precarización laboral e informalidad económica en los municipios estudiados.

El concepto de fragmentación se refiere al proceso de división social que encarna la configuración histórica de las relaciones sociales de producción capitalistas, en una determinada formación social. En un sentido preciso, la fragmentación social es parte de los procesos de división e individualización que aparecen como base de la sociedad capitalista, y a partir de los cuales el proceso de agrupación de los individuos tiende a realizarse por referentes identitarios abstractos. “Así, en el terreno de la interacción social se vuelve imposible rearticular la organización global de la sociedad, y se tiende por tanto a su institucionalización parcial y particularizada” (Durand, 1989: 29).

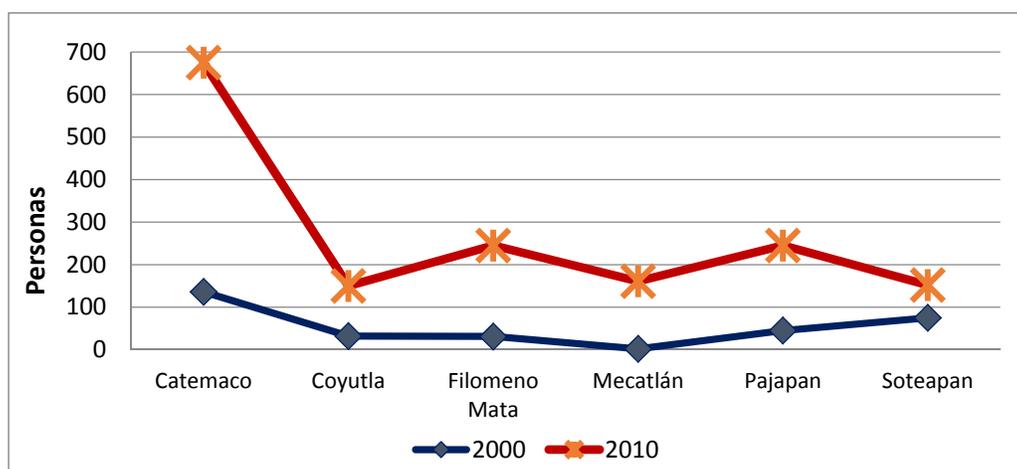
En ese sentido, la política estatal sirve “[...] para quebrar resistencias contra la reestructuración general de los procesos de producción [...] La división permanente de la sociedad en ‘poseedores de puestos de trabajo’ y desocupados [...] se ha tornado en una de sus características más sobresalientes” (Ídem). Estos mecanismos ya actúan en el espacio rural del territorio de Veracruz y han permeado a las actividades económicas del sector agropecuario. Esto ha permitido el resquebrajamiento de las formas productivas de determinados sectores como el campesinado, debido a que se restringen las vías para acceder a los recursos económicos y materiales. Por otra parte, como veremos a continuación, esto ocurre en un contexto en el que aumenta la precarización laboral y la desocupación, lo que favorece la proliferación de actividades insertas en la informalidad económica.

Uno de los fenómenos que se registra en el entorno rural es el desempleo generado por la exclusión laboral de los grupos campesinos y de trabajadores rurales. Las características de éste no se manifiestan como en el espacio urbano debido a que diversas actividades que se

pueden desarrollar en el ámbito agropecuario no se pueden analizar a partir de la categoría de empleo, pues tal y como ocurre con las empresas que se dedican a la producción de bienes en alguna rama industrial o proporcionan determinados servicios, no se expresa una relación contractual entre patrón y asalariado. Sin embargo, algunos estudios han observado un fenómeno de desocupación en función del abandono de las actividades en el sector agropecuario por parte de ciertos sectores rurales (aunque muchos ejidatarios y pequeños productores aún persisten en sus unidades, como se señaló anteriormente).

En ese marco, la cifra de desocupación en los municipios estudiados se incrementó significativamente entre los años 2000 y 2010. En ese sentido, los datos proporcionados por los Censos de Población y Vivienda del INEGI (2000, 2010), arrojan una imagen más precisa acerca de este fenómeno en los municipios de Catemaco, Coyutla, Filomeno Mata, Pajapan y Soteapan, como se observa en la **Gráfica 6**.

Gráfica 6. Población desocupada en los municipios estudiados del estado de Veracruz 2000 y 2010.



Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población y Vivienda 2010.

Como se puede observar en la gráfica anterior, en los municipios estudiados se expresa una tendencia al aumento de la desocupación, en un período de 10 años, que en algunos casos

llega a elevarse muy por encima del crecimiento de la PEA en los diferentes municipios⁵⁰. Sobre todo, la desocupación se ha incrementado en los municipios de Catemaco donde alcanzó una cifra mayor a 600 personas en 2010, Filomeno Mata cuyo registró de desocupación superó las 200 personas, en tanto que el municipio de Pajapan también muestra una cifra superior a 200 personas. Cabe decir que en cinco de los municipios analizados la cifra de desocupación para el año 2000 había sido menor a 100 personas y únicamente en Catemaco esta cantidad era mayor.

Por otra parte, los datos anteriores demuestran la veracidad de la información obtenida en algunas entrevistas con dirigentes de la organización MAIZ (que analizaremos más adelante), en donde se señalaba que en la mayor parte de estos municipios ha habido una agudización de la desocupación en el campo, derivada de un visible agotamiento de la economía familiar.

Como se ha señalado antes, la desregulación del mercado interno y la desvalorización de ciertos bienes agrícolas afectan negativamente a los pequeños productores ocasionando la pérdida de importancia económica de aquellas ramas agrícolas que respondían a la demanda del mercado interno (orientadas al abastecimiento de alimentos para la población y de insumos para las industrias de alimentos y materias primas).

De ese modo, las actividades no agrícolas se convierten en un mecanismo de acceso a otras vías de ingreso. Se trata principalmente de actividades como el comercio o algunas

⁵⁰ En todos los municipios considerados para este estudio el aumento de la desocupación entre la población supera porcentajes mayores al 200%, en tanto que la PEA solamente alcanza a superar el 150% en el caso del municipio de Soteapan. Por otro lado, el municipio de Mecatlán registró una desocupación mayor al 8000% de la PEA en el año 2010 con respecto al año 2000, lo que representa un aumento desproporcionado, aunque no muy elevado en términos numéricos.

ocupaciones que se desarrollan en el plano de la informalidad⁵¹, aunque los salarios o remuneraciones que obtiene la población trabajadora en esos sectores no les permite satisfacer sus necesidades básicas. Estos procesos se relacionan con las modificaciones en el mercado laboral que han permitido la disminución de los salarios.

En ese marco, Castel (2003) señala que el proceso de individualización social ha actuado como uno de los mecanismos referidos al ámbito laboral que ha favorecido diversas transformaciones en torno a las formas de sociabilidad, posibilitando la disolución de las regulaciones que favorecían la solidaridad y permitían la pertenencia colectiva en diversos sectores de la sociedad. Éste ha sido encauzado a partir de distintas modificaciones, entre las cuales este autor observa:

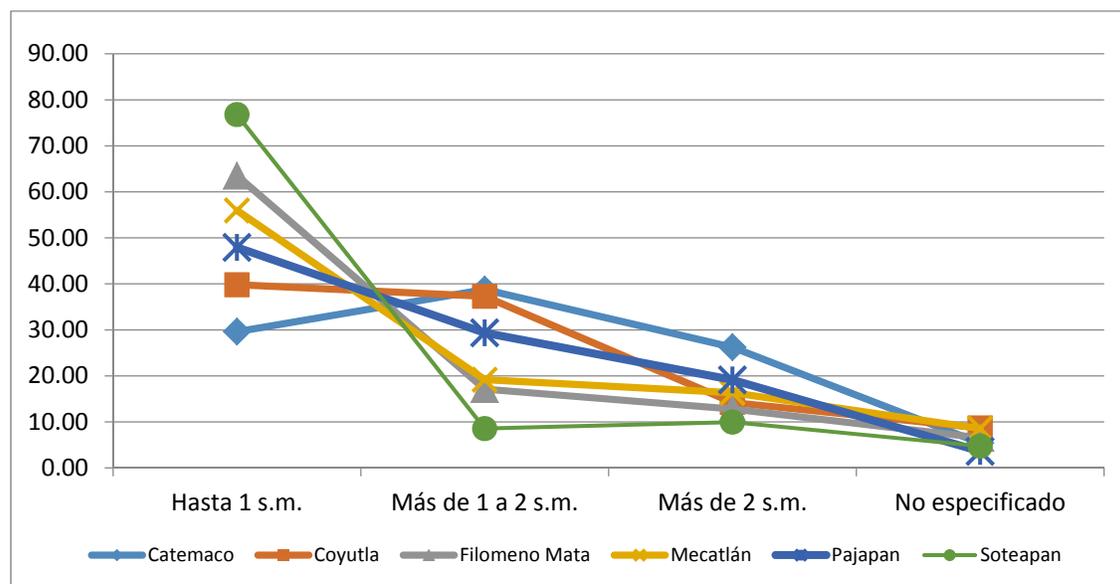
...por un lado, un proceso de precarización, que atraviesa el conjunto de las situaciones del trabajo, y golpea, aunque de forma desigual, las diferentes categorías socio-profesionales. Por otro lado, una desigualdad ante el riesgo de la precariedad y el riesgo del desempleo, que se instala en el ser de cada categoría social e introduce una suerte de disparidad entre los pares, lo que arruina toda solidaridad dentro de las categorías. (Castel, 2003: 20-21).

En ese sentido, uno de los procesos que se han agudizado es la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Durante la última década, el proceso de precarización ha favorecido el surgimiento de distintas formas de ocupación en las localidades rurales que anteriormente solo se encontraban en las áreas de mayor urbanización, dado que la población se dedicaba principalmente a ciertas actividades del sector agropecuario. En ese marco, para el año 2010, a excepción del municipio de

⁵¹ De acuerdo con INEGI (2013), la tasa de informalidad laboral en el estado de Veracruz en el año 2005 fue de 67.17, mientras que en 2012 había alcanzado la cifra de 68.23. Lo anterior refleja la elevada proporción de personas que viven en ese territorio y que se encuentran ocupadas en la informalidad.

Catemaco, en los demás municipios estudiados la mayor parte de la PEA solamente obtenía hasta un salario mínimo⁵² (INEGI, 2010) (ver **Gráfica 7**).

Gráfica 7. Población por nivel salarial en los municipios estudiados del estado de Veracruz, 2010 (porcentajes)



Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

El bajo nivel salarial que existe en las localidades rurales del estado de Veracruz se manifiesta claramente en dos de los municipios estudiados: Soteapan y Filomeno Mata, en los que el porcentaje de población que obtiene hasta un salario mínimo alcanzó en el año 2010 alrededor del 77% y 63%, respectivamente. Solamente en el municipio de Catemaco este sector de la población alcanzó para ese mismo año un porcentaje menor al 30%. Mientras que, en este último municipio la población que obtenía ingresos mayores a 1 y hasta 2 salarios mínimos, para este año, registró casi un 40%. A su vez, como se observa en

⁵² El salario mínimo del área geográfica B en la que se inscriben los municipios estudiados es de 63.77 pesos diarios [Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), 2014].

la gráfica, en los demás municipios la población con ingresos de hasta un salario mínimo alcanzó los porcentajes más elevados.

Lo anterior puede considerarse como un reflejo de lo que ocurre en el contexto urbano, dado que en algunas localidades de estos municipios se han difundido ciertas actividades informales como la comercialización de alimentos en los hogares o establecimientos informales, lo cual posibilita la persistencia de la agricultura de autosubsistencia para ciertos productores y sus unidades, o únicamente la sobrevivencia de las unidades domésticas en un contexto de deterioro de sus condiciones de vida.

Capítulo 4. Antecedentes históricos de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

Este capítulo describe algunos antecedentes históricos de la organización rural Unión Campesina Democrática (UCD) en el estado de Veracruz, de la cual surgió el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Se propone una breve caracterización de las etapas históricas por las cuales ha transitado la agrupación desde el período anterior a su conformación, cuando algunos de sus dirigentes pertenecían a la organización UCD en su representación regional asentada en el territorio veracruzano. Se identifican algunos de los elementos que posibilitaron la constitución de MAIZ. Se señalan también las alianzas posteriores con otras agrupaciones a nivel estatal y algunos de los factores que han permitido a la organización consolidarse y mantenerse activa.

4.1 Procesos de resistencia y configuración de esquemas de organización campesina-indígena: la UCD y su proceso de conformación.

En el contexto de la coyuntura poselectoral de 1989 algunas organizaciones campesinas independientes se reunieron en torno a la convocatoria del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, para la constitución de una nueva central campesina que fuera independiente de partidos políticos y que además no dependiera del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El 28 de noviembre de 1988 se realiza el encuentro nacional campesino denominado ‘Problemática rural y unidad campesina’, en el cual se acuerda la firma del Convenio de Acción Unitaria Campesina (CAUC), en el cual participan 10 organizaciones campesinas. De acuerdo con Hernández (1992), el llamado a constituir esa nueva central tuvo complicaciones a causa de la desavenencia por parte de algunos de los dirigentes de las

organizaciones participantes, en cuanto a la idea de tener un vínculo de subordinación al PRD. Por otro lado, el gobierno de Salinas de Gortari emprendió una nueva política de concertación con las organizaciones campesinas, haciendo un llamado el 6 de enero de 1989 a constituir un nuevo espacio para la integración de la nueva política agrícola y agraria formando el Congreso Agrario Permanente (CAP). Algunas de las organizaciones que firmaron el CAUC formaron parte del pacto para la conformación del CAP, lo cual derivó en la desintegración del Convenio.

La creación de una nueva central –que se posteriormente se convertiría en la UCD- conformada por diversas organizaciones, se impulsó para contrarrestar la alianza creada por el gobierno de Carlos Salinas con la CNC y otras organizaciones que participaban en el CAP. El 10 de abril de 1989 en un acto con campesinos de la Comarca Lagunera, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas vuelve a hacer el llamado para la creación de una nueva central campesina. Después de aquella convocatoria, los días 7 y 8 de agosto se lleva a cabo en Cuautla, Morelos, un encuentro con campesinos pertenecientes a distintas organizaciones de 23 estados del país, en el cual se acuerda la creación de la nueva organización. Dicho proceso se llevó a cabo, no sin diferencias por parte de los líderes de los grupos integrantes, entre los cuales destacaban la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCP), la Coordinadora Nacional Plan de Aayala y la Unión de Trabajadores y Campesinos (UTC).

Como relata Luis Hernández:

La Declaración de Anenecuilco dio como resultado la constitución de la UCD. Se sumaron a ella básicamente grupos campesinos provenientes de la CNPA, la UTC y sectores simpatizantes del cardenismo en el terreno partidario. Fuerzas campesinas relevantes, proclives al PRD, se abstuvieron de incorporarse a sus filas. La nueva central pasó a ser así apenas una pequeña fuerza campesina formada por una alianza de grupos en el interior del partido, aislada de los grandes procesos de convergencia nacional. Su

constitución le privó al cardenismo de la posibilidad de sumar en su polo de agrupamiento al conjunto de sus simpatizantes, y canceló de paso la posibilidad de construir un frente unitario independiente por afuera del Congreso Agrario Permanente. (Hernández, 1992: 241).

Así, se constituyó un comité promotor de la UCD, el cual se dedicaría a la conformación de comités promotores en municipios, estados y regiones diversas del país, que tuvieran como propósito la articulación de las organizaciones o movimientos locales. Además, este proceso dio paso a una discusión amplia sobre los principios, programas y estatutos de la nueva central campesina.

No obstante, es hasta el 9 y 10 de abril de 1991 en que se convoca a la Asamblea Nacional Constitutiva de la UCD en la Universidad Autónoma de Chapingo. Los ejes básicos de trabajo delimitados en la asamblea fueron: desarrollar una jornada de afiliación, promover la formación de comités de base a nivel municipal, estatal y regional a partir de asambleas y congresos. También se propuso promover organizaciones de productores por rama de actividad que se conformaran como filiales de la UCD. Asimismo, se planteó la promoción de organizaciones campesinas y pueblos indígenas. En el plano de la articulación externa con otras organizaciones se propuso el despliegue de la movilización de la organización de manera coordinada con otras agrupaciones para enfrentar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con respecto a las demandas agrarias, se proponía la defensa del ejido y la comunidad y la demanda de un mayor presupuesto para el desarrollo rural, así como la repartición de los latifundios y la modificación de la política agrícola de corte neoliberal por una que defendiera los intereses del campesinado en su conjunto.

Esta agrupación llegó a tener más de 450 mil agremiados entre los cuales se encontraban ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, jornaleros, indígenas, mujeres, viejos y jóvenes del campo. Asimismo, para el año 2003 su presencia se extendía a 30 estados del

país a partir de comités municipales y estatales. De los estados con mayor número de agremiados destacaban Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Quintana Roo⁵³.

El proceso de promoción para la formación de la UCD en Veracruz comenzó desde 1989. En la conformación de la organización a nivel estatal participó un grupo de intelectuales y militantes que habían sido miembros de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), cuyos orígenes se encuentran en las luchas sociales surgidas en los años sesenta sostenidas por grupos radicados en el estado de Guerrero (Pérez Silva, 2005).

La UCD-Veracruz surgió en 1989 como un frente de organizaciones locales y regionales (Comité de Defensa Campesina [CDC], Unión Campesina Zapatista [UCZ] y Frente de Popular de Organizaciones del Sureste de Veracruz [FREPOSEV]). La idea central de esta organización era actuar de forma alterna a la CNC y otras organizaciones de tipo corporativo que existen en diferentes regiones de Veracruz. Según los propios miembros de la organización, se fundó como un proyecto que asumía el rol del campesino como sujeto de transformación. Los ejes centrales del trabajo eran: a) articular a las organizaciones campesinas e indígenas de la sierra norte del estado y de la sierra nahua y popoluca del sur, proporcionándoles la cobertura y apoyo en las gestiones que realizaban con el gobierno estatal, y; b) apoyar a los grupos con problemas agrarios, de los cuales empezaría a surgir los colectivos que en el futuro conformarían la UCD.

Considerando estos ejes, Pérez Silva (2005) considera que existen tres etapas en la vida y desarrollo de la organización hasta la época actual:

- 1989-1990 período de promoción.
- 1990-1994 período de enraizamiento y definición.

⁵³ Cfr. Teorema Ambiental, 2003, 1 de abril.

- 1994-2000 período de fortalecimiento de su identidad y consolidación.

En 1996 se generó un rompimiento al interior de la UCD nacional a causa de actos de corrupción de algunos dirigentes nacionales. El resultado de la escisión es el abandono de 12 coordinaciones estatales de la UCD, entre las que se encontraba la de Veracruz, con lo cual se tomó la decisión de construir una organización nueva basada en una estructura de tipo horizontal, derivada de la tendencia democrática de los grupos que la integraban.

Como propone Zibechi (2007), la movilización de los sectores populares en la etapa neoliberal se produce principalmente de forma horizontal, debido a que es más espontánea y se basa en la organización tradicional de parentesco y territorialidad o en las asociaciones de clase. Aquí, las características de la movilización horizontal permiten hacer visibles los aspectos ocultos de la sociabilidad, la cual al desplegarse muestra nuevos elementos de su potencialidad.

El 4 y 5 de agosto de 1996 se llevó a cabo una asamblea nacional en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México, en donde los representantes de las coordinaciones de los 12 estados que abandonaron la UCD acordaron la creación del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Sin embargo, es hasta abril de 1997 que en una asamblea estatal en Veracruz se decide tomar el nombre de MAIZ-Veracruz.

La organización MAIZ-Veracruz tiene presencia en diferentes municipios del estado, resaltando su permanencia a lo largo de más de una década (Pérez Silva, 2005). En el estado de Veracruz la organización tiene presencia en cuatro diferentes regiones:

- Zona Norte: en articulación con la Unión Campesina Zapatista (UCZ) y el Comité de Defensa Campesina (CDC) en Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán.
- Zona Totonaca: Coyutla, Filomeno Mata, Espinal y Mecatlán.
- Zona Centro: En la ciudad de Xalapa (Oficina de MAIZ-ASER).

- Zona Tuxtlas: Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco y Huyepan de Ocampo.
- Zona Sur: Acayucan, Jáltipan, Texistepec, Sayula de Alemán, Agua Dulce, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Mecayapan. Y en articulación con el Frente Popular de Organizaciones del Sureste de Veracruz (FREPOSEV) en Otepan, Chinameca, Pajapan y Sotepan.⁵⁴

Mapa 1. Zonas del estado de Veracruz.



Fuente: <http://montenegroeditores.com.mx>

Su labor de gestión se ha desarrollado, de acuerdo con los registros de la organización, a partir del año 1994 y hasta 1997 como parte de la UCD. Y desde 1997 la organización ha desarrollado sus propias labores de gestión como MAIZ.

⁵⁴ Información obtenida a través de la página electrónica de MAIZ, en: http://maiz.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=179:c2&catid=55:ver

En cuanto a las actividades de MAIZ con los grupos campesinos, éstas se han orientado hacia la atención y gestión para resolver problemas de:

- Alimentación
- Medio Ambiente
- Comercio
- Derechos Humanos
- Educación
- Organización
- Proyectos productivos
- Salud
- Tierra
- Transporte

4.2 Breve caracterización del movimiento campesino-indígena Movimiento Agrario Indígena Zapatista durante el período 1997-2009.

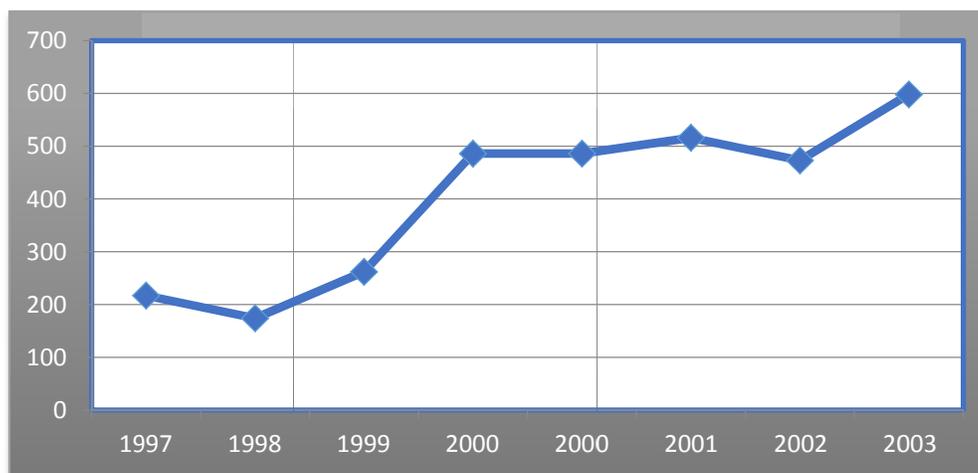
La organización MAIZ ha concentrado una parte significativa de su actividad en la gestión y promoción de la autogestión de los recursos naturales y productivos de las agrupaciones sociales que pertenecen a ella. Asimismo, se ha dedicado al procesamiento de peticiones de parte de distintos sectores rurales, las cuales son dirigidas a autoridades municipales, estatales y federales, en diferentes localidades rurales y comunidades del estado de Veracruz.

Si tomamos el número de gestiones realizadas durante el período de 1994 a 1996 –cuando aún pertenecía a la UCD-, se observa que la agrupación se encontraba en una etapa de ascenso. En esta primera etapa, que podría clasificarse como previa a la construcción de MAIZ, la gestión de demandas sociales y solicitudes de distintos sectores del campo

comenzaba apenas a tener relevancia. Hay que recordar que durante esta etapa ocurrieron dos procesos económicos importantes: por un lado, la entrada en vigencia del TLCAN en 1994 y, por otro lado, la crisis económica que impactó a la sociedad mexicana en 1995 y que tuvo consecuencias significativas en distintos sectores del campesinado. Así, en el período señalado el número de gestiones realizadas por la organización aumentó de 67 en el año de 1994, a 243 en 1996.

A partir de 1997 MAIZ se configuró como una nueva organización, como se mencionó anteriormente, surgida de una escisión de la UCD. Después de esa ruptura se observa una nueva caída en las gestiones, primero en el año de 1997 registró 217 y un año después sólo alcanzó 174. Posteriormente, ese período de declive fue seguido de un incremento acelerado de las gestiones realizadas por parte de la organización hasta el año 2003 (Cfr. **Gráfica 8**).

Gráfica 8. Número de gestiones anuales de MAIZ, 1997-2003.



Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de los archivos de MAIZ.

Entre los años de 1997 y el 2000, las gestiones aumentaron en un 123% lo que representó un total de 486 peticiones durante este último. Para el año 2001 las gestiones alcanzaron

una cifra de 516, en tanto que para el siguiente, 2002, se produjo un descenso a 473 peticiones de las agrupaciones articuladas en MAIZ. No obstante, este número volvió a incrementarse para el año 2003 cuando alcanzó un máximo de 598 gestiones. La gestión de solicitudes y demandas con diferentes dependencias e instancias de los diferentes niveles de gobierno del estado de Veracruz fue necesaria para impulsar resoluciones de las autoridades respectivas, sobre diferentes temáticas dentro de las localidades, ejidos y comunidades rurales.

Entre otros elementos relevantes, la gestión de proyectos productivos fue uno de los principales rubros dentro de las acciones realizadas por la organización. Sin embargo, esto ha variado en los diferentes años de actividad de ésta y de acuerdo a las características de las comunidades. En ese contexto, desde el año 2000 y hasta el 2003 la mayor parte de las gestiones realizadas por la agrupación estaban relacionadas con temas de educación, así como demandas de restitución de terrenos derivadas del despojo de éstos por caciques locales, incluyendo también algunas demandas de dotación de tierra.

En cuanto al número de gestiones realizadas entre el año 2000 y el 2003 se puede afirmar que existen algunos factores que explican este comportamiento. Así, el aumento de las peticiones de gestión por parte de los grupos integrados a la que en ese momento era una organización rural que estaba en proceso de consolidación, fue parte de una etapa de participación activa de ciertos sectores de la población rural que se movilizaron en torno a determinadas demandas, las cuales habían adquirido relevancia para la sociedad nacional, como se comentó antes, a partir de la coyuntura política abierta por la irrupción del movimiento neozapatista.

No obstante, aunque algunas de las demandas de estos grupos –como la dotación y restitución de tierras- no fueron el núcleo de las demandas de otras agrupaciones que

estaban identificadas y/o formaban parte del movimiento indígena que tenía fuerza a nivel nacional, se trató de exigencias que a nivel local y estatal reflejaban el carácter predominante de las relaciones sociales y económicas en ese espacio agrario. Es decir, en la medida que un sector amplio de la población rural del estado de Veracruz se dedicaba fundamentalmente a determinadas actividades económicas del sector primario y la tierra aún era considerada un factor importante para la reproducción de los grupos rurales, la demanda de tierra de estos grupos se orientaban hacia la conservación de sus terrenos desde el punto de vista productivo.

De modo paralelo, las gestiones vinculadas con otras temáticas de carácter cultural, en virtud de la pertenencia de sus miembros a distintas agrupaciones indígenas, tuvieron también un apoyo significativo de aquellos sectores sociales, a nivel estatal, que en ese momento impulsaban la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Bajo ese marco, el año 2001 se puede considerar un hito al respecto debido a que diferentes organizaciones y movimientos indígenas participaron activamente en torno a la discusión que se dio primero en el Congreso de la Unión y después en el Congreso estatal del estado de Veracruz, para reformar la Constitución política en torno a las demandas hechas por el EZLN y otros movimientos indígenas y campesinos, así como por organizaciones de la sociedad civil.

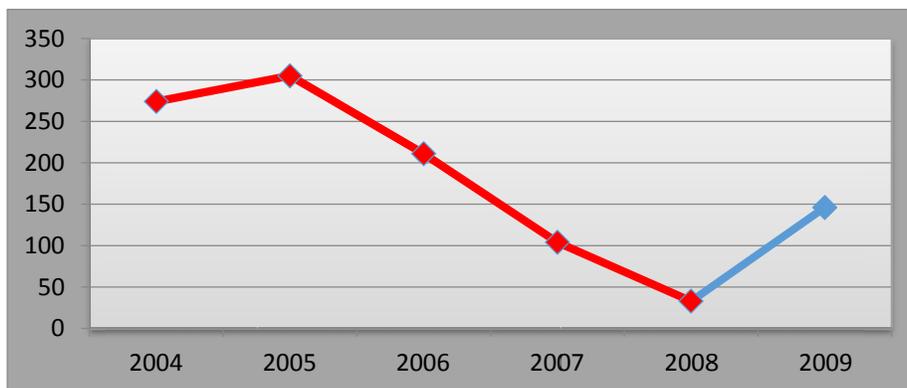
Por otra parte, a finales del año de 2002 y a lo largo del 2003 los temas relativos al sector rural ganaron de nueva cuenta relevancia a partir de la irrupción del Movimiento El Campo No Aguanta Más (MECNAM). En este contexto, como se describió, las gestiones realizadas por MAIZ alcanzaron las cifras más altas. Pero a pesar del significativo incremento de las gestiones registrado durante ese período, la tendencia se revirtió hacia el 2004 y los años posteriores.

Durante el período de 2004 a 2009 las gestiones realizadas por MAIZ disminuyeron. Para el primer año del mismo la reducción fue de cerca del 50% con respecto al 2003 alcanzando un total de 274 peticiones, mientras en el 2005 se registró un leve aumento (305 gestiones). Los datos anteriores requieren de una breve contextualización para interpretar los procesos ocurridos en aquella etapa. Como se mencionó anteriormente, se puede señalar que en la coyuntura política abierta por la emergencia del MECNAM la organización MAIZ intentó insertarse en ese frente de organizaciones sin tener éxito, debido a la negativa de algunos dirigentes de organizaciones que conformaban ese frente (Entrevista con Ángel Pérez, 23 de agosto de 2011).

Además, se debe considerar el hecho de que la Confederación Nacional Campesina (CNC) –que formaba parte del MECNAM y que ha contado históricamente desde su constitución con una fuerte presencia en el estado de Veracruz- ha tratado de conservar su predominio en determinadas regiones del estado, a través del control ejercido por sus agrupaciones en el acceso a determinados programas gubernamentales.

Así pues, como se observa en la **Gráfica 9**, desde el año 2006 hasta el 2008 se manifiesta nuevamente un descenso en el número de gestiones.

Gráfica 9. Número de gestiones anuales 2004-2009.



Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de los archivos de MAIZ.

Después del 2005 se registra una caída progresiva en las gestiones. A su vez, durante este período aumentan las peticiones de gestión de instalación de carreteras y caminos, concesiones de transporte público gestionado a través de cooperativas y construcción de obra pública e instalación del servicio de electricidad. Hacia el 2009 se observa un repunte en el número de gestiones realizadas por la organización sin que se vuelva a alcanzar el nivel que tuvo antes de 2004.

En cuanto a las gestiones que se realizaron por municipio durante este período, la información muestra que algunos municipios tuvieron una mayor cantidad de gestiones realizadas. Entre los municipios con mayor actividad en la gestión estaban Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Coyutla, Jáltipan, Sotepan y Santiago Tuxtla.

En ese sentido, las gestiones realizadas en los municipios de Catemaco y Coyutla resultan un indicador significativo para profundizar en el aspecto de la organización campesina. Por otro lado, la poca significación de las gestiones realizadas durante este período por agrupaciones formadas en los municipios de San Andrés Tuxtla e Hidalgotitlán, nos muestran el ejemplo de como algunas comunidades indígenas y campesinas han sobrevivido a la desestructuración configurando ciertos referentes de organización.

A partir de estos datos se puede confrontar, hasta cierto punto, la dinámica de los procesos de alianza con otras organizaciones y las gestiones realizadas por la organización MAIZ. Aunque no consideramos que exista una correlación entre ambas, la información muestra que a medida que ha avanzado el proceso de desestructuración económica en el espacio agrario del estado de Veracruz ésta organización ha encontrado limitaciones al proceso de ampliación de sus bases, aunque este no se detenga. Como se verá más adelante, lo anterior nos permite una aproximación a aquellos factores más significativos en las actividades que

ha llevado a cabo MAIZ a lo largo de la última década y los cambios que ha sufrido al interior como organización y en su relación con el Estado mexicano.

4.3 Alianzas de MAIZ con otras organizaciones de 2002 a 2012⁵⁵.

A partir del año 2002 MAIZ ha establecido distintas alianzas con diversas organizaciones sociales a nivel estatal y nacional. La dinámica de estos procesos de articulación ha estado determinada por las diferentes coyunturas políticas que se han abierto en el contexto local, regional y nacional. Sin embargo, algunas de ellas se han disuelto en tanto que otras continuaron vigentes hasta el 2012. En ese sentido, este elemento muestra un comportamiento que se ha caracterizado tanto por la creación como por la desintegración – en ciertos casos apresurada- de algunas alianzas construidas.

Una de las alianzas que tenía vigencia hasta el año 2012 y de la cual MAIZ ha formado parte desde el 2002 es la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos⁵⁶ (AMAP). Ésta se constituyó por distintas agrupaciones de carácter regional que se opusieron a la implementación del Plan Puebla Panamá (PPP) y los efectos que éste tendría sobre los pueblos y comunidades rurales de distintos estados del país como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Esta alianza ha impulsado movilizaciones y foros de discusión sobre el PPP, logrando la atención pública para mostrar el impacto económico y social de este proyecto en los espacios en los que se trataba de ejecutar. Asimismo, a partir de la

⁵⁵ Esta información fue proporcionada por Daniela Griego, miembro de la Coordinación de MAIZ.

⁵⁶ La AMAP está conformada por varias organizaciones situadas en México como: la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec; el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC); el Centro de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán; el Comité de Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica (CRRC); la Corporación Corazón (COCOAC); Educación para la Paz (EDUPAZ); el Frente Auténtico del Trabajo (FAT); el Frente Popoloca del Sur de Veracruz (FREPOSEV); el Grupo de Trabajo Colectivo del Istmo (GTCl); Indymedia Chiapas (CMI); el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Tssooka-teyoo de la Sierra; la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV), y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). Aunque se señala que MAIZ formaba parte de la alianza hasta el 2012, es necesario aclarar que actualmente la alianza sigue vigente.

AMAP se ha impulsado también el Movimiento Mesoamericano contra el PPP, el cual tiene presencia en diferentes países centroamericanos.

Entre los años de 2004 a 2006, MAIZ participó en la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVÉR), la cual formó parte de un proceso de articulación impulsado por varias organizaciones del estado de Veracruz en el contexto de las elecciones estatales de 2004, y que en el marco de la elección de gobernador elaboró una agenda ciudadana para la democratización. La red consiguió que algunos de sus planteamientos se retomaran para su discusión en el poder legislativo estatal. No obstante, se desintegró a consecuencia del abandono de ésta por parte de algunas organizaciones debido a la existencia de diferencias en cuanto a los métodos de organización y los planteamientos políticos, así como por la falta de interés y baja participación de parte algunas de ellas.

Por otra parte, durante los años 2008 y 2009 MAIZ integró junto con otras agrupaciones como el Consejo Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), el Consejo Indígena de Uxpanapa (CIUX), el Movimiento Ciudadano Veracruzano (Mociv), Ciudadanos Organizados en Acción, Frente Francisco Villa y el Grupo Agrario Playa Vicente, la Alianza Indígena Campesina y Popular de Veracruz (ALICAPVER). Ésta se impulsó como un proceso de articulación entre distintas organizaciones indígenas y campesinas que demandaron al gobierno estatal respuesta a sus peticiones no atendidas, principalmente aquellas referentes a los problemas de la población indígena. En sus inicios la alianza ejerció una presión conjunta sobre el gobierno estatal y consiguió la atención de algunas de sus demandas. Sin embargo, ésta se deshizo por problemas entre las organizaciones derivados de divergencias en sus planteamientos políticos y también a causa de la cooptación que el gobierno estatal logró con algunas agrupaciones.

En el 2005 MAIZ se integró al Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC). Esta coordinadora está conformada por organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC). MAIZ continuaba afiliado al CONOC hasta el 2012,⁵⁷ lo cual hizo posible la articulación y coordinación de acciones promovidas por éste entre distintas organizaciones. Además, su participación en esta coordinadora le ha permitido a esa organización ampliar la difusión de sus movilizaciones en el plano regional y nacional.

Por último, a partir de 2007 MAIZ se incorporó a la Campaña Sin Maíz No Hay País. En este caso, la agrupación se ha dedicado a la promoción de los planteamientos de la campaña y se han organizado varias ferias campesinas. Como se recordará, ésta surgió en el contexto de la eliminación de aranceles a la importación de maíz y frijol proveniente de Estados Unidos (EE.UU.) que se registró a comienzos de 2008, así como de la presión de algunas empresas trasnacionales para la aprobación de la siembra de maíz transgénico en México.

4.4 Elementos sobre el conflicto entre el movimiento campesino-indígena y el Estado-nación a principios del siglo XXI: MAIZ en el estado de Veracruz.

Como hemos señalado anteriormente, los procesos de privatización y desmantelamiento de las empresas del sector público que atendían a los productores agrícolas, ocurridos desde las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, favorecieron la desarticulación del

⁵⁷ A pesar de que se señala que hasta el 2012 MAIZ pertenecía a la CONOC, se debe aclarar que en la actualidad (2014) sigue formando parte de esta coordinadora.

aparato económico estatal a través del cual se ponían en operación los instrumentos de la política pública para la agricultura.

Asimismo, el Estado mexicano canceló ciertos mecanismos de intermediación político-económica que le habían dado legitimidad a la acción política estatal en la agricultura frente a sectores sociales como el campesinado. Como ya se ha descrito, a este proceso también contribuyeron de manera significativa las reformas al artículo 27 de la Constitución. Y en conjunto, estos procesos han producido el debilitamiento de determinados agentes económicos y sociales (en el caso del campesinado), además de poner en cuestión el vínculo político que existía entre el Estado y amplios sectores de las clases subordinadas rurales.

En el caso las organizaciones campesinas que han surgido en el espacio rural, como MAIZ, su capacidad se ha desplazado de la dimensión económica a la social. En ese sentido, esta organización guarda su potencialidad en la cohesión interna de sus grupos, pues para ella ha ido adquiriendo mayor importancia 'la apropiación de la vida social'. Ese planteamiento se ha llevado a la práctica a partir del desplazamiento del ámbito concreto de 'la demanda de tierra' a un espacio pluridimensional referido a lo territorial en el que se encuentra incorporada la trama compleja de procesos y relaciones sociales, económicas, políticas y culturales (Rubio, 2006).

Tal y como se señaló en el capítulo anterior, la emergencia de nuevas formas de organización en el espacio rural acordes a las formas de vida comunitaria de los grupos que integran a las organizaciones de este tipo se sustenta principalmente en referentes étnicos y sociales. No obstante, estos se han ido modificando a la par de las transformaciones internas y externas de las comunidades rurales, así como de las agrupaciones indígenas y campesinas. De ese modo, la relación de MAIZ con un Estado de tipo monocultural como

el mexicano (García Linera, 2008), se ha caracterizado por una lógica de subordinación económica y control político (a partir de distintos mecanismos), que ha favorecido diversos procesos organizativos por parte de esa agrupación. En ese sentido, sus demandas se inscriben fundamentalmente en la defensa de ciertos derechos sociales, económicos y culturales, así como la ampliación de la capacidad para gestionar algunos servicios y recursos naturales localizados en el territorio donde habitan los grupos que la integran.

Para algunos autores, estos factores pueden concebirse solamente como parte de un contexto más amplio de lucha por la apropiación de los que pueden considerarse elementos intangibles (Moguel, 2011). De un lado, se trata de aquellos ámbitos de la vida social y comunitaria de las agrupaciones rurales y campesinas que les permiten a éstos construir sus comunidades y formas de vida colectiva, aunque ya no sean considerados como elementos económicos significativos, en términos de la producción de determinados bienes agrícolas o materias primas, que aporten mercancías a los mercados local o regional.

Por otra parte, al concebir estos elementos se destaca la cuestión de la apropiación de algunos componentes de la vida biológica (biodiversidad, semillas nativas, plantas medicinales) que no han sido todavía apropiados por el capital, y por lo tanto, aún se reproducen como valores de uso y no como valores de cambio dentro de los espacios que actualmente son habitados por estos grupos sociales.

En esta perspectiva, los procesos de organización que ha impulsado MAIZ a lo largo de la primera década del siglo XXI se asocian a la defensa de esos diferentes entramados de relaciones sociales que posibilitan la constitución de comunidades campesinas, pueblos indígenas y localidades rurales, que son la expresión de esas relaciones. Sin embargo, a partir de estos elementos intangibles, que también se reproducen de manera tangible en ciertos componentes de la vida biológica en conjunto con las diversas expresiones

socioculturales de los grupos que habitan esos espacios, esta agrupación se opone en distintos niveles al Estado mexicano y la personificación de éste en el estado de Veracruz. Esto ocurre principalmente debido a la implementación de las políticas neoliberales en el sector agrícola por parte del gobierno de ese estado, cuyo impacto –como se describirá en el capítulo siguiente- ha erosionado la base material que permite la creación de dichos entramados y los grupos que les han dado vida.

Capítulo 5. Organización rural y desestructuración campesina: el caso del Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Veracruz.

En este capítulo se describen algunos mecanismos económicos que han afectado la configuración de la organización. Se plantea que algunas de las transformaciones más significativas que ha registrado MAIZ se derivan de los cambios provocados por la desestructuración campesina en la fase del capitalismo globalizado, en la cual han operado las políticas neoliberales dirigidas al sector agropecuario. Se estudian las características de algunas de las modificaciones registradas en esta organización se derivan de los cambios ocurridos en la estructura productiva agropecuaria. Se propone una descripción de cómo durante la última década, las comunidades y grupos pertenecientes a MAIZ han impulsado procesos de transformación estructural a partir de distintas propuestas que favorecen una transformación interna, para atenuar la degradación de las condiciones de vida de los grupos sociales que pertenecen a la organización.

5.1 Impacto de la desestructuración campesina sobre la capacidad organizativa de MAIZ.

Como hemos señalado en el capítulo anterior, la agrupación MAIZ tiene presencia en siete estados del país, entre los cuales se encuentran San Luis Potosí, Chiapas, D.F., Puebla, Morelos, Oaxaca y Veracruz. En este último, que fue seleccionado como unidad de observación de acuerdo con la importancia que posee la agrupación dentro de su territorio, MAIZ ha desarrollado su trabajo organizativo y de asesoría en articulación con otras organizaciones como: el Frente Popular de Organizaciones del Sureste de Veracruz (FREPOSEV), la Unión Campesina Zapatista (UCZ) y el Comité de Defensa Campesina (CDC), durante más de 15 años.

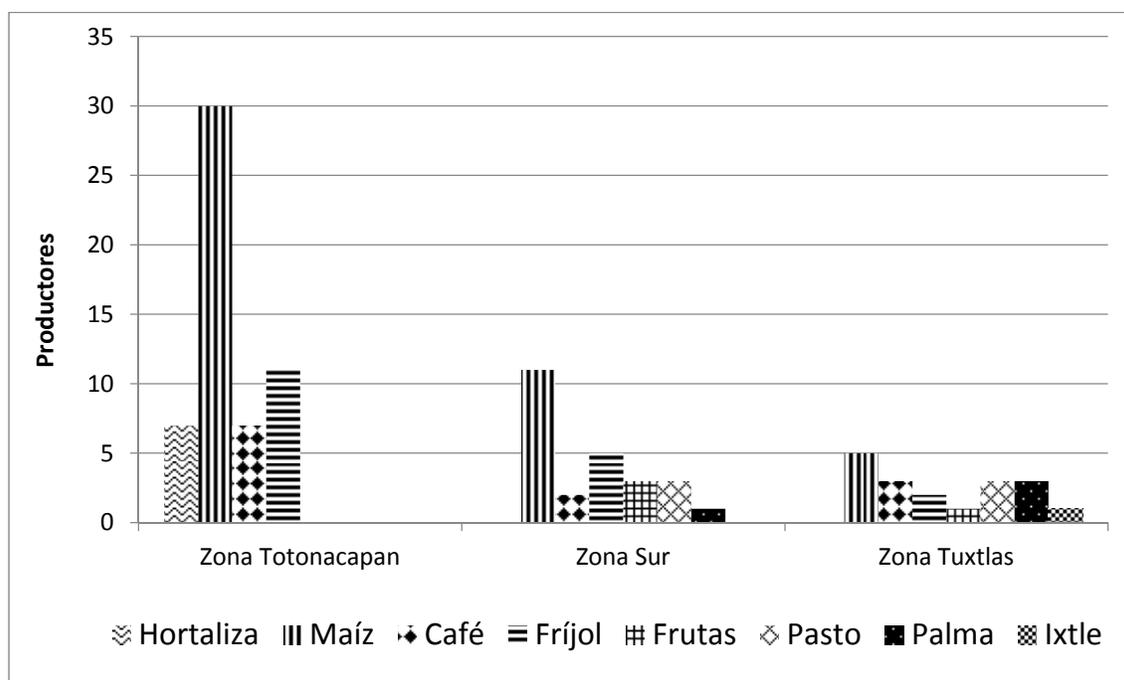
Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, esta agrupación ha fomentado la creación de grupos en alrededor de 20 municipios de Veracruz que se distribuyen en 5 zonas diferentes. En la zona Totonaca, la organización cuenta con 41 grupos (en 16 comunidades, 15 de ellas indígenas) en 6 municipios; mientras que, en la zona Sur existen 14 colectivos (en 13 comunidades, 11 indígenas) dentro de 5 municipios; en tanto que, en la zona de Los Tuxtlas se registran 32 agrupaciones (en 20 comunidades), en 4 municipalidades. En las zonas Olmeca y Huasteca se registran 30 agrupaciones, conjuntamente, dentro de 5 municipios. En cuanto a las zonas Nautla, Sierra, Capital, Sotavento y Papaloapan, no se tiene registro de grupos organizados.

Así pues, partimos de una breve caracterización de la población que fue entrevistada como parte de la muestra. De acuerdo con la información, se puede observar que de las mujeres y hombres que conforman la población estudiada el 13.3% forman parte de unidades de producción consideradas como pequeña propiedad, en tanto que el 37.7% son ejidatarios o ejidatarias. Por otro lado, el 48.8% de los entrevistados manifestaron que rentaban una parcela para cultivar. En la zona de Los Tuxtlas el 100% de la población entrevistada la constituyen ejidatarios, mientras que en la zona Sur la proporción de ejidatarios es del 88.9%. Por último, en la zona Totonaca este porcentaje representa solamente un 10%, en tanto que la proporción de arrendatarios alcanza el 73.3% y se registra un 16.6% de propietarios privados.

En relación a los cultivos producidos, como se observa en la **Gráfica 10**, en el total de las unidades de producción analizadas el cultivo de maíz es el más importante alcanzando el 65.7%, seguido del frijol con un 25.7% de unidades que lo producen tanto en la zona Sur como en la zona Totonaca, así como en la zona de Los Tuxtlas en donde se registra en menor proporción. Otro de los cultivos que ha adquirido cierta importancia es el café –

principalmente en los últimos años- el cual se registra en un 17.1% de éstas, pero considerando no solamente su cultivo sino también su recolección. En tanto que la producción de frutas como papaya, mango, naranja y limón, representan únicamente el 5.7% de los cultivos en estas unidades productivas y las hortalizas como el rábano, la lechuga, el cilantro, cebollín y otros, se producen en el 10% de las unidades, particularmente en las de la zona Totonaca. Por último, los cultivos de pasto y palma se producen en la zona de Los Tuxtlas y en la zona Sur en las que representan el 8.5% y el 5.7%, respectivamente.

Gráfica 10. Producción de cultivos por zona.



Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en el trabajo de campo.

Con respecto al género de los sujetos entrevistados, se observa un predominio de la presencia de mujeres ya que representan el 52.5 por ciento, en tanto que los hombres alcanzan apenas el 47.5%.

De otra parte, aunque a lo largo del trabajo se ha intentado recorrer –a partir de ciertos datos y argumentos- los supuestos planteados para llevar a cabo esta investigación, se pretende sustentar la hipótesis de análisis con evidencia proveniente de los testimonios de los entrevistados.

Tal y como se ha planteado anteriormente, el fenómeno de desestructuración –en su dimensión económica y social- ha generado diversos procesos que favorecen el deterioro de las condiciones de vida de los grupos rurales.

Antes de exponer la evidencia encontrada en la investigación de campo debemos señalar que, este trabajo enmarca a los sujetos que forman parte de la organización MAIZ en una estructura socioeconómica conformada por un entramado de relaciones sociales que hacen posible el despliegue de ciertas prácticas y formas de organización social y económica. Considerando estos elementos, partimos de la categoría de economía doméstica campesina concibiéndola como

...una célula de producción y consumo constituida por la unidad orgánica de fuerza de trabajo y medios de producción. Es estrictamente campesina toda unidad rural de producción que a) emplee en lo fundamental el trabajo de sus propios miembros y b) ejerza un control real sobre una dotación mínima de medios de producción, entre ellos la tierra. (Bartra, 2006: 285).

Por otra parte, la reproducción de esta categoría de productores agrícolas se caracteriza por su pertenencia a una unidad doméstica, dado que: “El núcleo humano natural y social de una unidad económica con estas características es la familia.” (Ídem). Ésta es considerada como una estructura que permite la configuración de determinadas agrupaciones sociales tanto en los espacios rurales como en los urbanos. Así pues,

la unidad doméstica como mancomunidad de ingresos (...) es una entidad cuyos límites y composición están sometidos a cambios continuos [y en la cual] la maquinaria estatal interviene en el moldeado y remodelado de esa

estructura; y la etnicidad, cuyas normas van cambiando, socializa a los miembros de la unidad doméstica en roles económicos particulares. (Wallerstein, 2004: 235).

En función de estas categorías no se considera el análisis de estos productores agrícolas de modo individual sino como parte de una unidad doméstica, debido a que usan la fuerza de trabajo de una parte de los miembros de ésta y a su vez existe una complementariedad de los ingresos que obtienen en conjunto. Este fenómeno se expresa fundamentalmente en el caso de las mujeres, debido a que en períodos recientes este sector ha tenido que insertarse en el mercado laboral⁵⁸.

Partiendo de estos supuestos consideramos que, a medida que la economía doméstica campesina registra los cambios económicos que ocurren a nivel estructural o macro, la composición de la unidad doméstica se transforma y replantea las condiciones en que se desplegará de manera conjunta para sus miembros a nivel micro.

Asimismo, la reproducción campesina parte de esta unidad doméstica que se sustenta en los lazos de parentesco y comunidad⁵⁹, permitiendo que este tipo de productores desplieguen ciertas actividades económicas sin contratar fuerza de trabajo ni pagar salarios. De tal manera, estos productores rurales se diferencian de aquellos que están relacionados con una forma de organización de tipo empresarial, los cuales no emplean mano de obra familiar sino que contratan trabajo asalariado.

⁵⁸ Como señala Arias: “las nociones de “ayuda” y [...] “complementariedad” [por lo que] ellas aprendieron a buscar, reconocer, aceptar, transformar, maximizar cualquier actividad u oferta de trabajo que se ofreciera en sus minirregiones y que representara un ingreso, de preferencia en efectivo y regular, para sus unidades domésticas” (Arias, 2009: 112).

⁵⁹ Como afirma Bartra (2006), la unidad se crea en la asociación de varias familias o núcleos familiares y no sólo en la singularidad del núcleo familiar: “En tal caso, las diversas familias seguirán representando el papel de las unidades económicas, mientras las actividades que se practiquen mediante la asociación sean complementarias y la actividad familiar independiente constituya el núcleo regulador [...]” (Bartra, 2006: 285).

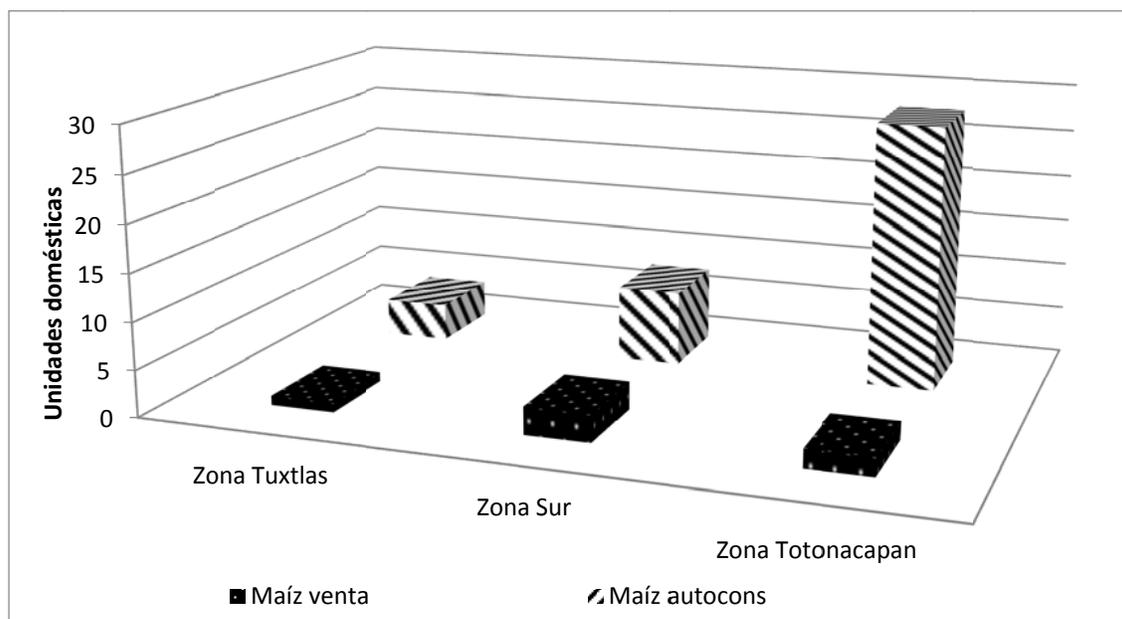
Por otra parte, el campesinado no sólo abarca a los productores agrícolas de ejidos y comunidades rurales sino también a algunos propietarios privados de pequeñas y medianas extensiones de tierra⁶⁰.

Con respecto a las características de la economía doméstica campesina, en el caso de los miembros de la organización MAIZ, a partir de la información recopilada se observa que estas unidades domésticas basan su alimentación en algunos granos básicos (maíz y frijol), hortalizas (jitomate, rábano, cebolla, chayote), frutas (naranja, papaya, limón y mango), y en menor proporción algunos animales de traspatio (principalmente pollos) o pescado (en el caso de quienes viven en zonas cercanas a las lagunas o el mar).

En consonancia con el incremento de la agricultura de autosubsistencia que se ha observado en el espacio rural veracruzano desde el año 2001, como se describió en el capítulo 3, entre los miembros de la organización MAIZ una parte significativa de los campesinos practica esta forma de producción y consumo (ver **Gráfica 11**).

⁶⁰ Un indicador que permite una aproximación a la magnitud de este grupo social en el estado de Veracruz se encuentra en el número de ejidatarios y comuneros que existían para el año 2001 que era de 276,487, mientras que para el 2007 esta cifra se había elevado a 294,675, lo cual indica un incremento del 6.57%; en tanto que, respecto a los posesionarios que se encuentran en ese territorio el aumento fue del 46.6% , al pasar de 71,455 en el 2001 a 104,796 en el 2007 (INEGI, 2002; INEGI, 2009). Tomando en cuenta los datos anteriores, se puede observar la existencia de un aumento mínimo en el sector de ejidatarios y comuneros, mientras que en el de posesionarios casi alcanzó el 50% durante el mismo período, lo cual es una de las consecuencias del fenómeno de pulverización de la propiedad social.

Gráfica 11. Porcentaje de unidades domésticas que cultivan maíz para venta y autoconsumo en las zonas estudiadas.



Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en el trabajo de campo.

La evidencia empírica indica que el maíz que se produce en las diferentes zonas se destina principalmente para el consumo de las unidades domésticas (entre los productores de maíz el 85% es para autoconsumo). Mientras que, el frijol que se produce se dedica en su totalidad al autoconsumo de las unidades, en las tres zonas. No obstante, en algunos casos se presenta la venta de maíz con vecinos de la propia comunidad o de otras comunidades aledañas (en la zona de Los Tuxtlas la venta de maíz por parte de los productores representa el 20%, en tanto que en la zona sur constituye el 27% y en la zona Totonaca se registra solamente el 6.6%). A su vez, estas unidades domésticas adquieren la mayor parte de las hortalizas, leche, huevo y carne, en el mercado local.

De acuerdo con estos datos, la producción para autoconsumo se practica principalmente entre las agrupaciones que habitan los municipios de la zona de Los Tuxtlas y en los de la

zona norte-Totonaca, aunque también está presente en la zona Sur. Como afirmaba un entrevistado: “Cultivo maíz y frijol cuando se da. Un pedazo tengo café. Vendemos muy poco, a veces una tonelada, a veces no, no llega; y a veces con 500 kilos que nos quedan para vender, ya lo demás los consumimos.” (Entrevista con Nicolás Cruz Pablo).

Por tanto, aunque algunos de estos productores cuentan con parcelas que alcanzan más de 20 ha. de extensión (un ejidatario de Pajapan contaba con hasta 43 ha.), la mayor parte de lo que producen se orienta al autoconsumo. Este fenómeno ocurre con los miembros de la agrupación de las distintas zonas estudiadas. Sin embargo, la extensión de las parcelas por zona muestra algunas diferencias: en la zona de Los Tuxtlas el promedio por parcela era de 6.6 has., mientras en la zona Sur alcanzaba un promedio de 16.4 has. Asimismo, existen diferencias significativas entre los grupos de ambas zonas con respecto a los de la zona Totonaca: solamente 3 productores contaban con parcela ejidal y el resto rentaba (22 casos), pero el promedio por parcela era de 1.09 has.

Según nuestro planteamiento, el mecanismo de desvalorización de los granos básicos –que se ha descrito anteriormente- actúa, en el caso de los productores de maíz que venden su producción a un precio de \$3 o 3.50 pesos el kg. con los comercializadores locales mientras el precio de venta a los consumidores locales es de 6 pesos por kg., favoreciendo el desgaste a sus unidades domésticas debido a que el precio que pueden obtener por sus productos es bajo y no les permite recuperar los costos de producción y un excedente para invertir nuevamente en ciclos posteriores. Este proceso ha obligado a muchos productores a abandonar el cultivo de maíz. A su vez, la elevación del precio de los insumos, como la semilla, que de acuerdo con la evidencia alcanza un precio de 72 pesos el kg., opera de modo desfavorable ya que en el caso de quienes cultivan este grano la semilla debe

comprarse cada año, pues no puede utilizarse la misma en años posteriores. Como afirma un campesino entrevistado:

Pues la mayoría de gente aquí dejó de sembrar por ese motivo, porque no hay recurso para la semilla; en primera es la semilla...el grano que siembra uno...ya no nace para el siguiente año, y si nace ya no te da y se hace la planta muy amarilla, ya no sirve. Ahorita para poder sembrar necesita uno comprar la semilla. Luego, en esta ocasión iba yo a comprar semilla...y el saquito de semilla de veinticinco kilos me costaba \$1,800 [pesos]. ¿Cuándo hay dinero, de dónde vamos a agarrar \$1,800? (Entrevista con Javier Abraham Cortés).

Como hemos propuesto aquí, el proceso de desestructuración socioeconómica, que se despliega en razón del mecanismo de desvalorización, favorece a los productores con mayores recursos económico-productivos en tanto que los costos de producción del maíz, el frijol y otros cultivos han aumentado para los productores de bajos recursos. La desestructuración de la economía doméstica campesina permite la concentración de recursos materiales y económicos por parte de ciertos grupos de poder locales: “¿por qué?, porque grupos pequeños se han ido haciendo cacicazgo, yo tengo lana yo concentro la tierra, te la voy comprando, te la voy comprando, y al rato ya te desaparecí, no. Y yo que tengo los recursos y los medios invierto y ya tengo más posibilidades, y te voy desplazando [...] Digamos, desde el productor que siembra una hectárea, compáralo con el que siembra 100.” (Entrevista con Nemesio González Aranda).

En un contexto como éste, se incrementa la participación de comercializadores y acaparadores de ciertas zonas. Además, también se ha manifestado un proceso de pérdida de fertilidad de la tierra, el cual provoca el uso intensivo de fertilizantes. De tal manera, entre los miembros de la organización estos procesos han favorecido el abandono de diversos cultivos:

Antes se cosechaba muchos más y casi no existía lo que es el tomate que venden ahora... el tomate que le llaman de 'riñón' era el que se cosechaba y, pues ahora casi ya no por lo mismo de que entraron muchos comerciantes a vender. Unos vienen de Puebla a traer todo lo que comercian ellos y como hasta el momento ya muy pocos se dedican a sembrar por ejemplo, tomate, frijól, porque luego dicen que ya no quiere dar, ya no se da como antes; porque ahorita si siembran tienen que echarle sus químicos para que dé su siembra. Por ejemplo en la siembra de ahorita de la milpa hay que regarle mucho líquido para que crezca, antes no era así, no se le regaba nada de líquido, ni químico y ahorita si se ocupan mucho los químicos. (Entrevista con Agustina Sánchez Pérez).

Así, aunque algunos productores cuentan con el medio de producción esencial –la tierra, que en algunos casos es de mediana extensión (20 a 40 has.)- solamente 3 productores de la zona Sur producen maíz para la venta y 1 de la zona de Los Tuxtlas lo hace para comercializarlo en su comunidad.

Otro elemento que se observa a partir de esta situación es que los productores dependen de la adquisición de semillas, en el caso de granos como el maíz, que son comercializadas por empresas productoras de semillas híbridas (DeKalb o Pioneer). Éstas se ofrecen a través de ciertos programas gubernamentales, que se establecen mediante acuerdos entre las empresas y las oficinas de gobiernos locales⁶¹.

Así, el proceso de desestructuración no solamente se refleja a través del abandono de la producción de granos básicos y la presencia predominante de la producción para autoconsumo –concentrándose en cultivos como el maíz o el frijol-, sino también en la disminución, y en algunos casos desaparición, de otros cultivos que se producían para la venta. En ese marco, durante los primeros años del siglo XXI el tabaco y el café empezaron a dejar de producirse en algunas localidades de la zona de los Tuxtlas, a raíz de la pérdida de valor que sufrieron dichos cultivos.

⁶¹ Entrevista con Venaias Mendoza, Jefe del Departamento de Fomento Agropecuario del gobierno municipal de Sotepan, 12 de enero de 2012.

A este elemento se ha agregado la falta de apoyos por parte del gobierno para su producción, como advierte un campesino:

hace diez años todos sembraban tabaco, había trabajo en el tabaco, era zona tabacalera; todo mundo tenía café, había mucho trabajo en este tiempo [a principios de año] de cortar café. Había trabajo también de ir a limpiar las fincas, bueno todo el año teníamos trabajo. Actualmente no hay nada de eso, no hay café. Apenas se van a empezar a plantar y eso con lo poquito que uno puede, porque tampoco hay apoyo para sembrar. Con lo poquito que uno puede, va uno trabajando. (Entrevista con Javier Abraham Cortés).

Por otra parte, algunos productores afirman que los ingresos que se pueden obtener en el trabajo de jornal son bajos. Así, la disminución de las actividades productivas entre los ganaderos que habitan en las localidades y comunidades rurales ha impulsado la incorporación de los miembros de la unidad familiar como fuerza de trabajo:

Antes había el que buscaba para ir de vaquero, que al machete o a cortar poste con el hacha, bueno tantas cosas. Ahorita el ganadero lo que hizo, que se compró su motosierra y muchas veces el mismo corta sus postes, ya me entiendes [...] ¿Por qué?, porque no tiene como subsidiar esos gastos, él mismo lo hace; y ya que tiene un lienzo de cien, doscientos postes en uno o dos días, vuelve y él mismo los corta, él mismo los corta y ya sus hijos lo acarrear, o su señora la enseña a andar a caballo, a andar jalando los postes y ya, por ahí ya la libra pues. (Entrevista con Enrique Galmich).

De ese modo, la desestructuración también afecta a las unidades domésticas de aquellos trabajadores rurales que no cuentan con una parcela ejidal/comunal o la propiedad de una parcela, e impacta fundamentalmente a aquellos que producen en la condición de arrendatarios. Estos últimos pueden ser considerados como el sector rural que registra el mayor desgaste a causa de dicho proceso.

En los municipios estudiados, de acuerdo con los datos expuestos en el capítulo 3, en el espacio rural se han mantenido bajos niveles salariales entre la población. Así, los salarios que perciben los trabajadores agrícolas oscilan entre \$50 y \$80 pesos diarios. En ese marco,

los campesinos que integran MAIZ en la zona Totonaca, quienes en su mayoría pertenecen a unidades domésticas de arrendatarios que rentaban una parcela, destinaban la totalidad de su producción al autoconsumo. Asimismo, mientras el costo de la renta era de \$2,500 pesos por ha. los recursos económicos con que contaban estas unidades domésticas, es decir, los ingresos que obtenían, oscilaban entre los \$1000 y \$2000 pesos mensuales. Estos elementos han acentuado la precarización de los asalariados agrícolas, reduciendo el nivel de ingresos en sus unidades domésticas a medida que se incrementan los gastos para la reproducción de éstas y, a su vez, aumentan los costos para la producción de bienes agrícolas de autoconsumo. Estos elementos inciden en las unidades domésticas de los miembros de la agrupación que habitan en el territorio veracruzano, los cuales han experimentado la degradación de sus condiciones de vida.

Lo anterior favorece el proceso de agotamiento de las economías domésticas campesinas, lo cual ha obligado a las mujeres que pertenecen a dichas unidades, y que se dedican principalmente al hogar (34 casos), a insertarse en el mercado laboral local. Así, dentro de la zona Totonaca en una proporción de las unidades domésticas no sólo laboraba el jefe de familia sino también la mujer (9 casos), durante el período de cosecha de café. Por otro lado, esta situación era evidente en aquellas unidades en las que sólo había jefa de familia (9 casos). Además, algunas de estas unidades domésticas han tenido que incorporar la fuerza de trabajo de los hijos en labores agrícolas (2 casos), por ejemplo cuando acuden todos los miembros de la familia al llegar la temporada de pizca en las fincas cafetaleras.

Por otro lado, aunque no es exclusivo de los grupos rurales que habitan en este estado del país, la migración ha sido un fenómeno que se registra desde hace dos décadas en función del deterioro de la economía doméstica rural y campesina. Como han señalado algunos autores (Mestries, 2009; Rubio, 2009b; Sánchez, 2010), ésta se ha convertido en uno de los

factores que compone una parte importante de las estrategias de sobrevivencia por parte de ciertos sectores rurales, para enfrentar los efectos de la desestructuración.

A pesar de que anteriormente se ha señalado que este fenómeno no es tan significativo dentro de los municipios estudiados, en el caso específico de las unidades domésticas analizadas la migración se ha presentado entre algunos de los miembros de la organización, ya sea de manera personal o por alguno de los miembros de su entorno familiar cercano (26 casos).

Los registros permiten observar que desde comienzos de la década del 2000, la migración ha sido motivada por la necesidad de obtener ingresos por parte de los jefes (as) de familia, y/o para complementar los gastos para la reproducción de la unidad doméstica, cuando ocurre en el caso de los hijos u otros miembros del entorno familiar.

Como hace 10 años, había más gente trabajando en el campo, ahorita ya muchos como quien dice, como ven que pues no se dan aquí, pues no hay donde rascarse, más hay muchos que no tienen parcela; y todos esos compañeros se están saliendo a otro lado a buscar trabajo, a buscar empleo. Muchos de aquí han salido por otro lado, para buscar empleo. Los jóvenes, los adultos también, si los que le ven edad todavía se van para allá a cortar espárrago, otras cosas, en otros estados...en Sinaloa, Sonora, todo para allá. Entonces se va mucho para allá la gente y la cosa es que aquí no hay donde buscar y la necesidad es lo que nos obliga, yo siempre le digo a la gente: ‘uno no por mal decir, si la mera verdad se sale no por gusto, sale por la necesidad y salen buscando trabajo, chambeando en otro lado’ (Entrevista con Nicolás Cruz Pablo).

Este fenómeno no solamente modifica las características y la composición de las unidades, pues en muchos casos al migrar el jefe (a) de familia y/o los hijos mayores, se requiere el apoyo de los padres y abuelos en las labores de cuidado de los nietos. De acuerdo con el testimonio de un campesino entrevistado, existen casos de:

hijos de ejidatarios que si bien le ayudaban a su familia, a su papá a la siembra y lo que se hacía aquí, se han ido. Casos de hijos que se van y ya no regresan, [...] no son los dueños de las tierras. De estos hijos de

ejidatarios sí hay personas que han salido, pues más bien se han establecido en la ciudad. (Entrevista con Antonio Mena Velazco).

En cuanto a los salarios que obtienen quienes migran a alguna ciudad del país (como la Ciudad de México, según algunos casos registrados), por lo general son de nivel muy bajo y en ocasiones solamente alcanzan los \$800 y llegan hasta los \$2,400 pesos mensuales. El contexto en que laboran estos migrantes internos generalmente es de informalidad, puesto que muchos de ellos no reciben prestaciones ni seguridad social. Según algunos testimonios, el salario que obtienen las personas empleadas en los servicios domésticos va aumentando conforme a la antigüedad del trabajador, pero llega a una monto tope después del cual ya no aumenta, y tampoco se respetan sus derechos a una liquidación conforme a la ley en caso de renuncia o despido⁶².

Mientras que, en el caso de los jornaleros agrícolas o de quienes están en el sector de la construcción su destino ha sido las zonas agrícolas del norte del país como Sinaloa o Ciudad Obregón (Sonora), Cabo San Lucas y San José de los Cabos (Baja California Sur), y ciertas zonas turísticas del sureste como Cancún (Quintana Roo), Mérida (Yucatán), y las ciudades más cercanas de Minatitlán o Coatzacoalcos. Para estos grupos las condiciones laborales en los diferentes sectores económicos son muy semejantes, pero los salarios pueden alcanzar un nivel más alto en la industria de la construcción (según un entrevistado, el salario que obtenía en labores de construcción alcanzaba un monto mensual mayor a \$14,000 pesos). Aunque, en este sector el desgaste físico y los riesgos son mayores para los trabajadores, pues algunos pierden la vida llevando a cabo sus labores⁶³.

La situación es diferente para los migrantes externos o internacionales cuyo destino principal ha sido alguna ciudad del territorio de EE.UU, pues aun cuando los salarios son

⁶² Entrevista con Paula Antonio García.

⁶³ Entrevista con Nicolás Cruz Pablo.

bajos no están al mismo nivel que en México, lo que constituye uno de los principales motivos para quienes migran a ese país. Por otra parte, existe una situación extremadamente compleja para estos migrantes derivada del hecho de que éstos no están en aquel territorio bajo un estatus legal, por lo cual no son aceptados por ciertos sectores de la población y sus autoridades estatales y únicamente se les admite como fuerza de trabajo a la que se explota sin garantizar sus derechos humanos fundamentales y mucho menos laborales⁶⁴.

En ciertos casos, algunos hijos de campesinos que pertenecen a la organización y que habían migrado a EE.UU. regresaron a sus localidades a causa de la crisis económica que afectó a ese país entre el 2008 y 2009. Como relata un campesino entrevistado: “yo hace unos tres años llegué de Estados Unidos (EE.UU.), tiene como siete años que emigré a EE.UU. Estuve tres años allá y pues yo me regresé también de allá cuando...esto de que, pues el dinero se devaluó allá en EE.UU., ya no había trabajo y mejor nos regresamos.” (Entrevista con Javier Abraham Cortés).

Por otro lado, tanto la migración nacional como la internacional han favorecido la dispersión de la población de las localidades estudiadas. En ese marco, se debe señalar que existe un proceso determinado de dispersión de la población rural generado en función de la desestructuración del territorio⁶⁵, la cual se configura como un elemento adyacente a la desestructuración socioeconómica. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente,

⁶⁴ Esto los coloca en una situación no sólo de desprotección como trabajadores sino que incluso al ser considerados en calidad de población ilegal no se les reconoce como sujetos de derecho, debido a que se encuentran en un país extranjero cuyas autoridades llegan a someter e a estos sectores, en algunos estados que se ubican en la frontera con México, a una persecución para deportarlos al país.

⁶⁵ El sistema territorial de una región –como a la que pertenece el estado de Veracruz- ha pasado por diferentes etapas y procesos de estructuración, desestructuración y reestructuración. En esa lógica, cada sistema va adquiriendo características que reflejan la aparición de algunos componentes nuevos o la pérdida de otros a la vez que se modifican las formas de organización social y económica, en función de su constitución como una totalidad (Bustos, 2002: 115).

el proceso de dispersión de la población en el espacio rural representa una de las tendencias características del capitalismo, en la medida que favorece la concentración de la población en determinados espacios urbanos.

Como han observado algunos autores (Arias, 2009), este proceso ha impulsado un despoblamiento gradual de distintas localidades y comunidades rurales en México. En algunas localidades de Catemaco, así también en las de Coyutla, Mecatlán, Pajapan y Sotepan, donde habitan miembros de la organización MAIZ se han registrado algunos casos, principalmente entre los hijos adultos jóvenes, en los cuales ha ocurrido el abandono de sus localidades para trasladarse a ciertos centros urbanos, como se ha señalado más arriba.

De tal modo, la falta de empleo en las localidades y comunidades rurales y la degradación de las condiciones de vida de las familias campesinas han sido factores determinantes en este proceso de despoblamiento. Por otro lado, este fenómeno se concentra en el sector de los hijos de ejidatarios que han podido obtener un nivel de escolaridad medio. Como en otros casos, la migración es producida por la necesidad de los jóvenes –que en muchos casos terminan su educación en el nivel medio superior y se van, o dejan trancos sus estudios- de encontrar un empleo.

Por ejemplo ahorita muchos muchachos que están saliendo de aquí y aquí no [se] queda, y yo quisiera que si, [...] que estudien, que se queden como maestros para nuestro beneficio, aquí mismo trabajan y pues vamos a conocer pues aquí hay progreso, pues hay el alumno que salió de aquí y ganó su magisterio pues, y ya [se] quedan aquí mismo trabajando en la comunidad. Apenas dos que están ahorita, dos y pues yo lo que quiero que sea que todos ganen ese talento [para] enseña [r], que demuestra pues que de veras están estudiando. Pues ahorita [de] todos los que están muchos se van a chambear, muchos se han ido a Cancún, a Mérida, aquí en Coatza [coalcos], en Mina [titlán], donde quiera ha salido la gente aquí, por la necesidad, que no hay donde trabajar. (Entrevista con Nicolás Cruz).

De otra parte, este ha sido un elemento importante en el incremento de la compra-venta de parcelas en los ejidos que han registrado la propiedad de las parcelas a través del programa PROCEDE, como se ha señalado en el capítulo 3, debido a que en ciertos casos los ejidatarios ceden la parcela a sus hijos y estos prefieren venderla o rentarla⁶⁶ a otros productores, aunque no sean miembros de la comunidad. En algunas ocasiones, quienes son beneficiarios no pueden realizar los trámites para la cesión de las parcelas debido a la falta de recursos⁶⁷.

En otros casos, los hijos de los ejidatarios no tienen interés en continuar con la producción de cultivos y solamente permanecen los ejidatarios (as) con sus parejas, que con frecuencia están en el tránsito de la edad adulta a la tercera edad. Este podría considerarse como un elemento indicativo del demérito de las prácticas campesinas, en tanto que ellos (as) son portadores del conocimiento para desarrollar determinadas estrategias de producción agrícola, pero que en muchos casos se pierden a causa del desinterés de sus descendientes (sean hijos (as) o nietos).

Los que van quedando siempre en la comunidad son las personas mayores, no tan viejos, pero que si están en una edad adulta; entonces, pues ellos se van quedando con sus conocimientos y se van quedando ahí. Y uno como joven, si no estás bien centrado, lo nuevo te llama, el dinero y las cosas que puedes obtener afuera te llama, entonces esto también implica que muchos jóvenes pierdan el piso y ya no quieren su comunidad como los más grandes. Si te influye mucho y algunos ni siquiera regresan, se quedan por siempre fuera...(Entrevista con Israel Medina Mena).

De ese modo, la dispersión de estos grupos ha dado origen a un proceso de atomización entre los pobladores de distintas localidades y comunidades rurales, a causa de la reducción

⁶⁶ Como se ha señalado anteriormente, en algunas localidades el costo de la renta era de \$2000 o \$2,500 pesos por ha.

⁶⁷Entrevista con Nicolás Cruz Pablo.

de la población que vive en estos espacios y cuyas principales actividades productivas se desarrollaban en función del sector agropecuario.

Asimismo, el fenómeno de dispersión también ha disminuido la cohesión comunitaria entre los habitantes de algunas de las localidades y comunidades rurales que participan con la organización, lo cual ha afectado a algunas de las agrupaciones. Este mecanismo, que entre otras expresiones permitía la reproducción de un vínculo social para la realización de faenas y trabajos colectivos que practicaban frecuentemente los campesinos y habitantes de las localidades y comunidades rurales, ha disminuido su incidencia debido principalmente al abandono de las actividades agrícolas por parte de la población. Como refiere una integrante de una agrupación:

...más antes había muchos más hombres, no salían a trabajar, todos trabajaban su campo, la laguna, de ahí se sacaba para el sustento; estaban más unidos para las faenas, para hacer trabajos comunitarios como sembrar maíz, frijol, o sea hacer cultivos para beneficio de la misma comunidad [...] Se nota la diferencia en ese aspecto. (Entrevista con Modesta Fernández).

En ese sentido, la evidencia permite observar que el proceso de agotamiento de la economía doméstica campesina ha afectado la capacidad organizativa de la agrupación en términos de la participación de algunos grupos rurales, dado que afecta la capacidad de reproducción de sus comunidades.

Según los testimonios referidos, existen algunas diferencias en torno a esta situación experimentada por los grupos de las distintas zonas estudiadas. Como veremos más adelante, las agrupaciones de ciertas zonas han registrado con menor intensidad los efectos de este proceso debido a la composición étnica de algunos de sus grupos, fundamentalmente Nahuas y Popolucas. Este elemento les ha permitido conservar la cohesión entre quienes son integrantes de la organización, sobre todo en asuntos

relacionados con su comunidad. Y, aunque la práctica de la agricultura basada en el uso de técnicas alternativas de producción se ha convertido en una demanda que ha cobrado importancia como referente de identidad entre los miembros de la organización que habitan en esas zonas del territorio veracruzano, los procesos anteriores no han posibilitado el fortalecimiento de la organización en términos de su capacidad organizativa.

A pesar de esto, no podemos afirmar que estos elementos hayan favorecido una disminución tajante de la participación en la organización de las distintas categorías de trabajadores agrícolas y otros sectores de la población rural. Esto último resulta de gran importancia, ya que la organización MAIZ cuenta con agrupaciones conformadas no solamente por pequeños campesinos y trabajadores agrícolas asalariados, sino también por mujeres y hombres insertados en distintas actividades económicas.

Por lo tanto, en los siguientes apartados se planteará una caracterización de estos elementos para su análisis.

5.1.1 Debilitamiento de las formas de organización socioeconómica rural.

Como se señaló anteriormente, una proporción significativa de los miembros de MAIZ que habitan en diversos municipios del estado de Veracruz han registrado un aumento de la producción para autoconsumo, así como la agudización en la precarización de sus condiciones de vida. Estos procesos han tenido repercusiones en la organización, debido a que los miembros de las unidades domésticas tienen que salir a buscar empleo en otras actividades económicas y, en algunos casos, los obliga a migrar a las ciudades (tanto del territorio nacional como del extranjero).

En ese marco, a partir de la cancelación del reparto agrario y la implementación del PROCEDE, ha ocurrido la división de las parcelas ejidales provocando la reducción del

tamaño de éstas conforme se otorgaron a los hijos de los ejidatarios, pues con la reforma del art. 27 constitucional se canceló la vía legal para la demanda de tierra. Como afirma un dirigente de MAIZ entrevistado:

... las parcelas inicialmente siempre eran [de] ocho hectáreas, ahorita ya se repartieron; primero se hicieron de cuatro, ahorita las de cuatro ya se hicieron de dos y algunas ya hasta se hicieron de una. ¿Por qué?, porque como tú sabes el reparto agrario terminó, la tierra que quedó como ejido, quedó como ejido, y la que no pues no y ya, ahí quedó (Entrevista con Nemesio González).

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que una proporción significativa de la población rural en el estado de Veracruz vive en zonas marginadas (CONAPO, 2010). En ese sentido, la carencia de servicios básicos como salud, educación y vivienda, son determinantes para estos sectores de la población rural, debido a que muchas de sus necesidades básicas no están satisfechas. Por tanto, los procesos de desgaste económico de las unidades domésticas afectan con mayor fuerza a estos sectores rurales⁶⁸.

De otra parte, la falta de empleo también ha estimulado la informalidad laboral en un sector amplio de la población ocupada de Veracruz⁶⁹, aun en el espacio rural.

Así, el proceso de desestructuración campesina ha incrementado la fragilidad de sus formas de organización socioeconómica, a tal grado que en algunos casos las familias se han desintegrado:

la economía familiar por supuesto que se ha ido desgastando y eso ha obligado a que la familia trabajen, por decir esta el papá y la mamá, y a veces los hijos que trabajen, y no exactamente da lo mismo que antes [...]; pero sí, no solamente el desgaste económico, sino el desgaste de la

⁶⁸ Como afirma un dirigente: “Sobre todo en esas comunidades le pega más duro, ¿por qué? porque la mayoría de esas comunidades son comunidades donde sí se carece de los servicios básicos, de los servicios elementales se carecen, no. Entonces por ejemplo, si yo tengo que atenderme, como no tengo un seguro, yo tengo que ver como atiendo la salud mía y la salud de mi familia, entonces si te pega la cuestión económica y te pega duro (Entrevista con Nemesio González).

⁶⁹ En el año 2012 la tasa de informalidad laboral en Veracruz fue de 65.69 mientras que a nivel nacional fue de 59.98. Este dato permite observar la existencia de una mayor presencia de este fenómeno en ese territorio del país, que a nivel nacional.

familia como núcleo de la sociedad, porque sí lleva a la desintegración el que trabaje la mamá y el papá [...], o los hijos [...] la desintegración familiar también es muy concreta y [...] va a tener sus consecuencias mucho más graves (Entrevista con Felipe Zeferino).

En ese sentido, las formas de organización socioeconómica que emplean ciertas agrupaciones rurales como MAIZ y FREPOSEV (que actualmente trabaja en coordinación con MAIZ), se han modificado a consecuencia tanto del agotamiento de la economía doméstica rural como de la migración que han impactado a las unidades familiares de los miembros de estas organizaciones.

Para algunos integrantes de la organización que habitan en diversas localidades de la zona Sur, las actividades agrícolas no constituyen su principal actividad económica:

El campesino por ejemplo, aquí la gente no se dedica nada más al campo, el campo es como un extra se podría decir. Hay gente que se dedica de lleno al campo, como usted dice que por allá por la sierra en Soteapan todo eso es a gran escala. Son hectáreas de maíz y se le invierte, les dan créditos y le echan abono, y fertilizantes para que lo que se le invierta les salga. Entonces nosotros veíamos que de manera orgánica si es bueno, pero en gran escala está más pesado y pues si nos dimos cuenta que si es bonita la milpa, es muy buena; pero no, para decir que vamos a vivir del campo no se puede. No da pues, por ejemplo el maíz, no se compra muy caro y pues no se puede (Entrevista con Fortino Martínez).

En concordancia con estos procesos, después de la crisis capitalista mundial del año 2008, en algunos espacios rurales del territorio de Veracruz ha disminuido la demanda de fuerza de trabajo que antes requerían las unidades de producción ganaderas o agrícolas, como afirma un campesino: “antes el ganadero, o el que sembraba maíz y todo eso llamaba ocho o diez gentes que fueran a trabajar con él. Ahorita es: ‘si tengo el trabajo, pero no tengo dinero’, si me entiendes” (Entrevista con Enrique Galmich, 13 de octubre de 2011).

En este contexto, las formas de organización socioeconómica reproducidas por los miembros de esta agrupación, les permitían impulsar la conformación de grupos en torno a

la defensa de la tierra y la reproducción de la economía doméstica campesina. No obstante, en función de los procesos motivados por la desestructuración socioeconómica, ciertos esquemas se han modificado.

La desestructuración del campesinado y el desgaste de las unidades domésticas rurales han complicado la asistencia de los miembros de la agrupación a las reuniones y eventos de coordinación, debido a la reducción de los recursos económicos que pueden emplear en sus actividades organizativas. De acuerdo con algunos dirigentes, los grandes encuentros estatales y nacionales que se realizaban en la década de los noventa se redujeron y se sustituyeron por encuentros a nivel municipal. Asimismo, debido a la falta de este tipo de recursos entre los miembros de la agrupación las reuniones de coordinación se han tenido que llevar a cabo mensualmente.

Además, durante la última década se ha pasado de un esquema en que las reuniones se desarrollaban para discutir los temas de mayor relevancia a nivel nacional y estatal, contando con los coordinadores municipales y una delegación representante de los grupos de cada municipio, a un esquema en el cual las reuniones se programan para aprovechar la asistencia de alguno (s) de los representantes locales que pueden acudir a la éstas y organizar diferentes actividades para aprovechar el traslado de quienes pueden asistir.

Como refiere un dirigente entrevistado:

... como dicen los compañeros: ‘si queremos ir a la reunión, pero pues no hay dinero’, entonces con qué, si se reduce [la participación]. De hecho [...] las asambleas en algunos municipios lo tenemos cada mes, a veces si tenemos un taller lo tenemos que convertir en asamblea, para poder ahorrar lo máximo que se pueda del dinero para poder moverse. Igual los encuentros masivos que teníamos hace 20 años, que eran encuentros grandes donde pues la economía más o menos iba, [...] si se redujo los encuentros; ahora se hacen varios encuentros en cada municipio de tal manera que los compañeros puedan asistir sin pagar transporte, lo más que se pueda pues, sin hacer los encuentros entre todos los municipios que era bastante rico pues, para las culturas. Pero se han reducido los

eventos masivos, ahora son eventos más locales para que puedan participar. (Entrevista con Felipe Zeferino).

Los esquemas organizativos a partir de los cuales operan en la actualidad estas agrupaciones tienen como propósito principal la transmisión constante de información de las comunidades a sus coordinaciones locales, y de éstas a la coordinación estatal. Así también, el impulso a la participación de mujeres, hombres y jóvenes trabajadores en la organización ha sido uno de los ejes para las labores organizativas, puesto que promueven la incorporación a ella a partir de la capacitación para los procesos de gestión y autogestión de proyectos, servicios o recursos otorgados por los programas gubernamentales. Según el testimonio de un dirigente:

...sobre todo [...] el tema de nosotros tiene que ver con la capacitación. Tiene que ver más con eso, con la idea de ir formando cuadros, con la idea de formar cuadros e ir creando los mecanismos para que la gente vaya apropiándose de su gestión, no se trata de que yo te represento, yo te represento y yo te represento, sino te represento ahorita, te voy a llevar, aprendes y al rato tú tienes que representarte a ti mismo, ir creando la autogestión. (Entrevista con Nemesio González Aranda).

No obstante, cabe señalar que existen otros procesos que han incidido en la conformación actual de la organización y tienen que ver con las relaciones que ha establecido la organización MAIZ con el Estado neoliberal, y que analizaremos en el siguiente apartado.

5.2 Formas de organización rural y su relación con el Estado neoliberal.

Durante la fase neoliberal la relación entre el Estado y los movimientos y organizaciones rurales⁷⁰ se ha caracterizado por la aplicación de un determinado conjunto de mecanismos,

⁷⁰ Al parecer, se han modificado ciertos mecanismos de control sociopolítico hacia las organizaciones rurales, que ya se usaban antes de la consolidación del Estado neoliberal. De ese modo, la relación corporativa que incorporó a determinadas organizaciones campesinas y permitió la legitimación del Estado posrevolucionario durante varias décadas se ha modificado durante la etapa neoliberal adquiriendo un carácter autoritario (Grammont, 1995), en tanto que el andamiaje institucional configurado a partir de la implementación de las políticas neoliberales ha permitido una mayor operación del mecanismo clientelar, también creado en otra

para la resolución de los conflictos agrarios y el combate a la disidencia social. Estos mecanismos son: la cooptación⁷¹, la negociación y en algunos casos la represión⁷².

En ese marco, a principios de la década del 2000 los productores rurales, cuya inserción económica en el mercado se había dado a través de la mediación de determinadas instituciones y agencias del Estado, vieron erosionada su fuerza (económica y política). Como señalamos en otro capítulo, los movimientos y organizaciones rurales que impulsaron movilizaciones y protestas a principios del siglo XXI⁷³, cuyo objetivo era cambiar las políticas neoliberales impulsadas por los grandes capitales –nacionales y extranjeros-, se han mantenido en resistencia para enfrentar las consecuencias de la globalización económica.

De tal manera, a “...consecuencia de la crisis agrícola y del proceso de reestructuración productiva, los actores sociales que operan en el campo se transformaron desde la unidad de producción, que podemos considerar como el núcleo social básico, hasta las organizaciones regionales o nacionales que conforman la estructura más amplia de

etapa histórica anterior y promovido –como analizaremos más adelante- fundamentalmente con los grupos sociales en situación de pobreza.

⁷¹ Como hemos señalado en el capítulo anterior, durante el período inicial de la etapa neoliberal el Congreso Agrario Permanente (CAP), fue creado para contener a los movimientos disidentes en el espacio rural a través de la cooptación. Éste ha servido principalmente para procesar los conflictos que han surgido en el espacio rural a partir de la aplicación de las políticas neoliberales.

⁷² Los episodios más cruentos de la represión ejercida sobre los movimientos rurales en la historia reciente de este país ocurrieron desde mediados de la década de los noventa. Estos acontecimientos sucedieron en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994, en el que el Gobierno Federal llevó a cabo una guerra de baja intensidad y permitió la operación de grupos paramilitares y de policías comandados por caciques locales, para disminuir el apoyo que éste y otros movimientos tenían entre la población rural, además de tratar de reducir la presencia de otros movimientos armados rurales que surgieron en el estado de Guerrero. Se puede señalar en principio la matanza de 17 campesinos el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez de aquel estado. Dos años después, se registró la masacre de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó del estado de Chiapas. Posteriormente, el 7 de junio de 1998 sucedió la matanza de 11 indígenas en el poblado de El Charco, en el municipio de Ayutla de los libres (Guerrero), y el 10 de junio del mismo año ocurrió el asesinato de 8 civiles y 1 policía en el municipio de El Bosque, en Chiapas.

⁷³ Como se ha descrito en capítulos anteriores, el movimiento El Campo No Aguanta Más constituyó la manifestación más clara en ese sentido, así como también las movilizaciones impulsadas por distintas agrupaciones a partir de 2007 en favor de la soberanía alimentaria y la defensa del maíz como base para la alimentación de la población mexicana.

expresión social.” (Grammont, 1995: 118). Diversas agrupaciones rurales, entre las cuales se encuentra la organización MAIZ, fueron obligadas a transitar de procesos de lucha en favor de la resolución de conflictos agrarios y demandas en favor del reconocimiento de los derechos de los grupos indígenas, a una resistencia fundada en la demanda de recursos para la implementación de proyectos productivos, la práctica de la agroecología y la gestión de servicios para las localidades y comunidades rurales.

En ese marco, la organización MAIZ ha tratado de mantener una relación de independencia⁷⁴ respecto del Estado en sus diferentes niveles (locales, estatales, nacionales). De acuerdo con los miembros de la agrupación, ésta intenta apartarse de la subordinación que el Estado establece con determinadas organizaciones, en función de la cooptación efectuada a través de las concesiones que ofrece a determinadas organizaciones, a partir del otorgamiento de recursos económicos y materiales dispuestos a través de ciertos programas gubernamentales⁷⁵.

La reducción significativa de los recursos dirigidos a los productores, que hemos referido anteriormente, ha impactado principalmente a los grupos campesinos y de pequeños productores agrícolas agrupados en torno a organizaciones de tipo social, como MAIZ, que intentan detonar procesos organizativos de carácter independiente en el espacio rural. Como señala un campesino entrevistado en torno a este proceso:

⁷⁴ Sobre el carácter independiente de las organizaciones rurales debe mencionarse que desde la década de los noventa diversas organizaciones proponían la ruptura de la relación corporativista que se había vuelto ineficaz para lograr un mayor reparto de tierras y la consecución de demandas como la ampliación de los programas de apoyo (Grammont, 1995).

⁷⁵ La creación de los programas Procampo y Progresá (posteriormente sustituido en el 2002 por Oportunidades y recientemente nominado como Prospera), tuvo como objetivo la separación de los programas oficiales para dividir a los productores agrícolas en dos grupos: el programa Procampo ha tenido como propósito atender a los agricultores con potencial productivo, mientras que el programa inicialmente llamado Progresá, después nominado Oportunidades y actualmente nombrado Prospera, fue concebido para compensar a los sectores rurales que se consideraban de baja productividad y poco rentables, en calidad de pobres rurales.

...es donde la organización está perdiendo fuerza, por motivo de que lo que estamos solicitando el gobierno no nos lo da; detienen la entrega de proyectos para destruir a la organización y como somos una organización fuerte a nivel nacional. Entonces al gobierno no le conviene que estemos levantando más gente, porque nosotros los estamos presionando para que suelten todos los apoyos y programas a las comunidades, más que nada [...] Ahí es donde nosotros quedamos mal como organización. (Entrevista con Juan Salazar Abraham).

De acuerdo con algunos testimonios, ciertos agentes estatales locales intentan acentuar el desmantelamiento de los grupos organizados como MAIZ. Sin embargo, según la opinión de un miembro entrevistado sus esquemas de organización están dirigidos a reducir el impacto de este elemento, a través de la concientización de sus miembros acerca de la acción organizativa. De ese modo, antes de entregar cualquier tipo de apoyo se busca concientizar a quienes participan: “Nosotros cuidadosamente [les decimos] ‘a ver, vénganse: primero es la capacitación, y esto y esto; cuando vemos que ya están conscientes vamos a enfocarte en algo, pero que te beneficie.” (Entrevista con Maximino Pascual Cervantes).

No obstante, las políticas neoliberales que han implementado en Veracruz los gobiernos estatales, han contribuido a la disminución de la participación de algunos grupos rurales en determinados procesos de organización. Algunos de los líderes locales de MAIZ consideran que la disminución de la participación por parte del sector de productores agrícolas se debe principalmente a determinados factores: entre otros, destacan la falta de apoyo de los gobiernos de distintos niveles, los cuales operan diversos programas que otorgan recursos para los grupos campesinos. En ese marco, se afirma que la falta de apoyo estatal para el cultivo de las parcelas ha afectado a los campesinos, generando a su vez dificultades a la agrupación:

...ha causado problemas porque también lo que siempre platicamos [con] el gobierno, pues no hay apoyo para el campo, o sea es lo mínimo, que también...sólo con programas pequeños, y los apoyos llegan ya pasando los tiempos, ya con su esfuerzo lo hizo, si va a sembrar maíz pues ya lo hizo como fue su posibilidad; los recursos llegan hasta el último, entonces ha afectado también, porque los recursos ojala que llegaran a tiempo, para que si te sirva pa' trabajar. (Entrevista con Agustín Mozo Chapol).

Bajo ese marco, la evidencia indica que, en muchos casos, los pequeños campesinos pertenecientes a las comunidades y localidades rurales estudiadas ya no tienen interés en participar en organizaciones rurales, debido a que no tienen confianza en que serán apoyados por éstas. En ese sentido, la acción del estado a nivel local y estatal refleja la disolución de la relación corporativa con este y otras organizaciones, cuyos esquemas no aportan un impulso a la aceleración del proceso de inserción de los agentes económicos locales y nacionales más competitivos en la economía nacional y/o global. Así, los procesos señalados han desembocado en la disminución de recursos económicos para impulsar al sector agropecuario. De esa manera:

... lo que pasa es que el campesino ya no cree más, ya no quiere más engaño. Por eso mismo el campesino se está poniendo renuente a querer participar en la organización [...] el gobierno ha hecho retenciones de muchos programas para la organización y claro que la gente se desespera, y lo que hace es salir de la organización porque no se le apoya como a veces el gobierno nos dice. Nos engaña y entonces otra organización política es a la que apoya la gente, y nosotros no podemos avanzar. (Entrevista con Juan Salazar Abraham).

En ese sentido, se ha producido cierta desunión entre los miembros de las localidades y comunidades rurales, lo que refleja la profundización de la relación política estatal que favorece la identificación de los distintos sectores de la población con algún grupo o partido político local, estatal o nacional⁷⁶. Esta situación se acentúa en los períodos en los que se

⁷⁶ “Pues la diferencia que veo [...] con la organización, primero que es una organización independiente, este, de los partidos políticos, de todos, del PRD y todo eso. Una cosa es que tenga una opción política, pero somos independientes, no dependemos de ningún partido.” (Entrevista con Felipe Zeferino).

llevan a cabo procesos electorales, cuando los dirigentes de los grupos partidistas logran hacerse de algún cargo en el gobierno local o mantienen una relación clientelar con otros grupos políticos a nivel estatal o federal⁷⁷ (elemento que se analizará en el siguiente apartado).

De otra parte, aunque no es algo reconocido por los dirigentes de la organización se puede afirmar que existe un proceso de especialización de la dirigencia que concuerda con la forma de operar del Estado neoliberal. Este elemento se ha constituido como una de las más importantes atribuciones de los grupos dirigentes, en tanto que se registra en función de la organización de distintos colectivos, los cuales admiten una distribución de las funciones dentro de los espacios en los cuales tiene presencia la organización en el territorio.

En ese marco, resulta indisociable la conformación de órganos que permiten el control de las acciones de la organización y se conforman como ámbitos para realizar las gestiones solicitadas por las comunidades. En tanto que, permiten el acceso y otorgamiento de beneficios derivados de la inclusión en los programas que los gobiernos de distintos niveles ofrecen a los sectores rurales.

No obstante, como se ha señalado anteriormente, la organización ha tratado de disminuir el impacto de estos procesos a través de la modificación de sus esquemas organizativos. De modo que, aunque ciertos miembros de la organización no observan un proceso de separación jerárquica entre dirigentes y dirigidos, refuerzan los mecanismos de difusión de la información para la toma de decisión colectiva.

⁷⁷ Entrevista con Venaias Mendoza, Jefe del Departamento de Fomento Agropecuario del gobierno municipal de Soteapan, 12 de enero de 2012.

5.2.1 “Competencia” entre MAIZ y las organizaciones clientelares.

Uno de los aspectos que resultan relevantes en cuanto a la forma de operación de la organización MAIZ en los espacios rurales se relaciona con la forma de gestión de los apoyos obtenidos con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG's). En ese sentido, frente a la práctica de las relaciones clientelares entre grupos de poder político locales y organizaciones rurales, los grupos pertenecientes a MAIZ han planteado formas de organización sociopolítica fundadas en la difusión de prácticas no clientelares que están orientadas hacia la cooperación. De tal modo, las organizaciones como MAIZ compiten con otras que emplean el clientelismo para conformar grupos rurales, a los que emplean como apoyo de sus dirigentes y candidatos durante los períodos electorales.

La práctica de la relación clientelar se presenta en diversos municipios, aunque principalmente en los que existe una presencia importante de organizaciones como Antorcha Campesina (ligada al Partido Revolucionario Institucional-PRI), como relata un informante:

Lo que pasa es que también aquí hay una competencia con la organización Antorcha Campesina, en estas comunidades es la que está empujando; ¿por qué?, porque la Antorcha Campesina viene a rasgos de gobierno, pues de política. Entonces, sí le mete fertilizante, le mete semilla mejorada, le mete un chingo de cosas, y lo que va de nosotros con lo que es MAIZ, con lo que es Fomento-Freposev, no nos permite que le movamos fertilizante, le movamos maíz mejorado, ¡no! Lo de nosotros es alterno, de buscar qué semilla hay que sembrar, si es la nativa o el criollo; si hay que abonar con orgánico. A lo mejor eso ha sido nuestra debilidad o sea, de decir: ‘a ver, pues sí, hay que hacer una organización pequeña ustedes, no enfocan como estos’. (Entrevista con Maximino Pascual Cervantes).

En contraste, la propuesta de MAIZ está orientada al fomento de prácticas productivas agrícolas basadas en el uso de fertilizantes orgánicos y la obtención de semillas en ferias o a

través de intercambios entre productores campesinos. Aunque en el caso del integrante entrevistado, éste también considera que esta situación debilita a su organización, a la cual considera ‘pequeña’ en relación a las otras vinculadas con grupos políticos.

Como se puede observar, la relación clientelar ha adquirido una gran relevancia en las relaciones políticas vigentes en el territorio de Veracruz a lo largo de la última década. Sin embargo, en el caso de MAIZ no se puede afirmar que exista como tal una relación clientelar entre la organización y determinadas instituciones estatales. Aunque algunos grupos pertenecientes a la organización han apoyado a determinados grupos políticos y candidatos en los procesos electorales que se han realizado a nivel municipal⁷⁸.

Al PRD siempre nosotros lo apoyamos, desgraciadamente pasó un presidente del PRD y no hizo nada. Porque nosotros lo dijimos: ‘aunque vienen para acá cuando es tiempo de elección, ustedes nomás vienen a engañar a la gente’; y no se hace, no se hace cuando ellos se la pasan diciendo que el pueblo de Encino Amarillo está pobre. Antes nosotros teníamos miedo, no podíamos enfrentar a un político. Siempre al político hay que enfrentarlo. (Entrevista con Pablo Ramírez López).

Aunque, este apoyo no necesariamente se ha retribuido con ayuda del gobierno local cuando han ocurrido siniestros causados por fenómenos climáticos, que han afectado los cultivos de algunos productores⁷⁹.

Por otra parte, MAIZ ha conseguido posicionarse entre los grupos de la sociedad civil del estado de Veracruz, debido a las gestiones que han realizado –en ocasiones con el apoyo de parte de algunas instituciones públicas a nivel local, estatal o federal-, en función de sus labores de resolución de distintas demandas y peticiones de sus miembros⁸⁰.

⁷⁸ Entrevista con Pablo Ramírez López.

⁷⁹ Gráfico de Xalapa, 1 de marzo de 2012; Entrevista con Pablo Ramírez López.

⁸⁰ Entrevista con Ángel Pérez Silva, 23 de agosto de 2012. Consulta del archivo de MAIZ en la oficina central ubicada en la ciudad de Jalapa, agosto de 2011.

Básicamente, los apoyos concedidos por parte de instituciones como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en función de programas de otorgamiento de animales de traspatio como cerdos, gallinas, borregos y otros como cooperativas de comercio para productos de papelería, han permitido la incorporación de más miembros a la agrupación en algunas localidades⁸¹. Así también ocurre en el caso de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG'S), como la estadounidense Heifer que ha beneficiado a ciertos grupos de MAIZ con algunos programas⁸².

A consecuencia de la implementación de estas prácticas, algunos de los integrantes de las agrupaciones que habitan en la zona Totonaca hacen referencia a la organización MAIZ como si se tratara de un programa que apoya a los grupos rurales con proyectos y que lleva a cabo distintas actividades:

Gracias al programa MAIZ nos han apoyado con un proyecto, jamás aquí se nos había apoyado y ahorita pues es muy bonito participar ahí con los compañeros, conocer a más personas. A mí sí me gusta mucho estar ahí con el programa MAIZ porque conozco más de lo que yo no había conocido, ha habido fiestas, ferias campesinas como apenas hubo en Coyutla, yo jamás había participado, es la primera vez [...] participamos a veces, cuando no se puede ir pues vamos cada ocho días y a veces cada 15 días a las reuniones allá con las compañeras. (Entrevista con Ana Santez Pérez).

De otra parte, la percepción de los miembros de esta organización es que existe una situación de inequidad, en cuanto a la distribución de los apoyos y recursos que otorgan los gobiernos de carácter local, estatal y federal. Lo anterior ha incidido negativamente en ciertas localidades y comunidades rurales en tanto que ha favorecido una división fundada en las orientaciones políticas de su población. En ese contexto, algunos miembros perciben

⁸¹ Entrevista con Carmen Velázquez Galicia.

⁸² El programa 'Pase en cadena' que ha beneficiado a varios miembros de la agrupación se realiza mediante el otorgamiento de una cantidad determinada de animales de traspatio para que sean criados y reproducidos, y las crías obtenidas del primer beneficiario son entregadas a otros miembros de la organización que se convierten en nuevos beneficiarios enlazados en la misma cadena.

una mayor desunión de los grupos que habitan en sus comunidades derivada de la relación que establecen éstos con los partidos políticos a nivel local con algunos habitantes:

La política ha venido mucho a desunir a los pueblos. ¿Cómo? la política, digamos el PAN (Partido Acción Nacional), [la gente dice] 'no, pues yo soy del PAN, ya no me voy a juntar contigo; y yo soy del PRI (Partido Revolucionario Institucional), contigo ya no me junto'. Los del PAN y del PRI ya no. Entonces, eso hace que aquí en el pueblo, en el mismo pueblo nos dividamos; que ya no hagamos faenas juntos, que nos opongamos a hacer faenas, que no demos cooperaciones, digamos, para lo del agua; bueno, muchas cosas. De hecho hace años o hace unos diez años yo recuerdo que, cuando solicitaban para faena íbamos todos; ahorita nos buscan para faenas, si citan cien van de ellos treinta compañeros y lo mismo es para asambleas. Se cita a todo el pueblo para una asamblea y van treinta, cuarenta compañeros, o sea que estamos totalmente desunidos ahorita en el pueblo. (Entrevista con Javier Abraham Cortés).

Por otro lado, como se ha observado más arriba, a lo largo de la última década MAIZ adquirió, a comienzos del siglo XXI, cierto dinamismo a medida que sus ejes de estructuración se definieron por la conformación de ciertos referentes de pertenencia colectiva. En tanto que, estos grupos organizados fueron estableciendo alianzas con otras agrupaciones⁸³.

De acuerdo con la información proporcionada por algunos entrevistados, las agrupaciones CONALCI, UCD, y otras de tipo corporativo como la CNC, y las de tipo clientelar como Antorcha Campesina, tienen mayor fuerza, económica principalmente, debido a su capacidad tanto para obtener recursos materiales a través de la vinculación de sus dirigentes con políticos locales (como ocurre en el caso del municipio de Soteapan, donde el presidente municipal era dirigente de esta última agrupación), así como en el acceso a ciertos programas de carácter asistencial (Oportunidades, actualmente Progresá). Y a pesar de que tales agrupaciones actúan permanentemente en busca de adeptos, éstas concentran

⁸³ Como una agrupación rural cuyas alianzas han sido motivadas por la consecución de objetivos fundamentalmente a nivel local, entre otros las que se relacionan con la vigilancia de los procesos electorales y la transparencia en cuanto al manejo de recursos por parte de los gobiernos local y estatal.

su acción principalmente en los períodos electorales. De acuerdo con el testimonio de una campesina entrevistada: “Desde [hace] años estamos nosotras metiendo solicitudes, a veces con los candidatos porque siempre vienen a prometer cuando están en su candidatura meten muchas cosas y a la mera hora piden copia de credencial y nunca nos apoyan en nada, es lo mismo de cada tres años que hacen.” (Entrevista con Ana Santez Pérez).

Según los planteamientos de algunos de dirigentes de MAIZ no siempre se puede hacer el trabajo de conciencia sin que se suministre alguna clase de beneficio a través del acceso a determinados programas. Esta situación se deriva de los altos niveles de pobreza y exclusión económica en que se encuentra un sector amplio de la población rural que habita en las localidades donde la organización tiene presencia.

Aunque no podemos avanzar mucho más sobre las implicaciones de la difusión de la relación clientelar, se puede conjeturar que la incidencia de los procesos electorales en las relaciones entre habitantes de una misma localidad o comunidad no sólo ha ampliado las divisiones derivadas de las preferencias partidistas de la población, sino que además ha acentuado procesos de atomización y alejamiento, que impiden cambios cualitativos en las instituciones sociales y políticas a nivel local y estatal.

5.2.2 Alcances y límites de las demandas sectoriales de la agrupación campesina-indígena.

Uno de los aspectos distintivos de MAIZ es el carácter sectorial de algunas de sus demandas, debido a que un sector significativo de sus miembros (60%) realiza alguna actividad económica dentro del sector agropecuario. No obstante, las transformaciones ocurridas en la concepción de la unidad de producción familiar, en la acepción de la ‘parcela familiar’ en el caso de los campesinos, o el ‘patrimonio familiar’ en cuanto a los

propietarios privados, ha implicado la concentración del trabajo organizativo en determinadas demandas como la gestión de trámites de titulación o la solución de conflictos derivados de la apropiación de tierras. En ese sentido, la organización productiva tiene un carácter más asociativo debido al papel que tiene la experiencia de adaptación a un marco de fuerte competencia, que se da a través de la creación de empresas de ‘segundo y tercer nivel’ (Grammont, 1995).

Asimismo, entre los productores que participan en la organización no se ha presentado la figura del productor independiente, ya que los productores exitosos son aquellos que se vinculan a una cadena productiva más amplia, la cual es capaz de integrar horizontal o verticalmente sus actividades (este proceso está dominado por las grandes compañías agroindustriales y agrocomerciales).

En primer lugar, se debe señalar que uno de los factores que restringen los alcances de sus demandas sectoriales se deriva de la restringida capacidad económica de los productores que participan en la organización. En muchos casos, los recursos materiales que poseen como la tierra, han sido distribuidos entre los hijos de ejidatarios:

Pues [entre] los productores [...] hay pequeños, [...] los terrenos [...] pueden ser de 10 hectáreas, pueden ser de 5, pueden ser de 4. Sí, como antes el ejido lo trabajaban comunalmente el que pudo ampliarse se amplió; viene Procede y ya midió, al que tenía una hectárea pues ese le midieron. Entonces así quedó [...] Sí, si tiene 5 o 6 hectáreas y tiene 6 hijos tiene que repartirlos...” (Entrevista con Agustín Mozo Chapol).

En particular, uno de los objetivos que plantea MAIZ en cuanto a sus demandas sectoriales es la diversificación de los cultivos, que estaría orientada a complementar muchas de las necesidades alimentarias de su población, pues se percibe que el monocultivo es poco propicio para mantener la economía familiar⁸⁴. Básicamente, se trata de la propuesta de un

⁸⁴ Entrevista con Pedro Mayo Alfonso; Entrevista con Nemesio González Aranda.

modelo de agricultura con características diferentes a las del modelo organización y producción agrícola que se orienta por la demanda de productos del mercado, dado que está en función de las necesidades de la población de las localidades y comunidades rurales.

Este tipo de propuestas gozan de una posición importante para muchos de los campesinos que forman parte de la organización, dentro del conjunto de sus propuestas de carácter sectorial. Algunos de ellos proponen que se debe ir más a fondo desde la iniciativa de los propios miembros, pero toman en cuenta que no se ha podido desarrollar ampliamente:

Yo creo que ha faltado mucho de que nuestro coordinador difunda y de que de una vez se ponga a trabajar; y para que se empiecen a desarrollar las actividades. Por qué, digamos, a ver voy a sembrar maíz, sí; la semilla, aquí está la semilla, el arado, pues ahí está el arado, sólo le falta que el campesino se ponga a chambear y ahí está, ¿sí? No que le vamos a dejar todo a la organización, pero que digamos 'vamos a hacer esto en el campo y ahí estamos'. (Entrevista con Maximino Pascual Cervantes)

Así pues, a lo largo de la última década el aspecto sectorial ha dejado de constituir el eje principal de las peticiones de los grupos que integran MAIZ. Dichas peticiones, como la demanda de mobiliario e inmobiliario escolar o equipos de cómputo, solicitudes de concesiones de transporte o la demanda de materiales para construcción y mantenimiento de los hogares, así como las solicitudes de apoyo para la adquisición de ganado de traspatio se han convertido en las demandas más frecuentes. De ese modo, el elemento productivo-económico sigue siendo importante dentro de las concepciones de la organización.

En ese sentido, sus demandas no tienen solamente el objetivo de consolidar sus formas de producción y consumo. Aunque dicho objetivo se exprese de manera implícita en las reivindicaciones de la organización, éste abarca un conjunto más amplio de demandas que se relacionan con la forma de vida de las comunidades desde diversos ámbitos.

Además, se debe tener en cuenta que estos planteamientos que giran en torno a la propuesta de diversificar los cultivos de las parcelas, también contienen una visión acerca de los cambios que se deben impulsar en otros ámbitos de sus localidades. Esta propuesta, que es contraria a la actual visión dominante del modelo de monocultivo, se considera solamente adaptable a una escala menor dada la escasez de recursos económicos con que cuentan estos productores.

De acuerdo a lo que se ha señalado más arriba, algunas demandas de tipo sectorial han formado la base para la conformación de nuevas concepciones referentes a las prácticas agroecológicas que se fundan en nuevas relaciones con la naturaleza y los grupos sociales.

5.2.3 Procesos de organización sociopolítica en el campo veracruzano a partir de los cambios sectoriales.

Desde su constitución, en agosto de 1996, MAIZ estuvo fuertemente marcada por ciertos esquemas de organización sociopolítica centrados en los temas agrario-productivos. Estos esquemas se asentaban en la formación de grupos rurales para el planteamiento de demandas, principalmente de regularización de terrenos y dotación de tierras, así como la petición de solicitudes por parte de grupos campesinos ante los gobiernos estatal y local⁸⁵, y la solución de algunos problemas –como la provisión de servicios de agua potable, drenaje, construcción de caminos y servicios de salud e inmobiliario escolar- de las que carecen las localidades y comunidades rurales⁸⁶.

⁸⁵ Desde la creación de MAIZ hasta el año 2012 tres han sido los ocupantes del poder ejecutivo estatal en Veracruz: Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa.

⁸⁶ Consulta del archivo de MAIZ en la oficina central ubicada en la ciudad de Jalapa, agosto de 2011.

Fundamentalmente, como hemos descrito en el capítulo anterior, los grupos que formaban parte de esta organización pertenecieron en un inicio a la Unión Campesina Democrática⁸⁷ (UCD). Las diversas movilizaciones realizadas durante la etapa de 1997 al 2000 se desplegaron a partir de demandas como la negociación de cartera vencida y la solución de conflictos por la tierra, tanto en la modalidad de despojo por parte de acaparadores y/o por algunos enfrentamientos entre ejidatarios y caciques locales, e incluso entre ejidatarios de una misma localidad. Como relata un campesino, antes de la escisión de MAIZ de la UCD, muchas agrupaciones se integraron a la organización para solucionar sus conflictos financieros originados en la crisis económica de 1994:

Aquí [en el ejido] había un conflicto que le iban a quitar las tierras a mi papá, a mis abuelos, a muchos señores de aquí, por parte de un crédito que les habían dado. Fue cuando también el ganado se había devaluado totalmente, las vacas se habían comprado a \$2,000 pesos y se vendían a \$1,000, en menos si es posible, no; entonces les iban a quitar sus tierras, en ese tiempo andaba UCD. Mi papá se organizó en eso e hicieron un paro en Acayucan y gracias a eso no le quitaron sus tierras, todavía las sigue conservando, no. De ahí cambió a MAIZ y ya entró más gente aquí, aquí ya siguieron haciendo más grupos. (Entrevista a Javier Abraham Cortés).

Algunas de las movilizaciones impulsadas por ciertos grupos de la UCD (antes de conformar MAIZ), se enfocaban en denunciar la corrupción y los malos manejos por parte de funcionarios de instituciones financieras públicas tanto a nivel local como estatal. Las acciones de la organización se orientaban también a la asesoría de pequeños productores contra los abusos de funcionarios de instituciones como Banrural, centrando sus críticas en el carácter clientelar con que los dirigentes –algunos con aspiraciones políticas- de ciertas

⁸⁷ Como se ha descrito en el capítulo anterior, la UCD surgió a principios de la década de los noventa vinculada al PRD. Posteriormente: “MAIZ nació de una separación de lo que era UCD; entonces cuando ya UCD comenzó con el comercio y la legalización de carros algunos dijeron ‘no, no era el camino este. Era otra cosa’. Entonces nace MAIZ ahí, nace de una división.” (Entrevista con Maximino Medina).

organizaciones campesinas, como la CNC, ofrecían su apoyo y asesoría a los grupos rurales. Según el testimonio de un integrante de MAIZ:

...nosotros nos organizamos aquí en MAIZ debido a que, en el noventa sacamos un crédito en Banrural; nos vimos con la cartera vencida, [...] nos organizó la CNC a través de un político ahí en Acayucan, nos metieron otro 4% más, nos reestructuraron la cartera para que entrara eso en la nueva ley. Fue una mala pasada de ese tipo y, así no poder entrar a un programa donde nosotros pudiéramos salir de esa cartera. Fue la organización UCD y pudimos aletear, porque nuestras parcelas se las iban a dar, si no mal recuerdo creo que a los japoneses...(Entrevista con Fernando Rosas Arias).

En los años posteriores a esta etapa, la cual se extiende del año 2000 al 2009, se registraron diversas acciones por parte de la organización en función de demandas por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Así pues, la modificación en cuanto al tipo de demandas planteadas por la organización se dio a principios de la primera década del siglo XXI. Hacia principios del 2001, con la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura indígena por la Cámara de Diputados Federal, se sostuvo con algunas variantes el eje de demandas centrado en los temas sectoriales.

No obstante, a partir de la coyuntura abierta en el 2001 derivada de las movilizaciones encabezadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se comienza a observar una mayor atención al tema indígena por parte de MAIZ. Lo anterior se confirma con el impulso que le dio la organización a las movilizaciones que surgieron en el estado de Veracruz en rechazo a la aprobación de dicha Ley, que no incorporaba los acuerdos suscritos por el EZLN y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), para el reconocimiento de los derechos indígenas.

Así, durante los años 2001 y 2002 la organización llevó a cabo manifestaciones y protestas en la ciudad de Jalapa para mostrar su rechazo a la ratificación de la ley mencionada por

parte del Congreso local⁸⁸. Asimismo, en 2002 se constituyó la Asamblea Estatal de Pueblos Indígenas de Veracruz (AEPIV), con el propósito de luchar por el respeto a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y por la aprobación de la propuesta de reforma constitucional formulada por el EZLN y la Cocopa, así como en apoyo al proceso de controversia constitucional impulsado por el municipio veracruzano de Tatahuicapan de Juárez junto con otros 330 municipios indígenas del país. En esta asamblea participaron MAIZ y otras organizaciones de carácter estatal⁸⁹.

Además, a pesar del avance registrado en el proceso de parcelación de los ejidos en el territorio veracruzano, numerosos miembros de la organización se mantenían en resistencia para preservar su derecho a la tierra⁹⁰. En ese marco, las protestas contra el funcionamiento del PROCEDE, el acaparamiento de tierras y su venta, se mantuvieron con relativa intensidad⁹¹.

Así, los cambios económicos ocurridos en el sector agropecuario del estado de Veracruz durante las últimas dos décadas han favorecido la configuración de otros esquemas de organización sociopolítica de MAIZ. En ese sentido, los grupos campesinos e indígenas que forman parte de esa agrupación han centrado sus procesos de construcción organizativa en torno a la solicitud de apoyos para la cría de aves de traspatio u otro tipo de ganado y la

⁸⁸ En el contexto de la aprobación de la Ley sobre derechos y cultura indígena aprobada en abril de 2001, diferentes organizaciones en distintos estados de la república pidieron a la legislatura local de sus respectivas entidades que rechazaran la ley. La organización MAIZ, en conjunto con otras agrupaciones que representan las causas indígenas en Veracruz, exigieron al Congreso local que no aprobaran la ley sobre derechos y cultura indígena sancionada por el Congreso de la Unión en el 2001. La Jornada, 15 de mayo de 2001.

⁸⁹ La Jornada, 15 de marzo de 2002.

⁹⁰ En acciones convocadas desde el 2002 en adelante los dirigentes del MAIZ advierten que la existencia de litigios agrarios no resueltos implica un peligro para la estabilidad política y social de la entidad. Así mismo, plantean que la función del PROCEDE ha sido fragmentar al ejido y provocar división entre los campesinos. La Jornada, 14 de julio de 2002.

⁹¹ Organizaciones pertenecientes a MAIZ en ocho estados y diversas organizaciones rurales comenzaron un proceso de resistencia contra la operación de los programas PROCEDE y PROCECOM. De acuerdo con dirigentes de la organización, estos programas dividieron a las comunidades y ejidos, y también propiciaron el acaparamiento y la venta de tierras. El Universal, 18 de febrero de 2003.

producción de cultivos para venta como el café⁹². Sin embargo, como afirman algunos de los entrevistados, uno de los elementos que han afectado los procesos organizativos ha sido el hecho de que esta práctica empleada para incorporar miembros a la agrupación genera el acercamiento de algunas personas que sólo tienen el interés de obtener ayuda en alguna gestión o solicitud de apoyo y posteriormente dejan de asistir a las reuniones:

Porque finalmente mucha gente se ha acercado, pero ha visto la organización como si fuéramos un despacho, no: te traigo mi solicitud, atiéndeme, si se resolvió ay nos vemos, y ya no regresan. Y hay grupos que si han entendido el proceso y se han quedado, y dicen ok, nos interesa continuar dentro de la organización. Es un aprendizaje también. (Entrevista con Nemesio González Aranda).

De otra parte, los esquemas actuales contemplan la identificación de esta organización como un actor social y político con presencia en el estado de Veracruz, que se ha posicionado como un interlocutor legítimo frente al gobierno. A partir de este reconocimiento como interlocutor válido, los integrantes de MAIZ han construido procesos de organización en función de su unión como representantes de distintos grupos rurales, para lograr que sus demandas sean atendidas:

“Si no nos unimos el gobierno no nos atiende; [el] que alguien lleve una solicitud [para] meterla [de manera] independiente [las autoridades sólo] lo archivan y no, o sea, y no hay seguimiento; nosotros pues como estamos unidos pues si se le da seguimiento y bueno pues [aunque no se resuelva] como nosotros pedimos, pero si nos va dando ahí algunos apoyos, algunos programas.” (Entrevista con Agustín Mozo Chapol).

En ese marco, existen ciertas cuestiones fundamentales que algunos coordinadores locales destacan acerca de la forma de plantear demandas a los representantes gubernamentales.

Principalmente, el planteamiento de sus demandas es llevado a cabo por los representantes

⁹² Algunos miembros ingresan a MAIZ para gestionar algún proyecto, aunque puede ocurrir que antes se les otorgue otro apoyo. Como relata una campesina entrevistada: “MAIZ nos apoyó con los puerquitos que se nos dio para empezar a trabajar, antes del proyecto se nos ha apoyado; como ahorita apenas que fuimos a Coyutla, nos dijo don Nemesio que se nos iba a apoyar otra vez con una plantitas de café y ya las fueron a recoger.” (Entrevista con Ana Santez Pérez).

locales de la agrupación –a petición de sus asambleas locales- a los gobiernos local y estatal. En ese sentido, algunos entrevistados señalan que los procesos de negociación no se llevan a cabo de manera directa entre los coordinadores estatales y los funcionarios de gobierno, sino que se proponen mesas de negociación entre los coordinadores locales y los funcionarios, ya sean de dependencias estatales o federales⁹³.

De otra parte, la construcción de redes en las que ha participado MAIZ con otras organizaciones se ha dado alrededor de los procesos electorales de la última década. En ese sentido, como lo habíamos señalado, la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVER) conformada entre 2004 y 2006 se orientó a la intervención en el proceso para la elección del gobernador en el estado de Veracruz, en vista de que muchas de las agrupaciones que existen en ese territorio están vinculadas a determinados partidos políticos⁹⁴. Aunque MAIZ no está vinculado con algún partido político los planteamientos que han desarrollado con respecto a este tema han adquirido una mayor importancia, debido a que los grupos rurales que viven en condiciones de pobreza se han convertido en una clientela a la que recurren los candidatos de distintos partidos cada vez que se realizan elecciones locales, estatales o federales⁹⁵.

Mientras que, en el caso de la Red Cívica Veracruzana (RECIVE), configurada desde 2010 y cuyo antecedente fue la ROCVER, ha tenido por propósito desarrollar un trabajo organizativo para incidir en los procesos electorales. Esta red, que hasta la fecha impulsa un proceso de discusión amplio entre diferentes actores sociales de ese estado, ha intentado

⁹³ Entrevista con Enrique Galmich.

⁹⁴ Entrevista con Agustín Mozo Chapol.

⁹⁵ Entrevista con Pablo Ramírez López.

constituirse como un espacio para generar propuestas y acciones en torno a diferentes temas económicos, sociales, ambientales y culturales, y crear iniciativas legislativas⁹⁶.

Bajo ese marco, entre sus integrantes existe una percepción de que los procesos de organización siguen una tendencia positiva. No obstante, se reconoce que el impacto de los problemas vinculados a la falta de empleo en el campo y el agotamiento de la economía doméstica, que han provocado procesos de migración y el abandono del campo, ha afectado negativamente la capacidad de la organización:

Nosotros quisiéramos seguir organizados, verdad; pero muchos de los compas dicen: ‘no, para ir, para sufragar nuestros gastos hasta allá, hasta Jalapa, no, es imposible porque la vida esta carísima’. Y por ello [algunos] dicen, ‘no, nosotros ya no queremos nada con MAIZ, mejor nos las vemos acá solos (Entrevista con Fernando Rosas Arias).

En ese contexto, la coyuntura originada en la crisis alimentaria de 2011 (Rubio, 2013), ha afectado a los grupos campesinos e indígenas de Veracruz, deteriorando la situación económica y alimentaria de los miembros de MAIZ⁹⁷.

Con respecto a FREPOSEV, en la actualidad esta organización ya no cuenta con la misma presencia que adquirió hacia finales de la década de los ochenta y pasó de ser un instrumento para la movilización de amplios sectores sociales a un espacio para el encuentro y el hermanamiento con distintas agrupaciones como MAIZ, UCIZONI, o la AMAP (Bartra, 2012: 281).

Durante la primera década del siglo XXI, esta agrupación se ha refugiado en propuestas como el rescate de la cultura, la autoprestación de servicios de salud, la difusión de los

⁹⁶ Documento de MAIZ, dirección electrónica: <http://lavidaolamina.wordpress.com/2012/05/13/convocatoria-agenda-ciudadana-para-la-democracia-y-la-igualdad-19-de-mayo/>

⁹⁷ En el contexto de la crisis alimentario ocurrida en nuestro país en el 2011, las agrupaciones de MAIZ se manifestaron en la ciudad de Xalapa para demandar al gobierno de Fidel Herrera apoyos para la producción “...este año [2012] la cosecha de maíz y frijol disminuirá, y lo saben porque en 2011 casi no sembraron, porque los recursos fueron insuficientes para comprar la semilla y así poder plantarla [...] ya no les alcanza el dinero para comprar la bolsa con 14 kilogramos de semilla de maíz, que tiene un valor de 1 mil 370 pesos en el mercado.” Gráfico de Xalapa, 1 de marzo de 2012.

derechos de las mujeres, el fomento de la agroecología que se inclina hacia el cuidado de la naturaleza y la producción de autosubsistencia⁹⁸.

De acuerdo con la evidencia, la preservación de una forma de organización basada en elementos comunales les ha permitido la construcción de procesos organizativos en diferentes comunidades y localidades de los municipios donde opera esta organización (Pajapan, Sotepan, Mecayapan, Tatahuicapan, Hueyapan de Ocampo).

Asimismo, tanto la migración de los hombres adultos y jóvenes así como la incorporación de las mujeres en la agrupación se ha reflejado en sus esquemas de organización. Algunos de los planteamientos de la organización intentan fomentar una mayor participación de estos grupos. Por otro lado, aunque algunos de sus dirigentes relacionan la disminución de la participación, principalmente del sector de jóvenes, con los cambios en la vida cotidiana provocados por el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (teléfonos móviles y computadoras en algunos casos), no contamos con evidencia para demostrar que este fenómeno haya impulsado el debilitamiento de los esquemas de organización sociopolítica de estas agrupaciones y la disminución de la participación de los grupos rurales.

5.3 Transformación interna de la organización rural: re-territorialización y producción social de espacios de resistencia.

Uno de los supuestos de esta investigación plantea que a partir de la desestructuración el proceso de dispersión de los grupos campesinos en el espacio rural ha obligado a crear formas locales de organización sociopolítica que se basan en la cohesión interna de sus grupos. En ese sentido, se puede afirmar que en el caso de MAIZ han ocurrido algunas

⁹⁸ Entrevista con Felipe Zeferino; Entrevista con Pedro Mayo.

transformaciones al interior de la organización, lo cual ha llevado al planteamiento de nuevos esquemas de organización para impulsar la participación, como se ha mencionado más arriba. Esta transformación interna ha tenido como elementos detonantes a determinados procesos, como la exclusión laboral y económica de los grupos rurales que habitan en las zonas estudiadas.

Esto implicó que amplios sectores de la sociedad rural fueran afectados, ya que han registrado el deterioro de las unidades domésticas rurales de los grupos con los que MAIZ ha trabajado desde hace más de una década. Dicha situación ha provocado ciertas modificaciones en los procesos de organización que en la actualidad se dan con mayor frecuencia referidos a un espacio territorial, aunque sin dejar a un lado la perspectiva estatal-nacional que trata de proyectar la agrupación. En ese marco, el “...territorio que antes era sólo un espacio para la concurrencia de las actividades económicas, comenzó a fortalecerse como ámbito de relaciones” (Iglesias y Cota, 2009: 201).

Como se ha observado anteriormente, los grupos más numerosos de la organización se han concentrado en la zona Totonaca (alrededor de 400 miembros), lo cual contrasta con una menor participación existente en las zonas Sur (200 integrantes) y la zona de Los Tuxtles (cerca de 100 integrantes). Sin embargo, los grupos que se encuentran en la zona Sur y la zona de Los Tuxtles han configurado sus formas de organización en base a la cohesión interna de sus grupos basada en la identidad cultural de sus integrantes. Así, la composición étnica de algunas de las agrupaciones constituidas en esas zonas les permite tener una mayor capacidad de cohesión en asuntos relacionados con los temas socioculturales⁹⁹.

Por otra parte, en los últimos años en la zona Sur se han tenido que crear mecanismos para promover la participación en torno a las actividades de coordinación de la agrupación (por

⁹⁹ Entrevista con Modesta Fernández.

ejemplo, como la creación de más coordinaciones para las diferentes zonas en el estado de Veracruz). Según el testimonio de un dirigente, estos cambios han ocurrido en las diferentes zonas en las que la MAIZ tiene presencia:

Si, de hecho nosotros allá en el sur, bueno a nivel de la organización MAIZ tiene tres coordinaciones, bueno ahora hay cuatro, tenía tres: la del norte de Totonacapan, la de los Tuxtlas que son varios municipios cercanos y la del sur que era Jáltipan. En Jáltipan era una sola coordinación, tuvimos que hacer dos coordinaciones: la de la sierra para los pueblos de la sierra y la de abajo pa' Jáltipan...porque ya era más complicado juntarse, entonces ahí hay dos coordinaciones. Yo no sé en los Tuxtlas, pero allá tenemos dos coordinaciones de tal manera que sí nos podamos juntar y continuar las actividades que teníamos, no. A nosotros nos llevó clarísimamente. (Entrevista con Felipe Zeferino).

La conformación de una nueva forma de coordinación en algunas de las zonas donde tiene presencia la organización les ha permitido una transmisión constante de información de las comunidades a sus coordinaciones regionales, y de éstas a la coordinación estatal, permitiéndoles el asentamiento de los procesos de organización en los territorios locales.

Asimismo, la participación de los miembros en la organización en función de procesos de conciencia ha sido el eje fundamental del trabajo de la organización, puesto que se promueve la incorporación a ella a partir del interés en continuar con los procesos de gestión y autogestión de proyectos, servicios o recursos otorgados por los programas gubernamentales a partir de esta dimensión espacial.

5.3.1 Acumulación de experiencia histórica campesina e indígena de grupos organizados en municipios de Veracruz.

Este trabajo parte del supuesto de que MAIZ surgió como una desembocadura de la diversidad de movimientos y organizaciones rurales que han emergido en el territorio de Veracruz durante la etapa histórica reciente, aunque de manera más precisa a partir de

finales de la década de los noventa, se creó en función de procesos de acumulación de experiencia histórica de los grupos campesinos e indígenas.

Como se ha observado en apartados anteriores, este supuesto se ha contrastado a partir de algunos testimonios en los que se refiere la cuestión de que una parte importante de los integrantes de la agrupación formaron parte de procesos organizativos anteriormente. Estos procesos surgieron en función de determinados conflictos detonados por la forma de operar de algunas instituciones públicas y/o agentes económicos locales en coyunturas económicas particulares, que afectaron algunos campesinos provocando el deterioro de sus condiciones de reproducción social y económica, ya fuera a través del endeudamiento excesivo por la adquisición de créditos o el despojo de terrenos.

De esta manera, la conformación de algunos de sus miembros se ha constituido a partir de las experiencias de apoyo y solidaridad entre sujetos de las propias comunidades. Según el testimonio de un campesino, este elemento les ha permitido crear vínculos con otras organizaciones y construir determinados procesos organizativos que se fundan en el trabajo organizativo:

Pues hemos conocido a muchas personas de otras organizaciones, de otros lados. Hemos tenido intercambio de experiencia con otras comunidades incluso, y ha venido gente del gobierno a ver el trabajo que se está haciendo. También hemos asistido a la Ciudad de México a hacer promoción. Nos han dado espacios en radiodifusoras, entonces como que hemos tenido contacto con [otros grupos] quizá no es una organización como MAIZ, pero son otras organizaciones, otras personas. Y quizá el apoyo no es como el trabajo que hace la organización MAIZ. (Antonio Mena Velasco).

En ese sentido, la acumulación de experiencia histórica de los miembros de la organización ha favorecido la adaptación a los cambios derivados de la desestructuración socioeconómica de la estructura productiva agropecuaria en el estado de Veracruz.

Por otro lado, el tránsito por distintos procesos históricos de lucha y la construcción de espacios de resistencia desde lo local, en algunos casos, les ha permitido ampliar la visión sobre su propia situación¹⁰⁰. Este elemento se puede convertir en un referente significativo pues deja una impresión, desde una perspectiva histórica, no sólo en la vida del individuo sino también la del grupo o colectividad al que éste pertenece.

En ese sentido, la historicidad actúa como un factor importante pues se entiende como un elemento que se desarrolla en la construcción de referentes que permiten crear una pertenencia colectiva basada en una identidad social¹⁰¹. Estos aspectos son relevantes en tanto que la agrupación puede construir a partir de éstos relaciones con otros grupos y comunidades que participan, como organizaciones, en distintos espacios, y que se basan en el conocimiento de las experiencias de organización de los miembros de otras agrupaciones.

5.3.2 Actores rurales: pequeños productores, campesinos, indígenas, jornaleros sin tierra, mujeres, jóvenes y migrantes.

Los procesos señalados anteriormente han obligado a la incorporación de categorías como las de productores campesinos e indígenas, jornaleros sin tierra, mujeres, jóvenes, migrantes o excluidos rurales, se debe a que estos constituyen un conjunto diverso de sujetos cuya participación se ha vuelto relevante en función de los cambios económicos en la familia rural. Como afirma Canabal (2006): “La crisis de la economía basada en las actividades agropecuarias ha impulsado severos cambios en la vida de las familias rurales”

¹⁰⁰ Esto se observa principalmente en el caso de los dirigentes e integrantes de MAIZ y Freposev que cuentan con una trayectoria dentro de las luchas y procesos de organización sociopolítica. Muchos de ellos tienen una percepción clara acerca del papel que ha tenido la creación de procesos de organización en torno a los conflictos y problemas que han ocurrido, principalmente a nivel local o estatal en determinadas coyunturas económicas y políticas.

¹⁰¹ A partir de esa historicidad se comprende a la sociedad y la realidad, existentes dentro de un contexto espacial y temporal específico.

(Canabal, 2006: 21). En el caso particular de las mujeres: “la inestabilidad laboral, el pago de bajos sueldos, la falta de prestaciones y el nulo respeto a los derechos laborales y a sus derechos reproductivos, la ocupación por tarea o a destajo, caracterizan su inserción actual en estos mercados de trabajo.” (Canabal, 2006: 21).

A partir de estas categorías sociales la organización ha planteado ‘nuevas demandas’ de los actores rurales (como la autonomía, la recuperación del papel productivo de los productores agrícolas, las reivindicaciones contra la contaminación del ambiente o el respeto de los derechos sociales y laborales). Asimismo, la respuesta de estos sectores rurales es una muestra del alcance de los conflictos que surgen en el espacio rural.

A pesar de lo anterior, en este trabajo no se pretende crear una tipología de los miembros de esta organización o de los integrantes de los grupos organizados. Sin embargo, se pueden describir algunas de sus principales características para poder contemplar con mayor precisión el fenómeno de desestructuración campesina sobre la organización MAIZ.

Hacia el 2012 la organización MAIZ no sólo estaba integrada por productores rurales sino por distintas categorías sociales:

- Campesinos y campesinas: 60% (4,200 personas).
- De este porcentaje un 40% son mujeres que se dedican al campo o labores del hogar (1,680 personas).
- Proletarios agrícolas: 10% (700).
- Mujeres y hombres subempleados: 15% (1050 personas).
- Jóvenes: 15% (1050 personas)¹⁰².

Como se puede observar con base en las cifras anteriores, aunque la mayoría de los miembros de la organización del género masculino se dedican a actividades agrícolas

¹⁰² Datos proporcionados por Daniela Griego, miembro de la Coordinación de MAIZ.

muchas mujeres que forman parte de la organización no sólo participan en ese tipo de actividades, sino que complementan sus actividades domésticas con diversas alternativas económicas, en algunos casos de carácter informal.

En la zona de Catemaco entre los integrantes de la organización existen tanto productores rurales que se dedican al cultivo de algún producto como mujeres dedicadas al trabajo doméstico y campesino.

Para la zona Totonaca (que corresponde a los municipios de Coyutla, Mecatlán, Filomeno Mata) un porcentaje significativo de los grupos están conformados por mujeres y esto se debe a un aspecto en particular: los hombres buscan fuentes de empleo que les permitan solventar las necesidades diarias de sus hogares y las mujeres han tenido que contribuir a ese esfuerzo desde diferentes dimensiones, a causa de una situación urgente derivada de la agudización del desempleo en el espacio rural.

5.3.3 El papel de la práctica de relaciones sociales.

Uno de los elementos característicos de la resistencia que los miembros de la organización MAIZ realizan en sus comunidades se basa en la práctica de relaciones sociales orientadas a la reconfiguración de las unidades domésticas como parte del proyecto alternativo que impulsan (con base en prácticas como el trabajo colectivo o la creación de redes organizativas).

Actualmente este tipo de propuestas de funcionamiento y formas de gestión de la organización son impulsadas y dirigidas por profesionales que forman parte de asociaciones civiles como Asesoría y Servicios Rurales A.C. (ASER), la cual gestiona las peticiones de los grupos integradas por distintos sectores rurales que se sostienen principalmente con el apoyo de sus comunidades de origen.

Para el caso de Freposev, la organización se enfoca más en la capacitación y el fomento de formas de organización en función de las capacidades propias. En ese sentido, se menciona que si antes no existe una forma de organización y construcción de vínculos que vengán a constituir el eje fundamental de los grupos organizados, no podría proyectarse la organización, así como la gestión de proyectos productivos.

Por otro lado, cuando se habla de proyectos productivos se resalta la importancia de estos en cuanto a tener una base de grupo. No obstante, la capacitación se traduce en un elemento que permite la construcción de dirigencias. Desde esa perspectiva, el asunto de la organización como una red va en el sentido de que cada grupo funciona de manera autónoma e independiente; la coordinación con otros grupos y en conjunto le da esa capacidad de actuar colectivamente.

Para la organización ASER-MAIZ, en coordinación con Freposev, el trabajo no se reduce a tener éxito en cuanto a los recursos con que cuentan cada uno, sino que se enfoca en el acompañamiento configurado a partir del reconocimiento entre los grupos –un nosotros comunitario-, el cual se sustenta en los vínculos más que en los beneficios económicos obtenidos a través de los proyectos productivos. No obstante, se reconoce que es necesario tener más fuerza y abrir canales para construir nuevos vínculos, involucrar a más gente desde diferentes ámbitos.

5.3.4 Emergencia de procesos de construcción organizativa sociopolítica a partir de la cohesión interna.

La disminución de la cohesión comunitaria se ha presentado en algunas de las localidades y comunidades donde habitan los miembros de la agrupación. Como se ha planteado, diversos sujetos que pertenecen a categorías sociales distintas se han ido integrando a la

organización MAIZ, formando colectivos que se basan en un tipo de cohesión interna de la agrupación. Se trata de sectores sociales como mujeres y subempleados en diversos sectores económicos como la construcción o los servicios, así como jóvenes que habitan en las localidades rurales.

Así pues, tal y como se ha señalado más arriba, la disminución de la cohesión comunitaria en las distintas localidades y comunidades rurales debido a varios factores como la dispersión de la población o la modificación de los valores en la población joven de las comunidades, ha afectado el nivel de participación de este sector en determinados grupos organizados.

Ya hay muchos que tienen que salir y...pues hay algunos que hasta se avergüenzan de su propia cultura, de su lengua y de todo eso, principalmente los jóvenes que salen. Como los abuelos, la gente más grande pues no, ahí lo tienen bien claro que la cuestión de dónde son, la cuestión de la identidad no se pierde. (Entrevista con Fortino Martínez).

En ese sentido, como se ha señalado, el aspecto más relevante es que la composición étnica de algunos de estos grupos, principalmente de la zona Sur y algunos de la zona Totonaca, les ha permitido adquirir una mayor cohesión interna en asuntos relacionados con los temas socioeconómicos y culturales. Así pues, aunque la producción de bienes agrícolas se ha convertido en una demanda, entre otras, que intenta enfrentar la agudización de las condiciones de vida de la población rural, para algunos de los grupos pertenecientes a MAIZ aún conserva una importancia significativa no sólo como referente de identidad sino también como elemento fundamental en torno a la reproducción de las prácticas sociales y las relaciones sociales.

5.4 La forma comunidad: estructura organizativa y forma social.

Un aspecto que resalta en el discurso de distintos integrantes de MAIZ, es que el uso del concepto de organización se asocia y, en algunos casos, se confunde con el término de estructura organizada. Es decir, se concibe a la organización como la agrupación o los grupos que la conforman en sus diferentes ámbitos, más que a la forma de organización comunitaria inherente a la concepción del trabajo colectivo.

Si se observa desde una perspectiva sociológica se podría decir que la organización se reproduce de manera paralela al proceso de estructuración de la agrupación, por tanto, una dependería de la otra en una secuencia de continuidad o causalidad. No obstante, la organización y la estructura pueden tener una relación que va más allá de la causalidad, lo cual se refiere a que en el plano analítico la concepción de organización se configura a partir de los vínculos que crea la comunidad, así como la relación de comunidad que se crea en base a distintos referentes como la familia, códigos de vida y de conducta, entre otros.

En contraste, la concepción del grupo o la agrupación y sus diferentes elementos como una función o estructura, la cual puede ser rebasada o resignificada –como se mencionó anteriormente- en algunos casos puede ser reconfigurada por la organización y va más allá, en esta perspectiva sociológica.

En el caso que se ha analizado, se puede decir que la organización de algunos grupos sociales que habitan en el territorio veracruzano se funda principalmente en la comunidad, mientras sus estructuras son reproducidas a partir de los grupos locales pertenecientes a las agrupaciones campesinas que conforman MAIZ y sus distintas representaciones frente a la sociedad y ante el Estado. Esta forma de organización basada en la comunidad se emplea para resolver algunas de las necesidades que surgen en las localidades y comunidades rurales, empleando sus propios recursos sin la intervención directa del Estado.

MAIZ como tal nace, pensando precisamente en crear una alternativa organizativa dentro de las comunidades, no. Sobre todo comunidades indígenas que es donde se tiene de alguna manera cierta presencia, porque, bueno las comunidades indígenas digamos que tienen históricamente un medio propio de organizarse como tales, no. Entonces, este, digamos que hace falta rescatar ese tipo de organización social o política inclusive [...] Porque, digamos en lo social, porque como no se tienen recursos, o a veces los gobiernos no quieren invertir en esos pueblos, la comunidad tiene que organizarse para arreglar la escuelita [...]; tiene que organizarse para conseguirle, hacerle inmobiliario, aunque sea rústico, hacérselo. Que llega el maestro y no tiene donde quedarse hay que ver cómo le hacemos su casita al maestro [...]. Entonces, pero es una forma digamos organizativa propia, a través de lo tradicional que son las faenas, donde toda la gente concurre, el trabajo colectivo que es un trabajo organizativo importante. (Entrevista con Nemesio González Aranda).

Como plantean algunos miembros de la organización, la comunidad como forma social que permite la construcción de procesos organizativos a partir de referentes socioculturales, puede considerarse como la base para la creación de formas organizativas. Una de esas formas organizativas es la asamblea comunitaria, pues es una forma ya existente y que, de acuerdo con algunos integrantes de MAIZ, puede ser empleada como mecanismo social para la conformación de un proyecto sociopolítico. No obstante, esta situación se observa principalmente entre los que pertenecen a un grupo indígena, mientras que en el caso de aquellos que no lo son, estos procesos se basan principalmente en la pertenencia como miembros a la agrupación.

Como se mencionó en varias ocasiones, la situación de una gran parte de la población de las comunidades no se ha modificado y sólo gradualmente, a través de la obtención de proyectos productivos, se ha podido avanzar un poco en la consecución de sus metas de trabajo. Los procesos de organización están relacionados más con la cuestión de la construcción de vínculos a partir de las unidades familiares, que a medida que se van

ampliando y se extienden a través de la participación de nuevos grupos, pues construyen nuevas relaciones de acompañamiento colectivo.

5.4.1 Creación de dispositivos de gestión colectiva de los recursos naturales.

La capacidad de algunas comunidades de gestionar de forma autónoma ciertos recursos materiales y sociales, como la administración de recursos naturales ya sean tierra, madera, agua o algunos de carácter social como algunos órganos de decisión política como asambleas comunitarias, gestión de escuelas o clínicas salud, o para llevar a cabo prácticas de apoyo mutuo en el trabajo (como las faenas o el trabajo colectivo), se puede considerar como un proceso que ya existe, aunque poco avanzado en algunas de las localidades donde tiene presencia MAIZ. De acuerdo con algunos testimonios, este elemento permite la gestión colectiva de algunos asuntos propios de la comunidad:

...pues principalmente la asamblea general aquí en la comunidad es la máxima autoridad en cuestiones de lo que se hace aquí mismo. Ya sea que se deje algo, se decreta una reserva interna. En la asamblea si se dice vamos a hacer esto, aquí mismo se decide e incluso se ponen reglas si se va hacer vigilancia; bueno, las que al principio se acordaron de que ya no se va a cazar, ya no se va a talar, todo eso lo decidió en algún momento la misma comunidad. Todo lo que tiene que ver con la comunidad es a través de la asamblea. Y pues ya en el manejo de una parcela o en particular, cada quien decide. Es personal o si acaso se juntan uno o dos, dependiendo; pues ya se ponen de acuerdo como van a trabajar o si se ayudan. (Entrevista con Antonio Mena Velazco).

En ese contexto, aunque la población de esas localidades trata de asegurar su sobrevivencia y satisfacer determinadas necesidades materiales a través de estos mecanismos, no se ha logrado extender de manera consistente a los distintos espacios en los que tiene presencia la organización. Aunque, la organización ha apoyado a diferentes grupos con gestiones relacionadas a los recursos naturales que necesitan las localidades y comunidades rurales.

Y en otras formas nos ha ayudado, como en el caso del problema que ahorita tenemos del agua. El agua que estamos nosotros ocupando es agua sucia, porque es agua del arroyo, es agua que viene de la otra comunidad que está más arriba; estamos tratando de gestionar con MAIZ que se nos dé un apoyo para agarrar agua de los yacimientos que hay. Entonces MAIZ también está interviniendo en eso, nos está, digamos apoyando para ver si nos dan un proyecto para tomar agua limpia; porque ahorita estamos tomando el agua, pero el agua sucia que baja del otro pueblo. (Entrevista con Javier Abraham).

Además, la dispersión –que señalamos más arriba- puede permitir la creación de formas de gestión de los recursos territoriales y de autogestión política en germen, pues precinden hasta cierto punto de la gestión de las instituciones y el poder estatal, pero esto no significa que tengan la capacidad suficiente para desplegar ampliamente sus formas de organización política y económica locales.

5.5 Experiencias de organización contra la desestructuración campesina.

Como consecuencia de las modificaciones en los ejidos y comunidades agrarias, las principales demandas de algunos ejidatarios, trabajadores agrícolas, así como hombres y mujeres subempleados que participan en la agrupación, van en el sentido de preservar su condición no sólo de propietarios de la tierra, sino de productores y consumidores de los productos de la misma en un intento de conservar la autoproducción como un espacio de resistencia.

De tal manera, se debe considerar que la desestructuración tiene una dimensión territorial. Como se ha mencionado más arriba, este proceso ha condicionado la dinámica de organización de los grupos rurales a la operación de nuevas formas o esquemas de organización territorial. Por otro lado, esta desestructuración en su dimensión territorial ha provocado un proceso de dispersión que parte de una nueva forma de organización del territorio y concentración de la población en las zonas urbanas y ha favorecido la

desorganización de algunos grupos. En ese marco, un campesino entrevistado consideraba que a pesar de esa desorganización seguía existiendo la solidaridad en su comunidad cuando ocurría un acontecimiento que implicaba el apoyo de los habitantes:

Lo que si te repito es que quizá nos hemos desorganizado un poco y como te digo, cada quien mira sus propios intereses, no. Pero si se trata de que alguien se enfermara y hay que sacarlo, y no hay ningún carro, todos lo llevan en hamaca o cargando hasta Coyame; y sin importar que haya diferencias. Pues es lo que tenemos, quizá a veces nos enojamos entre personas; pero cuando se trata de la solidaridad creo que todos participamos. (Entrevista con Antonio Mena Velázquez).

En este sentido, se considera que a partir de estos elementos existe la *creación de espacios de resistencia*. De otra parte, se ha planteado que aunque la dispersión se despliega como un aislamiento también ha permitido la consolidación de grupos a nivel local. Así pues, lo que en un momento dado puede considerarse como un debilitamiento aparente del movimiento, también se puede tomar como indicio de la configuración de espacios de resistencia que van profundizando determinadas orientaciones en función de diversos actos de desafío operados, como el empleo de técnicas de agricultura diversificadas o la disminución en el uso de semillas mejoradas y como las prácticas de autoempleo en talleres de costura, que poseen un significado más allá de la simple carencia de dinero o recursos económicos y financieros, sino que representan su rechazo al predominio de las formas de control estatales que se introducen a medida que se expande el dominio del capital.

5.5.1 Creación de nuevos referentes identitarios: discursos, redes y organización popular.

De otra parte, el proceso de debilitamiento de los referentes culturales que se ha registrado en el sector de la población joven que habita en las localidades y comunidades rurales, ha generado una situación de desinterés en participar con la organización por parte de éstos

grupos. Los nuevos referentes identitarios creados por la organización MAIZ son parte de la dinámica de integración de la agrupación, para favorecer ciertos procesos de cohesión interna.

Estos referentes pueden constituirse en mecanismos para enfrentar los diversos cambios que se han registrado en el sector agropecuario y que han tenido un fuerte impacto en algunos de los ejes organizativos de la agrupación.

En ese marco, uno de los efectos de este proceso ha sido la construcción de representaciones sociales del campesinado que lo muestran como un sujeto que ocupa una baja categoría en la jerarquía socio-laboral. Esta representación –de carácter ideológico- ha sido promovida por diversos agentes sociales, entre ellos algunos pertenecientes a las instituciones de educación pública local, sobre todo debido a la falta de empleo que se registra actualmente en las actividades agropecuarias y los bajos salarios (entre \$1000 y \$2000 pesos mensuales)¹⁰³, que obtienen muchos trabajadores en algunos de sus sectores productivos.

Cada vez es más la gente que se va a la ciudad, y el campo cada vez se está viendo como algo secundario. Los jóvenes no lo ven como un medio de vida. Y lo que yo he visto es que la misma educación es la que los va sacando de ese medio de vida. Un día estaba en Catemaco, [...] y estaban un montón de compas platicando y estaban cotorreando, entre ellos estaba un maestro y dice: ‘ya mero acabas la carrera, no?’ dice; ‘pues si ya no la acabas, a lo último que terminas es de campesino’, como lo último. Entonces si un maestro dice eso, que es lo que les enseña a los niños. Al campesino se le ve como algo secundario, lo último. Y si uno ve que la gente dice eso, pues uno siente entonces que debe buscar otro empleo, no, para vestir bien, traer buenos zapatos. (Entrevista con Maximino Heraclio Medina).

Por otro lado, tales referentes identitarios se expresan principalmente a través de la dimensión cultural y étnica, que propone la recuperación no sólo de aquellas costumbres que le dan un sentido de pertenencia a los grupos o comunidades indígenas sino que

¹⁰³ Entrevista con Pablo Ramírez López.

intentan extenderlo a manera de totalidad a otros ámbitos de la existencia. Como refiere un dirigente entrevistado, estos elementos se convierten en la base para la construcción de una identidad sociocultural: “Pues porque nos dieron vida, si las costumbres no existieran no viviéramos. Si esas costumbres se hubieran roto pues nosotros...son más de quinientos años que los indígenas viven y viven por su modo de comer, su modo de [vivir] pero es que la pobreza no ayuda” (Entrevista con Pedro Mayo Alfonso).

En ese sentido, los grupos que pertenecen a MAIZ están creando una dinámica de vinculación en función de *otros referentes*, lo cual les ha permitido avanzar en diferentes terrenos aun cuando esto no se traduzca en el aumento numérico de campesinos y proletarios agrícolas participantes en la organización. No obstante, este proceso se refleja en la capacidad de incremento de la cantidad de integrantes de la organización, básicamente a partir de la ampliación de sus miembros con la incorporación de otros miembros de sus familias.

5.5.2 Proyectos productivos y desarrollo local.

La construcción de proyectos productivos y gestión colectiva de los recursos es una de las propuestas impulsadas por los grupos rurales, en el caso de diversas localidades donde tiene presencia MAIZ. Los cambios registrados en las unidades de producción campesinas muestran que las vías para la apropiación del proceso productivo no se pudieron concretar en el caso de algunas organizaciones. Básicamente, durante la etapa neoliberal se configuraron algunas formas de organización que les permiten a determinados sectores sociales, como a los pequeños campesinos, o a arrendatarios y asalariados agrícolas e

incluso a otras categorías sociales que pertenecen a la organización, formar sus propias asociaciones¹⁰⁴ y grupos organizados.

La cuestión de los proyectos productivos posee una dinámica más parecida a la forma de organización familiar, y en algunos casos gracias a la experiencia que ya tenían algunos como productores de diversos bienes, en la obtención de créditos y la gestión de programas gubernamentales, a partir de eso han podido crear pequeñas empresas, casi siempre familiares o colectivas a nivel micro, o en las cuales se involucra tanto a miembros de la organización como a familiares. En algunos casos, se han establecido tiendas comunitarias o se propone el establecimiento de estas (en ese marco, es semejante la forma de operar en la zona de Los Tuxtlas que en la zona Sur).

Así pues, existe una orientación clara por parte de la agrupación para favorecer estos elementos como parte de su proyecto económico-político.

Ahora en estos diez años han sido proyectos productivos, pero igual se va platicando con la gente sobre qué tipo de proyectos le ayudarían a su comunidad y la gestión se hace con el acompañamiento de los compás, no se gestiona nada más. Aparte, ahí está tu proyecto, no, aquí tienen que venir los compas para darle su proyecto y se evalúan, y se les da capacitación y se evalúan los proyectos. Yo creo que eso, a mí me parece interesante. (Entrevista con Felipe Zeferino).

No obstante, estos grupos plantean su inclusión a través de la constitución de proyectos que incorporan otras vías de transformación social no capitalista basadas en la auto-organización y en la autoproducción. Por lo tanto, se enmarcan en un proceso amplio de transformación interna de la misma agrupación.

¹⁰⁴ Como afirma Grammont: “En cuanto a la producción han surgido nuevas estructuras especializadas, más eficientes que el ejido, capaces de gestionar créditos, comercializar, abastecer en insumos, etc. El canal para recibir financiamiento o tramitar apoyos productivos es la empresa individual o colectiva. Si es colectiva puede agrupar a diferentes tipos de productores (ejidatarios, pequeños propietarios, agricultores, agroindustriales), a menudo de diversos tamaños, que no se identifican forzosamente con la estructura ejidal. Estas empresas son las Sociedades de Producción Rural (SPR), las Sociedades de Solidaridad Social (SSS), las Sociedades Mercantiles, las Asociaciones de Participación, las Asociaciones Regionales de Interés Social (ARIC), que no pasan ni por el ejido, ni por la Secretaría de la Reforma Agraria.” (Grammont, 1995: 121).

En ese marco, dentro de los grupos que participan con la organización FREPOSEV se han llevado a cabo también algunos proyectos de apicultura. Estos proyectos no se enfocan solamente en objetivos de carácter económico, sino que a su vez están enfocados en la dimensión ecológica y de protección del medio ambiente. Como señala una campesina:

nosotras hemos visto que es una parte muy importante en el aspecto que va de la mano con la ecología; se conserva los acahuales y se aprovecha de la floración de los montes. Es un proyecto que va de la mano [con lo ecológico]. En lo económico, pues es una entrada...no digamos que es cada mes, no; son solamente...casi abril, mayo y junio. (Entrevista con Modesta Fernández Osorio).

Propuestas como ésta, se fundan en la conformación de sociedades cooperativas que incorporan a varios grupos en una localidad. En la zona sur esto ha permitido la consolidación de algunos grupos en función de su capacidad de obtener algunos ingresos, pero basándose principalmente en el fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la cooperativa para efectuar la comercialización de su producto¹⁰⁵.

Por otra parte, algunos proyectos productivos han servido para atenuar los efectos de la desestructuración en las unidades domésticas de los miembros de la organización. En ese sentido, se trata de propuestas que van orientadas principalmente a la solución de algunas carencias económicas.

Nos ha ayudado en que nos han apoyado con proyectos, más que nada el problema aquí es la necesidad de recursos, y al ayudarnos con los proyectos resolvemos muchos problemas económicos, porque de alguna manera ya tenemos un poquito de empleo. Como ahorita tengo una granja ahí, mal o bien nos hacen falta recursos, se vende un marrano y ahí se va obteniendo el recurso; entonces sí, nos ha ayudado mucho MAIZ por ese lado. (Entrevista con Javier Abraham).

Como se señala en el testimonio, estos proyectos funcionan a manera de complemento para quienes reciben los recursos. La insuficiencia de recursos económicos o materiales que, en

¹⁰⁵ Entrevista con Modesta Fernández Osorio.

la mayoría de los casos experimentan los miembros de la organización, hasta cierto punto se puede detener con los apoyos que se gestionan a través de los proyectos productivos. Algunos de éstos, como la aportación de animales de traspatio o materias primas para cultivar y otros proyectos que se canalizan a partir de la conformación de Sociedades de Solidaridad Social o Sociedades Cooperativas, son elementos que han permitido a la agrupación mantener sus procesos de organización en el corto plazo, aunque también hace posible que puedan operar conforme a determinados objetivos enmarcados en el mediano y largo plazo.

De ese modo, una variante de las propuestas de proyectos productivos que han puesto en práctica algunos grupos también pertenecientes a la organización FREPOSEV, se ha dado a través de la capacitación de algunas mujeres en la elaboración de piezas de costura.

Sí, nosotras empezamos con una máquina, [...], iniciamos con una máquina y ahorita pues, gracias a dios, pues tenemos ya tres máquinas, porque con una no nos dábamos abasto; y pues igual, aunque tengamos las tres, pero como vamos todas en el momento que vamos costuramos, pero nos vamos turnando así por ratitos y...pues sí, hay veces le avanzamos, pero a veces no nos damos abasto a costurar lo que es, y sí, de a poco le vamos avanzando [...] Pues la meta es llegar más, un poquito más...más lejos, no; dependiendo como vayamos avanzando, ahorita pues yo veo que sí, las señoras le están echando muchas ganas, porque pues ya estamos aprendiendo a cortar lo que es la blusa, las faldas. (Entrevista con Susana Castillo Rodríguez).

Esta propuesta, que aún está en construcción, promueve la formación de grupos de mujeres para que desarrollen sus habilidades en este tipo de oficios y posteriormente puedan emplearlas para producir bienes y obtener algunos ingresos. Se trata de proyectos que se enfocan en las capacidades de estas mujeres proporcionándoles algunas herramientas para la gestión, ya que no cuentan con los recursos técnicos ni materiales para impulsar ciertos proyectos por sí mismas. Este tipo de propuestas podría extenderse a un mayor número de miembros de la organización, en el caso de las mujeres que participan, aunque requieren de

la capacitación y asesoría que ofrece la organización para gestionar la obtención de algunos recursos que les permitan obtener tanto los medios como la materia prima, para producir este tipo de bienes.

No obstante, la implementación de tales propuestas también implica algunas dificultades, debido a que los miembros de la agrupación que llevan poco tiempo dentro de ella no siempre tienen la claridad suficiente acerca de lo que se plantea con la autogestión de recursos y la ejecución de proyectos productivo-laborales. De acuerdo con el testimonio de un dirigente:

algunos proyectos han fracasado, porque, es decir, yo voy a hacer un proyecto y no pues, nos anotamos, nombran presidente, sale, sin conocernos todavía; entonces cuando ya está en marcha el proyecto, cuando llega el recurso es cuando hay problemas. Ese ha sido el principal problema de varios grupos, yo veo la diferencia de algunas organizaciones con respecto a los proyectos; por ejemplo, Freposev hace proyectos o gestionan proyectos que nacen de la necesidad de la comunidad. No son proyectos que vienen de fuera, porque a veces el gobierno te manda proyectos. Pero por lo mismo fracasan, porque no es prioritario para la gente y no le toman importancia; [piensan] 'no, pues lo vamos a agarrar por el recurso, pero no porque nos guste. Entonces, la diferencia que Freposev hace es que gestiona proyectos de acuerdo a la necesidad de la gente. Y la misma gente son de las comunidades los que dirigen a los grupos, no viene una persona de fuera y organiza a la gente; o nos llevan y nos organizan con regalos o con cosas. Yo creo que esa es la gran diferencia. (Entrevista con Fortino Martínez).

Se trata de una cuestión nodal, ya que cuando los integrantes de la organización que ingresan no comprenden el sentido de esa concepción se pueden crear situaciones de conflicto y los proyectos fracasan. Esto lleva a pensar que aunque los grupos organizados intentan acercarse a distintos sectores sociales para incorporar a más miembros, principalmente aquellos que tienen mayores carencias económicas y sociales, éstos no necesariamente estarán familiarizados con las concepciones y planteamientos programáticos o ideológicos de la organización. En muchas ocasiones, como se ha señalado

anteriormente, algunos integrantes sólo participaban en tanto receptores del beneficio de alguno de los programas gestionados por parte de la organización y después abandonaron el grupo.

5.5.3 Defensa de derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.

En cuanto a la defensa de derechos socioeconómicos, políticos, culturales, ambientales, éstos son empleados como herramientas para complementar en forma discursiva la realización de los aspectos prácticos proyectados por la organización. En ese sentido, los miembros de la organización parten de estos elementos para plantear que es posible impulsar la reorganización de los grupos sociales rurales y campesinos, aunque no necesariamente consideran que estos procesos puedan contrarrestar la importancia de los mecanismos estatales de control de los recursos materiales y productivos, así como la expansión de la privatización de la propiedad de la tierra, e incluso algunos consideren a este último proceso como favorable.

Eso nos lleva a proponer que en realidad son pocos los miembros, exceptuando a algunos integrantes junto con ciertos dirigentes de la agrupación, que dentro de la organización consideran que el proceso de penetración de estos mecanismos afecta de manera negativa a sus localidades.

Así, para algunos integrantes de la agrupación queda claro que los temas que son de interés para la población de sus localidades son aquellos de mayor urgencia. En ese marco, sus acciones se han centrado en concentrar su trabajo en torno a temas que se consideren prioritarios, aunque de ello no se deriven procesos de organización que sean permanentes. El ejemplo de un dirigente sobre el tema de la escasez del agua y la ausencia de referentes sobre la cuestión de la alimentación es indicativo de esta situación:

Ahorita en la cuestión del agua fue la mayor participación, como la cuestión es, bueno, nos incumbe a todos, pues. Lo del agua ha sido la de mayor participación. La gente va teniendo preocupación por la...por la escasez, y en el sur no solamente por la escasez, sino porque en el sur si hay pero está contaminada. Entonces, por los mismos drenajes, por la misma falta de planeación de echar los drenajes a los arroyos; entonces eso es una preocupación. La mayor preocupación ahorita es por la cuestión del agua. De la alimentación yo creo que no, la gente todavía no logra hacer conciencia de...de la alimentación; de que nos estamos alimentando mal, de que vamos al fracaso con esto de la alimentación. Es tanta la publicidad que se hace por comer cosas que no tienen...que la gente si está enajenada, ahí es contracorriente. (Entrevista con Felipe Zeferino)

5.5.4 Construcción de ciudadanía en el ámbito rural.

A diferencia de otras organizaciones, los miembros de MAIZ perciben que la organización promueve la participación colectiva de las comunidades a partir de la capacidad de autogestión de sus recursos naturales, económicos y sociales. Sin embargo, la intervención de la organización a través de constantes talleres de capacitación e información acerca de los derechos a la educación, a la salud, derechos humanos y derechos de la mujer, ha permitido a los miembros de la organización construir la noción de una construcción de ciudadanía en el ámbito rural en función del aprovechamiento de los programas de apoyo establecidos por los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal.

Como se mencionó más arriba, la situación de una gran parte de la población de las comunidades no se ha modificado y sólo gradualmente, a través de la obtención de proyectos productivos, se ha podido avanzar un poco en la consecución de metas de trabajo. Los procesos de organización están relacionados más con la cuestión de la construcción de vínculos a partir de las unidades familiares, que a medida que se van ampliando y se extienden a través de la participación de nuevos grupos, construyen nuevas relaciones de acompañamiento colectivo.

Aun así, los integrantes de la organización en diversas zonas muestran diferencias en cuanto a la práctica de una ciudadanía. En ciertos casos, como en la zona Sur, el avance se traduce en la capacitación de algunos miembros de la organización para su participación en los procesos electorales en calidad de observadores o de capacitadores de los funcionarios de las casillas (esto se llevó a cabo en el contexto de las elecciones federales de 2012). En otros casos, como en la zona Norte aún predominan ciertas prácticas clientelares con determinados grupos o partidos políticos que atrasan la construcción de una ciudadanía en los espacios rurales y abonan a la consecución de esas prácticas, lo que les resta capacidad de convertirse en actores sociales.

Conclusiones.

Los datos expuestos en este trabajo muestran que, a lo largo de poco más de una década, los miembros de la organización rural MAIZ-Veracruz han registrado los efectos de la desestructuración de sus formas productivas campesinas. La evidencia demuestra que el proceso de desestructuración económica, que ha afectado al sector agropecuario del territorio veracruzano, ha favorecido el debilitamiento de las formas de organización socioeconómica de los grupos rurales que constituyen a MAIZ. Este debilitamiento se comprueba a partir del hecho de que los miembros de la agrupación no sólo cuentan con una baja capacidad productiva, sino que también han tenido que abandonar la producción de determinados cultivos que hacia finales de la década de los noventa mantenían vigentes algunas fuentes de trabajo agrícola para la población a nivel local. Así, dicho proceso ha favorecido el agotamiento de las unidades domésticas de los miembros de esta agrupación.

Como se observa a partir de los datos estadísticos, en los municipios estudiados se expresa un proceso de precarización laboral de la población. Éste se constata a partir de los bajos niveles salariales que se presentan entre los grupos sociales que habitan en estos municipios. En ese sentido, los testimonios permiten confirmar el hecho de que el proceso de precarización laboral ha afectado a las unidades domésticas y ha impulsado la migración de algunos de los habitantes de los municipios estudiados. Esta estrategia emprendida por algunos de los miembros de la organización MAIZ, que resulta en la mayoría de los casos obligada por la carencia de recursos económicos y materiales, impide que algunos de ellos sigan participando en los procesos de organización, lo cual afecta los esquemas de incorporación de asociados de la misma.

La evidencia indica que, en la actualidad los procesos organizativos de MAIZ no se fundan únicamente en elementos de carácter económico-sectorial, sino que están entrelazados con

algunos elementos socioculturales, como la etnicidad, que están inscritos en las formas de reproducción colectiva de sus grupos.

Como se observa en los testimonios referidos en esta tesis, sí existe la presencia de un proceso de degradación de la cohesión comunitaria, que se expresa a partir de la emigración de algunos de los habitantes de las localidades y la dispersión de los grupos rurales que habitan esas zonas. Estos procesos han detonado entre los miembros de la organización MAIZ el despliegue de una cohesión interna, que se manifiesta a través de la conformación de pequeños grupos asociados a la agrupación que practican al apoyo mutuo y el trabajo colectivo.

De acuerdo con nuestro supuesto analítico, este tipo de cohesión no surge de manera espontánea en estos grupos rurales. Este mecanismo se observa en un contexto social caracterizado por la fragmentación y atomización, que han derivado de procesos de división social y establecimiento de jerarquías dentro de algunas localidades y comunidades, que favorecen la permeabilidad de los grupos rurales a la penetración de ciertas organizaciones de carácter sociopolítico. La evidencia muestra que estos procesos generan el enfrentamiento de los miembros de distintas agrupaciones sociales, en tanto que los obliga a competir por los recursos naturales, económicos o técnicos, que se pueden emplear para mejorar las condiciones de vida de éstos y su posición social, y a su vez estimulan la cohesión interna de los grupos organizados con base en los referentes mencionados anteriormente.

Existe evidencia que indica que, tanto la realización de gestiones como el impulso a la autogestión de demandas por parte de los miembros de la organización y la implementación de proyectos productivos, planteada por MAIZ, pueden ser referentes que permitan fomentar la creación de nuevos grupos organizados. A partir de testimonios se puede

constatar que los miembros de la agrupación realizan la gestión de sus propias demandas en torno a temas de educación, servicios de salud, vivienda y proyectos productivos. También muestran que las agrupaciones pertenecientes a MAIZ han impulsado proyectos productivos y de autoempleo a partir de la provisión de recursos económicos o en especie, que incluyen la dotación de animales de traspatio, la instalación de talleres de costura para mujeres o pequeñas asociaciones para la elaboración de productos basados en el uso de plantas medicinales. Se ha comprobado que existe cierto impacto económico favorable de estos proyectos sobre los miembros de la organización que los llevan a la práctica, aunque todavía es mínimo.

Los testimonios indican que entre las demandas impulsadas más recientemente por la organización MAIZ se encuentra la implementación de prácticas de cultivo basadas en la agroecología, las cuales contemplan la eliminación del uso de paquetes tecnológicos (debido a las variaciones que genera en el grado de fertilidad de la tierra, además del alto costo que representa para este tipo de productores). Éstos muestran que dicha demanda ha sido planteada a través de eventos como ferias campesinas donde se difunde el uso de fertilizantes naturales y se estimula el uso e intercambio de semillas de maíz criollo entre los propios productores. Esto demuestra la importancia que tiene la preservación de las tradiciones campesinas de cultivo en sus formas de organización, dado que les permite el reconocimiento de algunos problemas que se presentan en común para los diversos productores.

En relación a este elemento, se debe señalar que las alianzas en las que MAIZ continuaba participando después de 2012 (como su integración en la CONOC y la Campaña Sin Maíz No hay País), según lo hemos descrito en el capítulo cuatro, se han configurado alrededor de temas de carácter económico y cultural. En torno a estas alianzas se han desplegado las

acciones más recientes de MAIZ, constituidas por movilizaciones a nivel local y estatal, y principalmente a través de talleres de capacitación para los miembros de la organización.

Se puede afirmar que este tipo de agrupaciones son resultado de la adecuación de la organización a un conjunto amplio de demandas relacionadas con el marco de la vida social, económica y cultural de los grupos campesinos e indígenas que forman parte de ellas.

No se encontró evidencia que permita afirmar que la organización MAIZ se haya debilitado. Como se puede observar a partir de los testimonios, esta agrupación ha registrado un proceso de reconfiguración de sus esquemas organizativos que incluye desde sus demandas, las propuestas que plantean para la resolución de problemas de carácter local, así como las acciones colectivas emprendidas en conjunto con otras agrupaciones.

La evidencia permite afirmar que los proyectos productivos que llevan a cabo algunos miembros de la agrupación, con base en la gestión de MAIZ y su propia autogestión, han hecho posible la atenuación de algunas de las carencias económicas y materiales que experimentan las unidades domésticas de sus miembros. Lo anterior muestra que en el caso de los miembros de la organización MAIZ-Veracruz se ha podido detener, *hasta cierto punto*, los efectos del proceso de desestructuración que se han registrado en el espacio agrario de Veracruz.

Por último, nos interesa señalar algunos aspectos que no fueron considerados para el análisis, pero que podrían ser motivo de una nueva investigación partiendo de los elementos contenidos en este trabajo. Se trata, en primer lugar, del impacto económico a mediano y largo plazo de los proyectos productivos que emprenden algunos de los miembros de la agrupación. En ese sentido, según lo planteado por diversos autores, se trata de un problema acerca del tipo de enfoque que han propuesto determinadas organizaciones

rurales. El análisis de este aspecto permitiría profundizar sobre los problemas que enfrentan este tipo de organizaciones, las cuales parten de la apropiación del espacio de vida desde un enfoque territorial, y que combinan sus procesos de organización con la producción de ciertos bienes producidos y comercializados bajo esquemas que permiten obtener una parte del valor agregado.

En segundo lugar, como se observa en este trabajo, los planteamientos de la organización MAIZ-Veracruz parecen concordar con la visión de un desarrollo alternativo, que puede ser sustentable o de otro tipo, pero que se basa en los sectores campesinos e indígenas y la población rural de este territorio. Pero no se cuenta con datos para conocer el alcance de las propuestas de esta agrupación en cuanto al ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de estos individuos, en tanto que ciudadanos. Y hasta qué punto éstos pueden llegar a tomar las decisiones que afectan a sus localidades y comunidades, ya que el proceso de desestructuración socioeconómica puede profundizar la desintegración de las relaciones sociales al grado de posibilitar la descomposición del tejido social.

Por otro lado, en los municipios estudiados se observa el despliegue de cambios económicos que favorecen la ampliación de las actividades económicas del sector terciario. Este tipo de actividades ha originado el surgimiento del fenómeno de informalidad económica en los municipios estudiados, pero no se cuenta con información acerca de su extensión, profundidad y el impacto en las localidades. Tampoco se cuenta con datos sobre los mecanismos que han provocado la persistencia de bajos niveles de desarrollo económico y social en estos espacios, y qué elementos les permitirían a estas agrupaciones organizadas impulsar un proceso de desarrollo desde lo local partiendo del enfoque de la sustentabilidad.

Finalmente, la evidencia permite avanzar un poco en el análisis de las transformaciones registradas en la organización MAIZ-Veracruz. Sin embargo, no se tiene suficiente información para conocer hacia dónde se orientarán tanto los procesos organizativos de esta agrupación en el largo plazo y qué impacto tendrán sobre la población rural de los territorios en los que habitan sus asociados. De tal manera, se podría plantear un análisis de la multiplicidad de los cambios que presenta esta organización. Así como también, el tipo de sectores que pueden incorporarse a ésta considerando otro tipo de planteamientos y demandas por parte de los miembros de esta agrupación.

Fuentes consultadas.

Fuentes bibliográficas.

- Acevedo, María Luisa (1982). *Desempleo y subempleo rural en los valles centrales de Oaxaca*, Proyectos especiales de investigación INAH, México.
- Aguilar Martín y Ortiz Juan (coords.) (2011). *Historia general de Veracruz*, Gobierno del Estado de Veracruz.
- Aguirre, Teresa (2006). “América Latina en la Economía mundial. Una mirada de mediano plazo”, en de los Ríos, Norma y Sánchez Ramos, Irene (coord.). *América Latina: Historias, realidades y desafíos*. UNAM-Posgrado, México, págs. 217-262.
- Antunes, Ricardo (2005). *Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo*, Ed. Herramienta-TEL, Argentina.
- Arias Patricia (2009). *Del arraigo a la diáspora. Dilemas de la familia rural*, Ed. Miguel Ángel Porrúa.
- Ariza, Marina (2002). Migración, familia y transnacionalidad en el contexto de la globalización: algunos puntos de reflexión, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, vol. 64, octubre-diciembre, México.
- Ariza, Marina y Orlandina de Oliveira (2001). Familias en transición y marcos conceptuales en redefinición, revista *Papeles de Población*, núm. 28, abril-junio, UAEM, México.
- Ariza, Marina y Orlandina de Oliveira (2006). Familias, pobreza y desigualdad social en Latinoamérica, revista *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 22, núm. 1, El Colegio de México.
- Ayala, J., Cordera, R. et al. (1986). La crisis económica: evolución y perspectivas, en González Casanova, P. y Florescano Enrique (coord.), *México Hoy*, Ed. S XXI, México, pp. 17-94.
- Bartra Armando (1999). ‘Guerrero bronco’, Ed. Era.
- _____ (2006). *El capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida*, UACM, CEDRSSA, Itaca, México.
- _____ (2012). *Los nuevos herederos de Zapata. Campesinos en movimiento 1920-2012*. Ed. Partido de la Revolución Democrática, México.

- Bastida Muñoz, Mindahi C. (2001). *Quinientos años de resistencia: los pueblos indios de México en la actualidad. Hacia la creación de un cuarto piso de gobierno*, UAEM – Instituto Indigenista Interamericano, México.
- Bauman, Zygmunt (1975). *Fundamentos de sociología marxista*, Ed. Alberto Corazón, Madrid.
- Bellingeri, Marco (2003). *Del agrarismo armado a la guerra de los pobres: ensayos de guerrilla rural en el México contemporáneo*, Juan Pablos-Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, México.
- Bilbao, Andrés (1993). *Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera*, Ed. Trotta, Madrid.
- Bolos, Silvia (1999). *La Constitución de actores sociales y la política*, Ed. Plaza y Valdés-UIA, México.
- Burbano de Lara, Felipe (2005). La producción de lo étnico y la descomposición de la nación. El caso de Ecuador, en Escarzaga Fabiola y Gutiérrez Raquel (coords.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, Juan Pablos – BUAP, México, pp. 237-265.
- Bustos Cara, Roberto (2002). “Los sistemas territoriales. Etapas de estructuración y desestructuración en Argentina”, en *Anales de Geografía*, vol. 22, Universidad Complutense, Madrid.
- Caetano, Gerardo (2006). Distancias críticas entre ciudadanía e instituciones, en ‘Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina’, Ed. CLACSO.
- Calva, José L. (1988). *Crisis agrícola y alimentaria en México 1982-1988*, Ed. Fontamara, México, pp. 230.
- Camacho, Natalia (2001). *El movimiento campesino boliviano: Entre la resistencia y la adaptación. Culturas e identidades en América Latina y el Caribe*, CLACSO.
- Canabal, Beatriz (2006). “Y entonces, yo me quedé a cargo de todo... La mujer rural hoy”, en Canabal, Beatriz et al. (coord.), *Diversidad rural: estrategias económicas y procesos culturales*, UAM-Plaza y Valdés, México.
- Carmona Quiroz, Edith (2007). “Hueyapan, lugar donde nace el agua. Organización sociocultural y relaciones de poder en la pequeña irrigación”, en Tarrío María et al. (coord.) *Mundialización y diversidad cultural. Territorio, identidad y poder en el medio rural mexicano*, UAM-Xochimilco, México.

- Castel, Robert (1997). “La nueva cuestión social”, en *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Paidós, Argentina.
- Castel, Robert, et al. (2003). Empleo, exclusión y las nuevas cuestiones sociales, en Castel Ribert, Touraine Alain, Bunge Mario, Ianni Octavio y Giddens Anthony. *Desigualdad y globalización: cinco conferencias*, Ed. Manantial-UBA, Buenos Aires, Argentina, pp. 15-23.
- Cohen, Jeffrey (1999). *Cooperation and Community: Tequio, Cooperación, and Servicio, en Cooperation and Community. Economy and society in Oaxaca*, University of Texas Press, Austin.
- Corcuera, Santiago (2007). Derechos sociales exigibles, en Calva José Luis (coord.), *Derechos y políticas sociales*, Ed. Miguel Ángel Porrúa-UNAM, México.
- Cortés, Fernando (2000). *Procesos sociales y desigualdad económica en México*, Ed. SXXI, México.
- Cortés, Fernando y Agustín Escobar (2007). “Modelos de acumulación de capital y movilidad social: un estudio en seis ciudades mexicanas”, en Cortés, F. (coord.), *Cambio estructural y movilidad social en México*, COLMEX, México.
- Cuéllar, Óscar (1992). “Racionalidad, escasez y conflicto. Acerca de la constitución de sujetos sociales en la teoría política clásica”, en revista *Estudios Sociológicos*, vol. X.
- Dabat, A. (2010). Estado, desarrollo y crisis del neoliberalismo, en Dabat, A. *Estado y desarrollo*, IIEc-UNAM, pág. 19-64.
- Delgado, Gian Carlo (2009) “América Latina como reserva minera. Dependencia y deuda ecológica de EU”, en *Memoria*, CEMOS. Núm. 238. Octubre-noviembre.
- Del Rey Poveda, Luis (2005). “El nuevo marco de las relaciones intergeneracionales en las familias ejidales: migración y herencia en el sur de Veracruz”, en revista *Estudios Agrarios*, Procuraduría Agraria, año 11, núm. 28, México.
- De la Peña, Guillermo (2007). “Derechos indígenas y ciudadanía étnica”, en Calva, José (coord.), *Derechos y políticas sociales. Agenda para el desarrollo*, vol. 12, Miguel Ángel Porrúa – UNAM, México, p. 142-158.
- Durán, Juan M. (1988). *¿Hacia una agricultura industrial?*, Universidad de Guadalajara, México.
- Durand, Víctor (1989). *Clases y sujetos sociales: un enfoque crítico-comparativo*, IIS, México.

- Díaz Polanco, Héctor (2007). “Descontento indígena, justicia y autonomía”, en Calva, José (coord.), *Derechos y políticas sociales. Agenda para el desarrollo*, vol. 12, Miguel Ángel Porrúa – UNAM, México, p. 129-141.
- Espinosa Damián, Gisela (2000). “Campesinos y ciudadanos en Guerrero”, en Bartra A. (coord.), *Crónicas del sur. Utopías campesinas en Guerrero* Ed. Era, México.
- Feder, Ernest (1978). *Violencia y despojo del campesino: Latifundismo y explotación capitalista en América Latina*, Siglo XXI, México.
- Fox Jonathan, (2005). “El sur en el norte: la emergente sociedad civil migrante”, Ponencia para el Coloquio Internacional Imperio y resistencias, UAM.
- Fox Jonathan, Gaspar Rivera (Coord.) (2004), *Indígenas mexicanos migrantes en los Estados Unidos*, Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrúa, UAZ, Cámara de Diputados LIX Legislatura, The University of California.
- Gabriel, Leo y Gilberto López y Rivas (coords.). *Autonomías indígenas en América Latina: nuevas formas de convivencia política*, Ed. Ludwig Boltzmann Institut – UAM-I, Plaza y Valdés, México, 2005.
- García, Adriana (2010). El trabajo infantil en los campos agrícolas de fresa en Zamora, Michoacán. Estudio de caso 2007, en Mestries Benquet Francis (coord.), *Los excluidos de la modernización rural: migrantes, jornaleros, indígenas y pequeños productores*, UAM-Azacapotzalco – Ediciones Eón, México, págs. 111-126.
- García, Carlos (2000). “Inventario de las organizaciones campesinas”, en Bartra A. (coord.), *Crónicas del sur. Utopías campesinas en Guerrero*, Ed. Era, México.
- García, Feliciano (2011). Economía veracruzana del siglo XX, en Aguilar Sánchez Martín y Ortiz Escamilla Juan (coords.), *Historia general de Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz*, México, pp. 485-539.
- García, Manuel (2008). “El mercado interno y el destino de la reforma agraria”, en en Acosta Irma (coord.), *Desafíos de la sociedad rural al despuntar el siglo XXI. Economía y política*, Ed. UAZ, Zacatecas.
- García, Rodolfo y Juan Manuel Padilla (2002). “Crisis rural y emigración internacional: ¿hacia la transnacionalización de las comunidades o la desertificación demográfica del campo de Zacatecas?”, en Rubio Blanca et al. (comp.), *Reestructuración productiva, comercialización y reorganización de la fuerza de trabajo agrícola en América Latina*, Ed. IICA-Plaza y Valdés, México.
- García Linera, A. (2008). *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Ed. CLACSO.

- Giménez, Gilberto (2000). “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, en Valenzuela, José (coord.). *Decadencia y auge de las identidades. Cultura nacional, identidad cultural y modernización*, COLEF-Plaza y Valdés, México.
- Gómez Carpinteiro, Francisco (2011). No sujetos de estado. Luchas por la no legibilidad, en *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*, vol. XVII, núm. 50, enero-abril, pp. 293-314.
- Gómez-Jara, Francisco (1988). *El movimiento campesino en México*, Ed. CEHAM-SRA, México.
- González Casanova, Pablo (1969). *La democracia en México*, ERA, México.
- González Rey, Fernando (2007). Investigación cualitativa y subjetividad: los procesos de construcción de la información, McGraw-Hill Interamericana, México, pp. 156.
- Guzmán, Elsa (2006). “Seguridad y movilidad. Estrategias campesinas en el poniente de Morelos”, en Canabal, Beatriz et al. (coord.), *Diversidad rural: estrategias económicas y procesos culturales*, UAM-Plaza y Valdés, México.
- Grammont, Hubert (1995). “Nuevos actores y formas de representación social en el campo”, en Prud’homme, Jean François (coord.), *El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano*, ILET-Plaza y Valdez, México, pp. 105-167.
- _____ (2001). *El Barzón: clase media, ciudadanía y democracia*, Plaza y Valdés – UNAM, México.
- Harvey David (2008). “El neoliberalismo como destrucción creativa”, en *Memoria, CEMOS*, N°232, agosto-septiembre, 2008.
- Hernández, Luis (1992). UNORCA; doce tesis sobre el nuevo liderazgo campesino en México, en Moguel Julio, Botey Carlota y Hernández Luis (coords.), *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural, Siglo XXI/CEHAM*, México, pp. 55-76.
- Hirsch, J. (2002). *El Estado nacional de competencia*, UAM-Xochimilco.
- Ibarra, David (2007). “Derechos humanos y realidades sociales”, en Calva José Luis (coord.), *Derechos y políticas sociales. Agenda para el desarrollo*, vol. 12, Miguel Ángel Porrúa-UNAM, México, p. 19-46.
- Iglesias, Esther y Muñoz-Cota, José (2010). “La desterritorialización del Estado mexicano: 1976-2009”, en Dabat A. (coord.), *Estado y Desarrollo*, IIEc-UNAM.
- Kay, Cristóbal (2009). “Estudios rurales en América Latina en el período de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad?”, en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 71, núm. 4, octubre-diciembre.

- Klein, Emilio (1992). *El empleo rural no agrícola en América Latina*, OIT, Chile.
- Lara Sara (1996). “Mercado de trabajo rural y organización laboral en el campo mexicano”, en Grammont, H. *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*, Plaza y Valdés – UNAM, México, p. 69-112.
- Lara Sara y Grammont Hubert C. (1999). “Reestructuración productiva y mercado de trabajo rural en las empresas hortícolas”, en Grammont, Hubert (coord.), *Empresas, reestructuración productiva y empleo en la agricultura mexicana*, UNAM – Plaza y Valdés, México, págs. 23-69.
- Larroa Torres, Rosa María (2010). “Ixhuatlán del café: un territorio en disputa”, en Torres Salcido, Gerardo y Rosa María Larroa (coords.), *Sistemas agroalimentarios localizados. Identidad territorial, construcción de capital social e instituciones*, UNAM-CEIICH, Juan Pablos, México, pp. 271-301.
- Lefebvre, Henri (1973). *Contra los tecnócratas*, Granica Editor, Argentina, 182 pp.
- Lichtensztein, Samuel. “De las políticas de estabilización a las políticas de ajuste”, revista *Economía de América Latina*, CIDE, México, 1er Semestre, 1984.
- López, Luis (2004). Cambios de la estructura ocupacional en las zonas rurales mexicanas vinculadas al fenómeno de la migración transnacional hacia EE.UU., en Giarraca Norma y Bettina Levy (coord.), *Ruralidades Latinoamericanas. Identidades y luchas sociales*, CLACSO.
- López Bárcenas, Francisco (2005). *Los movimientos indígenas en México*. Rostros y caminos, Ed. MC.
- López y Rivas, Gilberto (2004). *Autonomías: democracia o contrainsurgencia*, ERA, México.
- Marañón, Boris (1998). “La expansión de la agroexportación no tradicional en América Latina”, en Torres, Felipe (coord.), *El sector agropecuario mexicano después del colapso económico*, UNAM-Plaza y Valdés, México, págs. 293-308.
- Martínez Espinoza, Manuel (2006). “Las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles del movimiento zapatista: fundamentos analíticos para entender el fenómeno”, en Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, vol. 5, núm. 1, Universidad de Santiago de Compostela, pp. 215-233.
- McMichael, Philip (1998). “Reconsiderar la globalización: otra vez la cuestión agraria”, en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 61, núm. 4, octubre-diciembre, pp. 3-31.

-Mercado Mondragón, J. (2010). “Migración, cambio cultural e identitario en dos zonas indígenas. Estudio de caso en dos comunidades: Zinacantán, Chiapas, y San Juanico, Hidalgo”, en Mestries, F. *Los excluidos de la modernización rural*, Ed. Eon.

- Mestries, Francis (2009). Reformas neoliberales, globalización y migración internacional en Veracruz, en Rubio Blanca y Aragonés Ana María, *Nuevas causas de la migración en México en el contexto de la globalización: tendencias y perspectivas a inicios del nuevo siglo*, Plaza y Valdés – UNAM, México, pp. 211-240.

- _____ (2010), La tercera vida de El Barzón o la reconversión de una organización de deudores a una de productores, en Mestries, Francis (coord.). *Los excluidos de la modernización rural: migrantes, jornaleros, indígenas y pequeños productores*, Ed. Eon.

-Moguel Julio (1992). "Crisis del capital y reorganización productiva en el medio rural", en Moguel Julio, Botey Carlota y Hernández Luis (coords.), *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, Siglo XXI/CEHAM, México, pp. 15-24.

- _____ (1997). “La vía campesina de desarrollo en México (crisis del modelo *farmer*, pervivencia y reproducción del modelo indio-comunitario)”, en Zermeño, Sergio (comp.), *Movimientos sociales e identidades colectivas. México en la década de los noventa*, Ed. La Jornada – CEIICH, México, pp. 109-123.

-Moguel, Julio (1998). “Las reformas rurales salinistas: ¿Vía de desestructuración de la organización campesina? (1991-1994)”, en Moguel Julio (coord.), *Propiedad y organización rural en el México moderno. Reformas agrarias, movimiento rural y el PROCEDA*, Ed. Juan Pablos-UNAM, México.

-Moguel, Julio (2011). “Crisis del capital y reorganización productiva en el medio rural (notas para la discusión sobre los pros, contras y asegunes de la ‘apropiación del proceso productivo’)”, en Linck Thierry, Moguel Julio y Ramírez Alfredo, *Economía popular y proceso de patrimonialización*, Juan Pablos, México, pp. 45-58.

-Moguel, Julio y Robles, Rosario (1990). “Los nuevos movimientos rurales, por la tierra y por la apropiación del ciclo productivo”, en Moguel Julio (coord.), *Historia de la cuestión agraria mexicana*, vol. 9 (Los tiempos de la crisis 1970-1982, 2da. Parte), Siglo XXI – CEHAM, pp. 377-450.

-Osorio, Jaime (2009). *Explotación redoblada y actualidad de la revolución*, UAM – Itaca, México.

-Paré, Luisa (1996). Experiencia de gestión municipal y comunitaria de los recursos naturales en el sur de Veracruz, en Paré Luisa y Martha Sánchez (coord.), *El ropaje de la tierra. Naturaleza y cultura en cinco zonas rurales*, UNAM-Plaza y Valdés, México.

- Paz Sánchez, Fernando (1968). 'Problemas y perspectivas del desarrollo agrícola', en Stavenhagen, R. et al. *Neolatifundismo y explotación*, Ed. Nuestro tiempo, México.
- _____ (2003). *La economía agrícola mexicana ¿sin campesinos?*, Facultad de Contaduría y Administración- UNAM, México.
- Pérez Silva, Ángel (2005). *Movimiento indígena y política: Una aproximación al estudio del movimiento indígena en Veracruz (1992-2002)*. Tesis inédita de Maestría en Sociología, Universidad Iberoamericana, México.
- Pozas Horcasitas, Ricardo (1999). "La modernidad desbordada", en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 61, núm. 1, enero-marzo, IIS-UNAM, México, pp. 149-175.
- Puricelli, Sonia (2010). *El movimiento El campo no aguanta más. Auge, contradicciones y declive (México 2002-2004)*, Ed. Plaza y Valdés-UAZ, México.
- Puyana, Alicia (2004). *Dispersión y marginalidad de la población en el estado de Puebla*, Serie Avances de investigación y aportes metodológicos 4, FLACSO, México.
- Quesnel André y Alberto del Rey (2005). La construcción de una economía familiar de archipiélago. Movilidad y recomposición de las relaciones intergeneracionales en el medio rural mexicano, en revista *Estudios demográficos y urbanos*, vol. 20, núm. 2.
- Quispe Limaylla, Aníbal (2001). *Experiencias de vinculación de proyectos de desarrollo rural con programas estatales: logros, limitaciones, retos y oportunidades*, Colegio de Postgraduados, México.
- Rello, Fernando y Yolanda Trápaga (2001). *Libre mercado y agricultura: Efectos de la Ronda de Uruguay en Costa Rica y México*, Serie Estudios y perspectivas no. 7, CEPAL, México.
- Robles, Héctor (2008). *Saldos de las reformas al artículo 27 constitucional*, Ed. CDRSSA.
- Robles, Héctor y Luciano Concheiro (2004). *Entre las fábulas y la realidad: los ejidos y comunidades con población indígena*, Ed. UAM-Xochimilco- CDPI, México.
- Rodríguez, Hipólito (2007). "La movilidad ocupacional en la ciudad de Veracruz", en Cortés Fernando, Escobar Latapí, Agustín y Solís Patricio (coords.), *Cambio estructural y movilidad social en México*, El Colegio de México.
- _____ (2011). "Historia ambiental de Veracruz", en Aguilar Sánchez Martín y Ortiz Escamilla Juan (coords.), *Historia General de Veracruz*. Gobierno del Estado de Veracruz, México, pp. 549-605.

- Rubio, Blanca (1987). *Resistencia campesina y explotación rural en México*, Ed. Era, México.
- _____ (1996). “Las organizaciones independientes en México: semblanzas de las opciones campesinas ante el proyecto neoliberal”, en Grammont, H. *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*, Plaza y Valdés – UNAM, México, p. 113-164.
- _____ (1999). “Reestructuración productiva en la agricultura latinoamericana: las nuevas tendencias hacia la globalización”, en Grammont Hubert (coord.), *Empresas, reestructuración productiva y empleo en la agricultura mexicana*, UNAM – Plaza y Valdés, México, pp. 261-305.
- _____ (2001). *Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*, Ed. Plaza y Valdés.
- _____ (2004). “El sector agropecuario mexicano en los años noventa: subordinación desestructurante y nueva fase productiva”, en Rubio Blanca (coord.), en *El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio*, UNAM – Plaza y Valdés, México, pp. 17-48.
- _____ (2006). “Balance rural del sexenio de Vicente Fox Quesada. La ruta de la continuidad”, en *Rumbo Rural*, año 2, núm. 5, septiembre-diciembre, CDRSSA, México.
- _____ (2006). “Voces de la desesperanza: la desestructuración alimentaria en México (2000-2004)”, en revista *Gaceta Laboral*, vol. 12, núm. 1, Universidad del Zulia-Venezuela.
- _____ (coord.) (2009). *El impacto de las crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos en México 2008-2009*, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales – INDESOL – Cámara de Diputados, México.
- _____ (2009b). “La desvalorización de los bienes alimentarios y la migración rural en México (1993-2007)”, en Rubio Blanca y Aragonés Ana María, *Nuevas causas de la migración en México en el contexto de la globalización: tendencias y perspectivas a inicios del nuevo siglo*, Plaza y Valdés – UNAM, México, pp. 189-210.
- _____ (2011). “La nueva fase de la crisis alimentaria”, en *Mundo Siglo XXI*, vol. VI, núm. 24, pp. 21-32.
- Sánchez Albarrán A. (2010). “Migración internacional y capital social en la región de Atlacomulco, Edo. de México”, en Mestries Benquet Francis (coord.), *Los excluidos de la modernización rural: migrantes, jornaleros, indígenas y pequeños productores*, UAM-Azcapotzalco – Ediciones Eón, México.

- Schwentenius, Rita y Manuel Gómez (1999). “Política agrícola hacia el siglo XXI. Procampo y Alianza para el Campo en el contexto internacional,” en *Estudios Agrarios*, año 5, no. 13, sep-dic, Procuraduría Agraria, México, pp. 61-82.
- Semo, Enrique. “Modernización desde arriba y revolución”, en *Memoria*, CEMOS, Núm. 243, junio, 2010.
- Skerrit, David (2011). “Tierra y sociedad en el siglo XX”, en Aguilar Sánchez Martín y Ortiz Escamilla Juan (coords.), *Historia general de Veracruz*. Gobierno del Estado de Veracruz, México, pp. 455-483.
- Stavenhagen, Rodolfo (1968). ‘Aspectos sociales de la estructura agraria en México’, en Stavenhagen R. et al. *Neolatifundismo y explotación*, Ed. Nuestro tiempo, México.
- Tilly, Charles (2000). *La desigualdad persistente*, Ed. Manantial, Buenos Aires.
- Torres, Gabriel (1998). “El discurso de la modernización agropecuaria y las estrategias de las organizaciones campesinas emergentes”, en Zendejas Sergio y Pieter de Vries (eds.), *Las disputas por el México rural: transformaciones de prácticas, identidades y proyectos*, vol. 1 Actores y campos sociales, Ed. El Colegio de Michoacán, México.
- Torres Salcido, Gerardo, Javier Sanz Cañada y José Muchnik (2012). Territorios, desarrollo rural y capital social. Claves e interrogantes sobre los sistemas agroalimentarios localizados, en Torres Salcido, Gerardo, Javier Sanz Cañada y José Muchnik (coords.), *Territorios rurales. Pobreza, acción colectiva y multifuncionalidad*, UNAM, México, pp. 7-41.
- Torres Torres, Felipe (2006). “Los espacios de reserva y el desarrollo regional”, en Torres Torres Felipe y José Gasca Zamora (coords.), *Los espacios de reserva en la expansión global del capital. El sur-sureste mexicano de cara al Plan Puebla-Panamá*, IIEC-UNAM, Plaza y Valdés, pp. 21-65.
- Turriza, José (2008). “Campesinado y control estatal en el neoliberalismo mexicano”, en Acosta Irma (coord.), *Desafíos de la sociedad rural al despuntar el siglo XXI. Economía y política*, Ed. UAZ, Zacatecas.
- Valenzuela Feijóo, José (2006). *México 2006: ¿una crisis mayor? Economía, Política, Elecciones*, Ed. CEDA, México.
- Valenzuela Feijóo, José (1986). *El capitalismo mexicano en los ochenta*, ERA, México.
- Verduzco, Gustavo (2007). “Trayectorias laborales de habitantes rurales: un estudio de caso en una zona del centro de México”, en Cortés Fernando, Escobar Latapí, Agustín y Solís Patricio (coords.), *Cambio estructural y movilidad social en México*, El Colegio de México.

- Vera, Ramón (1998). “La construcción del Congreso Nacional Indígena”, en Hernández Luis y Vera Ramón (comp.), *Acuerdos de San Andrés*, ERA, México, p. 33-48.
- Vilas, Carlos (1995). Actores, sujetos y movimientos ¿Dónde quedaron las clases?, *Revista Sociológica*, año 10, núm. 28, mayo-agosto, UAM-Azcapotzalco.
- Quijano, Aníbal (2006). “El ‘movimiento indígena’ y las cuestiones pendientes en América Latina”, en *Argumentos*, año 19, núm. 50, UAM-Xochimilco, México, p. 51-77.
- Wallerstein, Immanuel y Smith Joan (2004). Las unidades domésticas como instituciones de la economía-mundo, en Wallerstein, I. *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos: un análisis de sistemas mundo*, Akal, Madrid.
- Zárate Vidal, Margarita (1998). *En busca de la comunidad: Identidades recreadas y organización campesina en Michoacán*, UAM-I – El Colegio de Michoacán, México.
- Zendejas Sergio y Pieter de Vries (eds.) (1998). *Las disputas por el México rural: transformaciones de prácticas, identidades y proyectos*, vol. 1 Actores y campos sociales, Ed. El Colegio de Michoacán, México.
- Zibechi, Raúl (2007). *Dispersar el Poder*, Ed. Abya-Yala, Ecuador.

Fuentes estadísticas.

- Comisión Nacional de Salarios Mínimos [CONASAMI]. Salario mínimo en el área geográfica B. Consulta en línea. Dirección electrónica: <http://www.conasami.gob.mx/>. Consultado el 13 de septiembre de 2014.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL] (2013). Dirección electrónica: <http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx>. Consultada el 27 de octubre de 2013.
- Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2010). Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010. Dirección electrónica: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio. Consultada el 30 de junio de 2011.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2012). Anuario Estadístico del Estado de Veracruz. Consultado el 23 de julio de 2013.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2000). Censo General de Población y Vivienda 2000. Consulta en línea. Consultado el 26 de octubre de 2013.

-INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta en línea. Consultado el 27 de octubre de 2013.

-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo [ENOE] (2013). Consulta interactiva de datos (Infolaboral). Tasas de Informalidad Laboral. Consultado el 14 de noviembre de 2013.

-INEGI. Censo Agropecuario 2001. Censo Ejidal 2001. Consulta interactiva de datos. Consultada el 16 de julio de 2013.

-INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009. Versión CD.

-INEGI (2013). Sistema de Cuentas Nacionales de México.

-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA] (2014). Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. Consultado el 14 de noviembre de 2013.

Fuentes electrónicas.

-Algranati, Clara y Taddei, Emilio (2011). Tras una década de luchas. Realidades y desafíos de los proyectos de cambio en Nuestra América, Revista *Herramienta*, núm. 46 [en línea]. Disponible en: <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-46/tras-una-decada-de-luchas-realidades-y-desafios-de-los-proyectos-de-cambio/>. Consultado el 26 de julio de 2012.

-Documento de MAIZ [en línea]. Disponible en: <http://lavidaolamina.wordpress.com/2012/05/13/convocatoria-agenda-ciudadana-para-la-democracia-y-la-igualdad-19-de-mayo/>, Consultado el 13 de septiembre de 2012.

-Garavito Elías, Rosa Albina (2001). “Notas sobre las fuentes de la ganancia en el nuevo patrón de acumulación, 1982-2001”. Revista *Análisis Económico*. UAM. Vol. XVI, Núm. 34, segundo semestre. [en línea] Disponible en: <http://www.analysiseconomico.com.mx/pdf/3406.pdf>. Consultada el 26 de noviembre de 2012.

-Mapa de zonas del estado de Veracruz [en línea]. Disponible en: <http://montenegroeditores.com.mx>. Recuperado el 14 de enero de 2014.

-Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Veracruz. Página de internet de la organización. Disponible en:

http://maiz.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=179:c2&catid=55:ver. Consultado el 18 de agosto de 2013.

-OCDE. 2006. *Política agropecuaria y pesquera en México: logros recientes, continuación de las reformas* [en línea]. Disponible en: <http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/5306064E.PDF>. Consultado el 15 de octubre de 2012.

-Rauber, Isabel. *Los dilemas del sujeto. Movimiento social y organización política en América Latina* [en línea]. Serie Lógicas en conflicto. CLACSO. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/if/marx/documentos/22/Los%20Dilemas%20del%20Sujeto.pdf>. Consultado el 12 de mayo de 2012.

-Teorema ambiental. *Las entrañas de las organizaciones campesinas*, Revista digital [en línea], 1 de abril de 2003. Disponible en: <http://www.teorema.com.mx/legislacionambiental/las-entranas-de-las-organizaciones-campesinas/>. Consultado el 23 de julio de 2013.

Fuentes hemerográficas.

El Universal, 18 de febrero de 2003.

Gráfico de Xalapa, 1 de marzo de 2012

La Jornada, 15 de marzo de 2002.

La Jornada, 14 de julio de 2002.

La Jornada, Acusan a autoridades de minimizar desastre por las heladas en el norte, 17 de febrero de 2011.

Archivos

-Archivo de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Veracruz. Consultado en las oficinas de MAIZ-ASER, en la Ciudad de Xalapa durante agosto de 2011 y abril de 2013.

Testimonios.

-Entrevista realizada con Daniela Griego vía correo electrónico, respondida el 23 de julio de 2013.

- Testimonio de Agustín Mozo Chapol, entrevistado el 12 de octubre de 2012.
- Testimonio de Agustina Sánchez Pérez, entrevistada el 17 de enero de 2012.
- Testimonio de Ana Santez Pérez, entrevistada el 19 de enero de 2012.
- Testimonio de Ángel Pérez Silva, entrevistado el 23 de agosto de 2012.
- Testimonio de Antonio Mena Velazco, entrevistado el 3 de enero de 2012.
- Testimonio de Carmen Velázquez Galicia, entrevistada el 12 de octubre de 2011.
- Testimonio de Enrique Galmich, entrevistado el 12 de octubre de 2011.
- Testimonio de Felipe Zeferino, entrevistado el 12 de octubre de 2011.
- Testimonio de Fortino Martínez, entrevistado el 13 de enero de 2012.
- Testimonio de Israel Medina Mena, entrevistado el 3 de enero de 2012.
- Testimonio de Javier Abraham Cortés, entrevistado el 4 de enero de 2012.
- Testimonio de Nemesio González Aranda, entrevistado el 12 de octubre de 2011.
- Testimonio Nicolás Cruz Pablo, entrevistado el 14 de enero de 2012.
- Testimonio de Maximino Heraclio Medina, entrevistado el 3 de enero de 2012.
- Testimonio de Maximino Pascual Cervantes, entrevistado el 10 de enero de 2012.
- Testimonio de Modesta Fernández Osorio, entrevistada el 9 de enero de 2012.
- Testimonio de Pablo Ramírez López, entrevistado el 10 de enero de 2012.
- Testimonio de Paula Antonio García, entrevistada el 16 de enero de 2012.
- Testimonio de Pedro Mayo Alfonso, entrevistado el 9 de enero de 2012.
- Testimonio de Susana Castillo Rodríguez, entrevistada el 9 de enero de 2012.
- Testimonio de Venaias Mendoza, entrevistado el 12 de enero de 2012.

Anexo

Cuestionario para entrevista de miembros de la organización MAIZ (**Productores agrícolas y habitantes de las comunidades**).

Preguntas antecedentes:

¿Cuál es su nombre?

¿En dónde vive?

¿Cuál es su empleo?

¿Cuánto tiempo ha participado en la organización?

-¿Usted cree que hace 10 años había más familias que vivían del campo que ahora?

-De los alimentos que consume, ¿cuáles produce en su parcela? y ¿cuáles compra en el mercado?

-¿De su familia cuántos miembros trabajan?, ¿han tenido otro empleo antes?

¿Algún familiar suyo ha migrado?, ¿a dónde se fue y desde hace cuánto tiempo?

-¿Usted ha sabido de gente que abandone sus casas o tierras para irse a vivir a la ciudad o otra parte?

-¿Usted cree que ahora la gente de la comunidad esté menos unida para resolver problemas que hace 10 años?

- ¿Cuántos hombres y mujeres conoce usted que se organicen en la comunidad?, ¿cuántos eran cuando usted empezó a participar en la organización (o hace 10 años)?

- ¿Usted que piensa del trabajo de MAIZ para favorecer el autoempleo, la autogestión en las comunidades o la organización para gestionar problemas en común?

-¿Cómo se organiza la comunidad en relación a sus costumbres?

- ¿Cómo le han beneficiado los proyectos productivos?

- ¿La comunidad decide como se usan las tierras y bosques? o ¿decide qué hacer cuando necesita una escuela o biblioteca?

-¿Cree usted que la gente de la comunidad ejerce más su derecho a la salud, o a la educación, o a decidir donde vive y labora, que hace 10 años?

-¿Usted considera que la organización ha ayudado a la comunidad a defender esos derechos?

-¿Considera que la organización ha ayudado a su comunidad a organizarse 'más' que hace 10 años?

-¿Conoce a personas en la comunidad que hayan abandonado su parcela por falta de ingresos para cultivar?

-¿Cree usted que actualmente hay más empleos en la construcción, o en labores por jornal en el campo, que hace 10 o 15 años?

-¿Cuáles son los recursos económicos (ingreso, máquinas) con que cuenta su familia?, ¿tiene los mismos recursos que tenía hace 10 años?

-¿Usted cree que si las familias tuvieran más tierra y recursos estarían más organizadas?

- ¿Cómo es (o era) la gente de la comunidad cuando trabaja (ban) en el campo?, ¿se unían más o menos?

-¿A usted el trabajo en el campo le hace (o le hacía) sentirse más unido con otras personas de su comunidad?

-¿Usted sabe de algún grupo u organización que se haya dividido o separado?, ¿considera que la separación fue por la falta de arraigo y de empleo entre los integrantes?

- ¿La comunidad ha participado antes con otra organización?, ¿qué experiencia le dejó esa participación?

- ¿Usted considera que la organización podría unirse con otros grupos organizados?

- ¿En su comunidad se practica el tequio o algún tipo de trabajo colectivo?, ¿considera que el trabajo colectivo sirve de apoyo para las familias y de qué forma?

-¿Cree usted que las familias puedan volver a unirse si las comunidades se organizan?

-¿Cree usted que si la comunidad decidiera (o decide) sobre el uso del agua, los bosques, las escuelas o los alimentos que consume, reduciría algunas carencias de las familias?

- ¿Usted cree que la organización fomenta la participación de los agricultores o jornaleros y sus familias?

-¿Considera usted que los proyectos productivos les permitan a las comunidades tener mayor capacidad para decidir sobre sus condiciones laborales y de vida?

Cuestionario para entrevista de **informantes clave** de la organización MAIZ.

Preguntas antecedentes:

¿Cuál es su nombre?

¿En dónde vive?

¿Cuál es su empleo?

¿Cuánto tiempo ha participado en la organización?

-¿Considera que la falta de empleo en el campo ha reducido la creación de procesos organizativos?

-¿Cree usted que el desgaste de la economía familiar afecta la capacidad organizativa del movimiento?

- ¿Qué tan fuerte es el contacto entre campesinos de diferentes comunidades?

- ¿Cuántos colectivos o grupos integran la organización?

- ¿Qué tan importante es la presencia de la organización en esta zona?

- ¿Qué tanto participa la población en las acciones que convoca la organización?

- ¿La forma de organización que propone MAIZ en las comunidades es diferente a otras?

- ¿Qué tan importante es la decisión de las comunidades para MAIZ, en cuanto a la organización colectiva?

- ¿Considera que MAIZ fomenta la decisión colectiva de la comunidad para usar sus recursos?

- ¿Cómo ha ayudado MAIZ a las comunidades a conocer y ejercer sus derechos ciudadanos?

- ¿Qué importancia tiene en la propuesta de MAIZ conservar las costumbres y derechos culturales y ambientales de las comunidades?

- ¿Cree que se pueda reorganizar a las comunidades del campo?

-¿Cree que la situación de abandono del campo ha afectado negativamente la forma en como se organiza la gente de las comunidades?

- ¿Cree que en la actualidad la población está menos arraigada a sus comunidades que antes?
- ¿Usted considera que ahora se han diversificado más las labores agrícolas?
- ¿Cuál ha sido su experiencia en la organización de las comunidades?
- ¿Considera que las experiencias de organización de las comunidades que participan con MAIZ, ayudan a consolidar los procesos de organización social?
- ¿Cómo han sido los intentos por parte de MAIZ, para unirse con otras organizaciones?
- ¿Usted cree que el trabajo colectivo realizado dentro de la comunidad pueda ser un referente para relacionarla con otras organizaciones?
- ¿Cree que haya posibilidad de reconstruir la economía doméstica a partir de la organización comunitaria?, ¿cuál es su experiencia?
- ¿Piensa que la autogestión permita a las comunidades atenuar la carencia de recursos productivos o enfrentar la falta de empleo en el campo?
- ¿Considera que MAIZ puede construir una organización más amplia que fomente la participación colectiva de diferentes comunidades?
- ¿Cree usted que la construcción de una organización más amplia incida en la inclusión laboral y productiva de las familias campesinas?